

MEMORIA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

2020

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema



MEMORIA DE LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS 2020

1

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA CIR

1 Introducción 21

2 Principales cambios normativos 21

3 Desarrollos recientes 23

3.1 En el ámbito de la información que se ha de remitir a la CIR 23

3.2 En el ámbito de los datos que se han de remitir al BCE 26

4 La CIR en 2020 27

Recuadro

1.1 Aplicación de los nuevos procedimientos de conciliación y de solicitud de aclaraciones a las entidades 25

2

PRINCIPALES MAGNITUDES

1 Introducción 33

2 Distribución de los riesgos según las características del titular 34

3 Distribución de los riesgos según las características de las operaciones 42

4 Información de las medidas por el COVID-19 50

3

USOS DE LA INFORMACIÓN DE LA CIR Y EJERCICIO DE DERECHOS POR LOS TITULARES DE RIESGO

- 1 **Introducción** 57
- 2 **Información de retorno a las entidades** 57
- 3 **Derecho de acceso de los ciudadanos a su información registrada en la CIR (informes de riesgos)** 62
- 4 **Derecho de rectificación o de supresión (reclamaciones de los acreditados)** 66
- 5 **Usos por el Banco de España** 75
- 6 **Otros usuarios institucionales** 78

Recuadros

- 3.1 La CIR y los avales ICO 61
- 3.2 Alcance del ejercicio de los derechos de rectificación y/o supresión de datos declarados a la CIR 68
- 3.3 El uso de los datos de la CIR en los trabajos estadísticos que desarrolla la Central de Balances del Banco de España 77

4

OTROS TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA CIR

- 1 **Introducción** 83
- 2 **Evolución de los proyectos AnaCredit y RIAD durante 2020** 83
- 3 **Información granular sobre las carteras de valores** 85
- 4 **Próximos desarrollos en la CIR** 87

Recuadro

- 4.1 Impacto de la OM de crédito revolvente en la CIR 89

Anejos

- 1 Relación de variables que se han de declarar a la CIR según la Circular 1/2013 95
- 2 Antecedentes históricos y legislación vigente sobre la CIR 99
- 3 Temas de interés tratados en anteriores memorias de la CIR 118
- Índice de imágenes 119
- Publicaciones del Banco de España 121

ÍNDICE DE CUADROS

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1.1 | Información declarada a la CIR y AnaCredit (reportes «primario» y «secundario») 28 | 2.16 | Distribución de las operaciones e importe, por tramos del importe dispuesto de la operación. Sociedades no financieras residentes 49 |
| 1.2 | Personal de la División de CIR y Otros Microdatos 28 | 2.17 | Distribución de las operaciones e importe, por canal de contratación 49 |
| 2.1 | Distribución de las entidades, informes, operaciones e importe, por tipo de entidad 33 | 2.18 | Operaciones acogidas a medidas COVID-19. SNF y personas físicas residentes 51 |
| 2.2 | Distribución de las operaciones e importe, por tipo de entidad y tipo de producto 35 | 2.19 | Distribución de las operaciones e importe, por tramos del importe dispuesto. Personas físicas, hogares e ISFLSH. Medidas COVID-19 51 |
| 2.3 | Distribución de los deudores, operaciones e importe, por naturaleza y por residencia del deudor 35 | 2.20 | Operaciones con garantía del Estado COVID-19. SNF. Entidades de crédito y EFC 52 |
| 2.4 | Distribución de los deudores, operaciones e importe, por sector institucional. Deudores residentes 37 | 2.21 | Operaciones con garantía del Estado COVID-19. SNF. Distribución por el importe dispuesto en la operación 53 |
| 2.5 | Distribución por actividad (CNAE). Deudores residentes. Sociedades no financieras 38 | 3.1 | Informes a las entidades, acreditados y otros 60 |
| 2.6 | Distribución de los deudores, operaciones e importe, por número de entidades en las que el titular tiene operaciones. Deudores sociedades no financieras residentes 40 | 3.2 | Reclamaciones recibidas. Distribución por canal de presentación. 2020 70 |
| 2.7 | Distribución de los deudores, operaciones e importe, por número de entidades en las que el titular tiene operaciones. Hogares e ISFLSH residentes 41 | 3.3 | Reclamaciones tramitadas. Distribución por tipo de entidad y reclamantes. 2020 72 |
| 2.8 | Distribución de las operaciones e importe, por tipo de producto. Entidades de crédito y EFC 42 | 3.4 | Reclamaciones aceptadas. Distribución por motivo de la reclamación 73 |
| 2.9 | Distribución de las operaciones e importe, por moneda 43 | 3.5 | Reclamaciones resueltas. Distribución por tipo de entidad y resolución 73 |
| 2.10 | Distribución por comunidades autónomas en las que se realiza la inversión. Deudores residentes. SNF y hogares e ISFLSH 44 | 3.6 | Reclamaciones resueltas. Distribución por motivo de la reclamación y resolución 74 |
| 2.11 | Distribución de las operaciones e importe, por plazo residual 45 | 3.7 | Reclamaciones resueltas. Distribución por años y tipo de resolución 74 |
| 2.12 | Distribución de las operaciones e importe, por tipo de garantía real 46 | | |
| 2.13 | Distribución de las operaciones e importe, por modalidad del tipo de interés 47 | | |
| 2.14 | Distribución de las operaciones e importe, por esquema de amortización de las operaciones 48 | | |
| 2.15 | Distribución de las operaciones e importe, por tramos del importe dispuesto de la operación. Hogares e ISFLSH residentes 48 | | |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

- 2.1 Distribución del importe dispuesto 36
- 2.2 Distribución de los deudores, operaciones e importe, por sector institucional. Deudores residentes 37
- 2.3 Distribución por actividad (CNAE). Deudores residentes. Sociedades no financieras 39
- 2.4 Distribución por tamaño de la empresa. Deudores residentes. Sociedades no financieras 39
- 2.5 Distribución de los deudores, operaciones e importe, por número de entidades con las que opera el deudor. Sociedades no financieras residentes 40
- 2.6 Distribución de los deudores, operaciones e importe, por número de entidades con las que opera el deudor. Hogares e ISFLSH residentes 41
- 2.7 Distribución del riesgo total, por tipo de producto. Importe dispuesto 43
- 2.8 Distribución del importe de las operaciones, por plazo residual 45

- 3.1 Informes puntuales a las entidades y a los titulares 66
- 3.2 Número de reclamaciones 70
- 3.3 Reclamaciones recibidas (media diaria) 70

ÍNDICE DE ESQUEMAS

- 3.1 Detalle de los informes de riesgos 64

Presentación del gobernador Pablo Hernández de Cos



La crisis sanitaria del COVID-19 ha generado un fuerte impacto en la actividad económica y financiera, con amplias repercusiones sobre la sociedad. El tipo de perturbación, su globalidad y su severidad han exigido una respuesta muy contundente de las distintas autoridades económicas con el objetivo de mitigar el impacto y la persistencia de la crisis. Para el diseño, desarrollo y ejecución de las distintas medidas aprobadas ha resultado crucial contar, en tiempo real, con información económica y financiera precisa. En estas circunstancias, la información ofrecida por la Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España, cuya Memoria se presenta aquí, ha revelado su enorme valor, y se ha constituido en una herramienta esencial de análisis y de gestión para entidades y autoridades.

Así, la información de la CIR ha desempeñado un papel relevante en el apoyo al diseño *ex ante* y a la valoración *ex post* de distintas medidas aplicadas durante la crisis. A efectos ilustrativos, la información de la CIR ha sido fundamental para que el Banco de España pudiera elaborar estimaciones del impacto de la crisis sobre el sector empresarial, tanto en términos de las necesidades de liquidez generadas como del impacto sobre la solvencia. Dichas estimaciones han servido para ayudar a calibrar programas públicos tan importantes como los relativos a las garantías concedidas por el ICO a la financiación de las empresas, los de recapitalización empresarial o los de ayudas directas.

Resulta también destacable la capacidad mostrada por esta fuente de información para adaptarse a nuevas necesidades y requerimientos derivados de la crisis, con el concurso de las entidades financieras. En particular, durante el 2020, en la información regular que mensualmente remiten a la CIR las entidades declarantes, se establecieron nuevos requerimientos sobre los préstamos acogidos a medidas de moratoria o sobre los préstamos para los que se hubieran solicitado avales del Estado. De esta forma, se ha podido analizar el alcance de estas medidas, la evolución de estas operaciones y las potenciales implicaciones para las entidades.

La información de la CIR ha resultado fundamental no solo para el diseño de esas medidas, sino también para su ejecución. Es el caso de su papel en la determinación de la elegibilidad de los préstamos para los avales del ICO, que exigió una modificación de la información que se envía desde la CIR a las entidades para

facilitar el rápido despliegue de este programa. En este mismo sentido, hay que destacar el acceso a los informes de la CIR concedido al ICO, de forma que este pudiera verificar y ejecutar rápidamente el aval en situaciones de incumplimiento de las obligaciones financieras de los acreditados.

Por otra parte, con carácter general, la gran riqueza informativa de esta base de datos ha hecho que, durante los últimos años, los datos de la CIR hayan sido objeto de creciente interés, tanto por los investigadores y usuarios internos del Banco de España como por analistas y organismos externos, de los que se han recibido numerosas peticiones de acceso. El Banco de España, consciente de este interés y de la enorme utilidad de esta información, ha decidido poner en marcha dos iniciativas de enorme calado. Estas iniciativas se enmarcan en el contexto de nuestro Plan Estratégico 2020-2024 y nos van a permitir materializar el compromiso que públicamente adquirí al comienzo de mi mandato como gobernador¹: poner a disposición de la comunidad académica e investigadora la valiosa información con la que cuenta el Banco de España que legalmente sea susceptible de ser compartida. Este compromiso responde a nuestro convencimiento de que es fundamental poner a disposición de la comunidad investigadora la información estadística y administrativa de las instituciones públicas, para mejorar el conocimiento sobre la realidad económica y financiera de nuestro país y para el diseño y la evaluación de las políticas públicas. De esta manera, el Banco de España pretende liderar con el ejemplo la prosecución de este objetivo.

En primer lugar, se ha establecido una iniciativa específica para la implantación a medio plazo de una plataforma tecnológica moderna que permita que la recogida, el tratamiento y el análisis de la información se produzca de forma integrada y flexible, mediante el uso de tecnologías *big data*. La utilización de estas nuevas tecnologías permitirá mejorar la disponibilidad de los microdatos de la CIR, incorporando mayores capacidades de análisis y seguimiento, tanto individualizado

¹ Pablo Hernández de Cos (2018), «Welcome address. Second Annual Research Conference of Banco de España», disponible en <https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/hdc030918en.pdf>.

como a escala agregada, de las condiciones de concesión y perfil de riesgo de las operaciones de crédito.

En segundo lugar, se ha empezado a trabajar en el objetivo de incorporar los datos de la CIR al denominado Laboratorio de Datos del Banco de España (BELab), que, desde 2019, facilita el acceso de la comunidad investigadora a microdatos de alta calidad recopilados por la institución. Dado el alto nivel de protección de los datos suministrados, su difusión se hará de manera anonimizada, de forma que los investigadores no puedan identificar, directa o indirectamente, ni a los acreditados ni a las entidades declarantes. Asimismo, dada la complejidad de la información y de las tareas que hay que desarrollar para su inserción, la incorporación de los datos de la CIR al BELab se efectuará de forma escalonada, con una primera fase, prevista para finales de este año, en la que se incluirá un subconjunto de información relativo a las personas jurídicas. La experiencia acumulada tras esta primera etapa permitirá ampliar la cantidad de información disponible e, incluso, reconfigurar el modelo de cesión al BELab. En este sentido, las opiniones de los investigadores que utilicen la información serán de gran utilidad para el desarrollo y la implantación de la iniciativa.

Finalmente, quería destacar que, a pesar de las dificultades que han supuesto operativamente las restricciones derivadas de la pandemia, tanto las entidades declarantes como el Banco de España hemos sido capaces de adaptarnos a la nueva situación, consiguiendo prestar el servicio público esencial que implica la CIR. Esto ha sido posible gracias al trabajo de todos los implicados para superar los retrasos iniciales en los trámites que requerían una presencia física de los ciudadanos titulares de riesgos en las instalaciones del Banco de España. Esto exigió realizar cambios operativos en el funcionamiento de la CIR, con el objetivo último de agilizar todos los procesos.

En suma, considero que las actuaciones desarrolladas por el Banco de España en relación con la CIR a lo largo de 2020 son un buen ejemplo de cómo llevar al terreno práctico la visión plasmada en nuestro Plan Estratégico 2020-2024 de ser un banco central de referencia, dinámico y comprometido con la sociedad.

Pablo Hernández de Cos

Gobernador del Banco de España

Introducción

En esta Memoria se exponen los aspectos más destacados de la actividad de la Central de Información de Riesgos (CIR) en el año 2020 y se presenta la información remitida por las entidades declarantes conforme a los criterios establecidos por la normativa en vigor. Parte de esta información se remite mensualmente al Banco Central Europeo (BCE) para que forme parte de la base de datos AnaCredit. Adicionalmente, la Memoria da cuenta de las principales cifras de actividad de la CIR en su vertiente más vinculada a su condición de servicio público, lo que comprende la provisión de informes de riesgos a hogares y a empresas, la tramitación de reclamaciones iniciadas por titulares o el acceso a la información de la CIR por terceros. La utilidad de la información de la CIR va mucho más allá, al ser un *input* fundamental para la supervisión de la estabilidad financiera, para el estudio de los mecanismos de transmisión de la política macroprudencial y de la política monetaria, y para el diseño de las políticas públicas, como ha puesto especialmente de manifiesto la crisis asociada a la pandemia de COVID-19. En este sentido, su combinación con otras bases de datos proporciona a la CIR un contenido informativo enorme para el desarrollo de las tareas que tiene encomendadas el Banco de España.

2020 fue un año especialmente complejo para la CIR. En primer lugar, en el ámbito normativo, durante 2020 fue preciso adaptar la normativa de la CIR a los cambios que introdujo la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolving. Estas enmiendas se introdujeron a través de la Circular 1/2021, sobre la Central de Información de Riesgos, que fue publicada el 30 de enero de este año. Además, hubo que implementar diversos cambios en el funcionamiento derivados de la aprobación de la Circular 1/2020, publicada en enero 2020, para recoger los cambios derivados de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Por último, también hubo que poner en marcha, con carácter extraordinario y urgente, diversas medidas de *reporting* tomadas en el ámbito de la CIR, ante las circunstancias excepcionales generadas por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19.

El capítulo 1, sobre antecedentes y evolución de la CIR, hace un breve repaso de los desarrollos normativos más destacados y resume las principales características de la información que remiten las entidades declarantes. El capítulo incluye un recuadro que describe el marco de control de calidad que se aplica a los datos que remiten las entidades declarantes a la CIR, dedicado este año a los nuevos procedimientos de conciliación y solicitud de aclaraciones a las entidades.

El capítulo 2, sobre principales magnitudes, presenta los rasgos básicos de la información sobre los riesgos crediticios registrados en la CIR, distinguiendo

entre los titulares de riesgo (distribución entre residentes y no residentes o entre personas físicas y jurídicas) y las operaciones a través de las que se instrumenta la financiación (tipo de producto, plazo residual del préstamo, tipo de garantía, esquema de amortización, etc.) Dado el mayor peso de las entidades de crédito y de los establecimientos financieros de crédito como entidades declarantes a la CIR, y de los préstamos y valores representativos de deuda como instrumentos a través de los que se canaliza el riesgo de crédito, la mayor parte de la información que se presenta en este capítulo se refiere a estos agregados. Este año se ha incluido un nuevo epígrafe que presenta los datos disponibles en la CIR sobre las medidas que se han puesto en marcha para hacer frente al impacto económico y social generado por la pandemia (líneas de avales del Estado y moratorias).

El capítulo 3, sobre usos de la información de la CIR, resume la información que la CIR pone a disposición de las entidades declarantes y la que ofrece a los acreditados, y proporciona información detallada sobre la evolución de las reclamaciones efectuadas por estos últimos. Con carácter general, los informes de riesgos que la CIR proporciona a quien lo solicite son una herramienta muy práctica para acreditar el historial crediticio de empresas y de hogares. Adicionalmente, el capítulo 3 describe la utilización de la CIR por el Banco de España para el cumplimiento de sus funciones, así como su utilidad para otros usuarios institucionales. El capítulo incluye tres recuadros. El primero detalla las funciones que ha desempeñado la CIR en la concesión de los avales del ICO; el segundo describe el alcance del ejercicio, por los titulares, de los derechos de rectificación y supresión de los datos declarados a la CIR, y, por último, el tercero detalla el uso de la CIR por la Central de Balances del Banco de España.

El capítulo 4 repasa otros temas que cobraron particular relevancia en 2020. En primer lugar, resume los últimos desarrollos del proyecto AnaCredit, tanto en relación con los datos de identificación de los titulares de los préstamos como en su vertiente de operaciones crediticias. Además, se describe el proceso seguido para determinar que esta base de datos cumple con los criterios mínimos de calidad para su puesta a disposición de los usuarios del Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), lo que se está produciendo de manera paulatina desde el segundo trimestre de 2020. En segundo lugar, se describe la información granular que las entidades declaran a la CIR sobre las carteras de valores. Por último, se hace una breve descripción del registro en la CIR de las operaciones sujetas a medidas especiales derivadas del COVID-19. El capítulo incluye un recuadro sobre los cambios que introduce en la CIR la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, parte de los cuales ya están en vigor y el resto habrá de incorporarse en 2022.

La Memoria incluye tres anejos. En el primero se detalla la relación de variables que se han de declarar a la CIR según la Circular 1/2013, indicando cuáles corresponden a requerimientos de AnaCredit. El segundo resume los antecedentes

históricos y la legislación vigente sobre la CIR. El tercero relaciona los asuntos que monográficamente se han ido cubriendo en las memorias de la CIR de los cinco últimos años.

Durante 2020, el Banco de España ha continuado con la estrategia de simplificación y racionalización de la información regulatoria que solicita a las entidades que supervisa, con el doble objetivo de aliviar la carga informativa y de mejorar su gestión por las entidades y por el propio Banco de España. En el centro de esta estrategia se encuentra alcanzar mejoras sustanciales en la calidad de los datos. En este contexto, el grupo transversal interno creado en 2019 para verificar de forma sistemática la coherencia de los datos remitidos ha intensificado su trabajo para mejorar y estandarizar los sistemas de control y la información intercambiada entre el Banco de España y las entidades declarantes sobre la calidad y el cumplimiento de los requerimientos de información.

Esta Memoria pone de manifiesto que la CIR es un producto vivo, que se encuentra en un proceso de crecimiento y de renovación permanente, tanto en cuanto al volumen de información que incorpora y que se pone a disposición de los usuarios como al estricto control de la calidad que requiere para que esta información sea útil. La CIR es un elemento clave para analizar la efectividad de muchas de las medidas adoptadas y poder, de esa forma, graduar su implementación. Además, el objetivo del Banco de España es seguir aumentando y mejorando la información que reciben las entidades sobre sus clientes actuales o potenciales. Esto solo puede redundar en unas decisiones mejor informadas, lo cual es un requisito imprescindible para garantizar la estabilidad financiera del conjunto del sistema.



1

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA CIR

OBJETIVO

Disponer de información para que las entidades evalúen la solvencia de los prestatarios y el Banco de España desarrolle sus funciones (supervisión micro- y macroprudencial, estabilidad del sistema financiero, etc.)

COVID-19

Se ha adaptado la información de la CIR para recopilar nuevos atributos que han permitido el seguimiento y la evaluación de las medidas —avales y moratorias— mitigadoras de los efectos del COVID-19

MÁS INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES...

La Circular 1/2021 ha reducido a 1.000 euros (antes, 9.000) el umbral de retorno de información a las entidades...

... Y ANTES

... y la CIR devuelve esa información diez días antes: el 21 de cada mes

Ambos cambios contribuyen a mejorar las herramientas de las entidades para gestionar su riesgo de crédito

NUEVAS ENTIDADES DECLARANTES

Dos nuevos tipos de entidades declarantes: prestamistas inmobiliarios y entidades de crédito en régimen de libre prestación de servicios

Incorporación a lo largo de 2020 y 2021

AnaCredit

En 2020 se envió al BCE información de 175 entidades declarantes, sobre más de 600.000 personas jurídicas y 3,4 millones de operaciones

1 Introducción

La CIR recopila información sobre el riesgo crediticio que sus entidades financieras declarantes (entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, principalmente) mantienen con sus prestatarios, ya sean personas físicas o jurídicas.

La CIR tiene dos funciones fundamentales. Por un lado, proporcionar a las entidades declarantes información de los riesgos crediticios totales (tanto en la propia entidad como en el resto de las entidades declarantes) de sus clientes y de posibles nuevos acreditados para que puedan analizar el riesgo de sus operaciones. Por otro, facilitar el ejercicio de la supervisión y de la inspección por parte del Banco de España y el desempeño de las restantes funciones que tiene legalmente atribuidas. Entre estas, destacan la elaboración de estadísticas, la realización de estudios sobre temas bajo la responsabilidad de la institución y el asesoramiento al Gobierno en otras cuestiones.

En este capítulo se hace un breve repaso de los antecedentes, de los últimos cambios normativos y de los desarrollos en el último año. Con este objetivo, el capítulo se organiza en tres epígrafes, además de esta introducción. En el siguiente epígrafe se menciona la evolución regulatoria de la CIR, con especial mención a los requerimientos de información derivados de la normativa extraordinaria dictada para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia de COVID-19, y se recuerdan las principales características de la información que remiten las entidades declarantes tanto en el marco de la CIR como en el ámbito más específico de AnaCredit. En el tercer epígrafe se resumen los desarrollos más recientes y se incluye un recuadro que describe la implementación del nuevo procedimiento de conciliación y solicitud de aclaraciones a las entidades en el marco del control de calidad aplicado a los datos recibidos en la CIR. Finalmente, en el último epígrafe se presentan los principales datos de la CIR en 2020 y se describe brevemente su organización y los recursos con los que cuenta el Banco de España para gestionarla.

2 Principales cambios normativos

La CIR ha ido evolucionando desde su implantación¹ en 1962, adaptando y mejorando su diseño y el ámbito de aplicación a través de sucesivas circulares

¹ Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización y reorganización del Banco de España, desarrollado por la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1963, sobre organización y funcionamiento de la Central de Información de Riesgos.

del Banco de España o de normas de rango superior. Los hitos que quizás resulte más relevante recordar son la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, que actualizó el marco jurídico² de la CIR y le confirió naturaleza de servicio público. Asimismo, en 2013 se publicó la Circular del Banco de España 1/2013, sobre la Central de Información de Riesgos (en adelante, CIR 2013), que regula la CIR actualmente en vigor y que estableció la obligación de declarar los riesgos operación a operación, en lugar de en forma agregada por cliente, como se venía haciendo hasta entonces. Cinco años más tarde, en 2018, entró en vigor el Reglamento³ de AnaCredit (*Analytical Credit Dataset*), que es la base de datos crediticios del Eurosistema. Estos nuevos requerimientos se incorporaron en la Circular 1/2017⁴, solicitándose información adicional sobre otras personas jurídicas relacionadas con los titulares de riesgo directo o indirecto, así como sobre las operaciones de préstamo de las entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras (por ejemplo, tipos de interés, mayor detalle de las garantías o información prudencial). En 2019, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, llevó a incluir como entidades declarantes a la CIR a las entidades de crédito que operen en España en régimen de libre prestación de servicios y a los prestamistas inmobiliarios, y también se habilitó el acceso de los intermediarios de crédito inmobiliario a los informes de riesgos de los acreditados. Estas últimas modificaciones se plasmaron en la Circular 1/2020.

En 2021 también se han introducido cambios normativos de gran calado en la CIR. En concreto, la Circular 1/2021, publicada en enero de este año, adapta la Circular 1/2013 a los cambios introducidos por la OM de crédito revolviente⁵ e introduce los requerimientos de información derivados de la normativa extraordinaria dictada para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia de COVID-19. Los principales cambios incorporados por la Circular 1/2021 como consecuencia de la OM de crédito revolviente son la reducción del umbral para el retorno de la información de riesgos a las entidades, el establecimiento del 21 de cada mes como la fecha límite en la que Banco de España ha de hacer disponibles los informes de riesgos a las entidades declarantes y una nueva ampliación del perímetro de las entidades declarantes a la CIR, que ahora incluye a las entidades de pago y a las de dinero electrónico (para más detalle, véase el recuadro 4.1).

Una tarea muy destacada de la CIR ha sido la recogida de información para el seguimiento de las operaciones afectadas por las medidas extraordinarias

2 Esta ley derogó el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, y la Orden Ministerial de 13 de febrero de 1963.

3 Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13).

4 Para un mayor detalle de la integración de la información requerida por AnaCredit en el esquema de información de la CIR, véanse el epígrafe 1.3 y el esquema 1.1 de la *Memoria de la CIR 2017*.

5 Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolviente, y por la que se modifican la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos; la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

articuladas para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia de COVID-19. La situación excepcional creada por la pandemia provocada por el COVID-19 ha hecho necesario habilitar distintas medidas de índole financiera para mitigar su impacto económico. Estas medidas se han articulado en diferentes reales decretos-leyes⁶ que facilitan las condiciones de financiación de personas físicas, empresas y autónomos mediante la instrumentación de moratorias y avales públicos, y a través de moratorias privadas promovidas por asociaciones de entidades. Para dar cumplimiento a las obligaciones de información que imponían dichos reales decretos leyes a los prestamistas, facilitar el análisis y seguimiento de las operaciones y apoyar las labores de supervisión del Banco de España, mediante la Circular 1/2021 se solicitó a las entidades declarantes el envío a la CIR de determinada información relativa a las características de los préstamos afectados por las mencionadas medidas. La información granular que recoge la CIR se ha revelado fundamental para calibrar el tamaño de los programas y orientar su diseño *ex ante*, y también para valorar su eficacia *ex post*.

3 Desarrollos recientes

3.1 En el ámbito de la información que se ha de remitir a la CIR

Tras la entrada en vigor de la Circular 1/2020, se ha producido la paulatina incorporación a la CIR, como nuevas entidades declarantes, de los prestamistas inmobiliarios y de las entidades de crédito en régimen de libre prestación de servicios. Dadas la dispar naturaleza de estos nuevos agentes y su falta de experiencia en el reporte regulatorio, su incorporación no ha estado exenta de dificultades. Es un proceso gradual, que requiere un acompañamiento didáctico para guiarles en la preparación y remisión de la información y que continúa en 2021. En el momento de publicar esta Memoria, 80 prestamistas inmobiliarios están dados de alta en la CIR, lo que supone un aumento de más del 30 % respecto a las entidades declarantes existentes hasta la incorporación de estas nuevas entidades. No obstante, únicamente 38 han enviado datos durante 2020.

En 2020 hubo que modificar los sistemas y aplicaciones para que las entidades pudieran remitir e incluir en la CIR la nueva información sobre los préstamos acogidos a medidas de moratoria o para los que se hubieran solicitado

⁶ Los reales decretos-leyes que han afectado directamente a la información que se ha de reportar en la CIR son: el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo; el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda; el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y, en materia tributaria, y el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19.

avales del Estado. Esta información —fundamental para el seguimiento de dichas operaciones— requirió la introducción de nuevas variables y valores en el esquema de información de la CIR, que las entidades han debido incorporar a las operaciones declaradas y ha precisado una monitorización constante. Esto ha supuesto un esfuerzo importante tanto para las entidades declarantes como para los analistas de la CIR. Los análisis realizados por los usuarios del Banco de España han contribuido significativamente a alinear los datos y a detectar problemas de calidad, que han sido corregidos.

En el ámbito de la mejora de la calidad, en relación con los datos de las contrapartes, en 2020 se ha continuado con la mejora de los controles establecidos en años anteriores. Los contrastes con fuentes internas del Banco de España (como la Central de Balances o la base de datos de Sectorización de la Economía Española) o con fuentes externas (como el Registro Mercantil) permiten enriquecer y actualizar la información sobre las contrapartes de las operaciones de riesgo. Esto es particularmente relevante para completar los datos que plantean más problemas para las entidades declarantes, como el código de identificación de la entidad matriz inmediata, la fecha de incoación del procedimiento legal, la fecha del tamaño de la empresa, el número de empleados o la cifra de balance total.

Además, en este período se ha habilitado el acceso a los Servicios de Verificación y Consulta de Datos de Identidad (SVDI)⁷, lo que facilita la comprobación de la identificación correcta de los titulares que sean personas físicas. Esta novedad ha mejorado la capacidad de detectar titulares incorrectamente identificados, bien por cambios de identificador (ciudadanos con NIE que posteriormente obtienen un DNI) que no han sido comunicados por las entidades declarantes, o incluso por falsificaciones de documentos de identidad.

La identificación unívoca de las contrapartes no residentes sigue siendo compleja en un contexto plurinacional, como es el caso de AnaCredit. El repositorio común del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) para los datos de identificación es la base de datos RIAD⁸ (*Register of Institutions and Affiliates Data*). Varios bancos centrales nacionales pueden enviar a RIAD información sobre un mismo titular, y la identificación y los datos de referencia deben ser coherentes. En el ámbito de la información de riesgos, la correcta identificación de los deudores es especialmente relevante para evitar duplicar información o una incorrecta asignación de los riesgos. En este contexto, los procedimientos puestos en marcha en 2020 y el trabajo desarrollado por los analistas

7 Este servicio permite, a través de la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), consultar o verificar los datos de identidad de un ciudadano. La validación de dichos datos se realiza contra las bases de datos del organismo que los custodia: la Dirección General de la Policía.

8 El recuadro 4.2 de la *Memoria de la CIR 2018* presenta una descripción detallada de esta base de datos y de sus características.

APLICACIÓN DE LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS ENTIDADES

El proceso de control de calidad de la información que se remite a la CIR incluye, entre otras actuaciones, la comparación de los datos operación a operación (información granular) con los datos agregados que se reportan en los estados financieros. Estos contrastes se basan en la idea de que los datos de la CIR son un «inventario» de la información agregada y de que, por tanto, pueden ser utilizados para replicar la estructura y el contenido de los estados financieros. Estos controles permiten detectar posibles discrepancias en la información remitida por las entidades por distintos cauces, ya sean originados en las declaraciones de la CIR o en los datos agregados. Para una descripción más detallada, véase el recuadro 1.1, «Conciliación de la información granular y la información agregada», de la *Memoria de la CIR 2019*.

En octubre de 2020 se puso en marcha una nueva fase del procedimiento de conciliación gestionada por un grupo transversal interno compuesto por expertos de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución y de la dirección general de Supervisión, si bien otras direcciones generales usuarias de la CIR también están comenzando a participar en estos trabajos. El proceso de conciliación se generaliza para todas las entidades, aunque la periodicidad del seguimiento difiere en función del grado de discrepancias encontradas. La CIR remite a las entidades las diferencias encontradas entre la información granular y la agregada, con un inventario de las operaciones afectadas y un análisis de los principales problemas detectados. Las entidades han de analizar la información para explicar las diferencias, que pueden ser metodológicas, errores de interpretación o deberse a problemas en el reporte. La comunicación con las entidades se realiza mediante unas plantillas estandarizadas que facilitan la comunicación y el seguimiento de las respuestas. El grupo transversal analiza las contestaciones de las entidades y, si es necesario, aclara las dudas metodológicas o de reporte para que se corrijan los datos.

En esta fase, la conciliación se está realizando trimestralmente para los datos de exposiciones de préstamos y créditos por sectores, con el detalle de préstamos dudosos, y semestralmente para los activos adjudicados y recibidos en pago de deudas.

Para los préstamos, el nuevo procedimiento de conciliación se ha realizado con los datos de junio, septiembre y diciembre, y se han enviado 334 plantillas a 191 entidades (de las 250 que envían información a la CIR). La conciliación de los datos de activos adjudicados se ha enviado para los datos de junio y diciembre, para lo que se han enviado 33 plantillas a 22 entidades (de las 92 entidades que envían estos datos).

Adicionalmente, se ha adoptado el mismo enfoque para determinadas campañas específicas, como la completitud de datos que se han de enviar a AnaCredit, en la que se pidieron aclaraciones o correcciones a 10 entidades y que permitió una reducción relevante en las diferencias entre los datos granulares (enviados a AnaCredit) y los agregados (Estados UEM enviados al Banco Central Europeo como parte de los requerimientos estadísticos).

Por otro lado, para los datos de las contrapartes, se están realizando controles mensuales similares para que las entidades corrijan o expliquen las razones por las que reportan titulares con problemas de identificación. Esto ha supuesto el envío de información detallada y solicitar correcciones o aclaraciones a 143 entidades.

Estos controles de calidad son complementarios a los que se aplican regularmente a la recepción mensual de los datos. Adicionalmente, esta nueva metodología ha permitido sistematizar la comunicación a las entidades de los problemas encontrados y el seguimiento de sus correcciones y respuestas, facilitándoles criterios para priorizar sus acciones correctoras. Todo ello ha redundado en una notable mejora en la calidad de la información granular que recopila la CIR.

de la CIR han permitido aumentar la detección de duplicidades y de asignaciones incorrectas, en un proceso continuo y constante de mejora de la información. Es necesario destacar que, en 2020, se han intensificado los trabajos para la correcta identificación de estos titulares no residentes, declarados en su día de manera incompleta y que es preciso revisar para garantizar la coherencia de la información.

En paralelo, se ha profundizado en la implementación de controles de calidad⁹ de la información sobre operaciones de riesgo y sus garantías, lo que se ha reflejado en una mejora de los datos. Estos controles se articulan en distintos niveles y comienzan con las validaciones automáticas realizadas en la lectura de las declaraciones de las entidades. Una vez incorporados a la base de datos, los analistas examinan la completitud de la información y la coherencia de los datos remitidos por todas las entidades con el resto de la información de la CIR y con la recibida en los estados financieros agregados. El recuadro 1.1 («Conciliación de la información granular y la información agregada») de la *Memoria de la CIR 2019* describe con detalle este proceso de comparación y los datos utilizados. Este esquema exhaustivo de control de calidad permite a los analistas de la CIR identificar los principales problemas en la información recibida de las entidades y trabajar en conjunción con ellas, lo que redundará en una mejora en la calidad de los datos. Este enfoque está alineado con el establecido en AnaCredit, lo que garantiza que la información recibida de las entidades (reporte primario) cumple con los estándares definidos a nivel europeo.

3.2 En el ámbito de los datos que se han de remitir al BCE

La información que el Banco de España remite al BCE, según lo establecido en el Reglamento de AnaCredit, es un subconjunto de los datos remitidos regularmente a la CIR por las entidades declarantes, según se dispone en la Circular 1/2013. Este es el «reporte secundario», en el que el Banco de España aplica los criterios establecidos en el reglamento para seleccionar la información y la transmite al BCE. Los datos que se han de remitir a AnaCredit son los préstamos concedidos por entidades de crédito y sucursales de entidades de crédito a personas jurídicas con un riesgo agregado en la entidad superior a 25.000 euros. En cuanto al tipo de producto, solo deben informarse los préstamos, y exclusivamente cuando alguno de sus deudores sea una persona jurídica.

La calidad de la información de AnaCredit se garantiza, en una primera fase, mediante los procesos generales aplicados a los datos reportados a la CIR, el denominado «reporte primario». Al estar integrada la información de AnaCredit en la requerida mediante la Circular 1/2013, todos los procesos y controles descritos en el epígrafe 1.3.1 redundan en el aseguramiento de la calidad de aquella. De esta forma, las novedades y los trabajos específicos abordados durante 2020, tanto en la identificación de las contrapartes como en el control de la calidad de la información de las operaciones y las garantías declaradas a la CIR, han supuesto también la mejora de la calidad de los datos transmitidos al BCE.

⁹ El recuadro 1.1 de la *Memoria de la CIR 2018* describe el proceso de control de calidad que aplica la CIR a la información que recibe.

En una segunda fase, la CIR aplica controles específicos para el subconjunto de información de AnaCredit, para asegurar que cumple con los estándares definidos a nivel europeo. En concreto, estas medidas se basan en validaciones automáticas, el examen de la completitud y coherencia de la información, la detección de valores extremos y la evolución temporal de distintas variables relevantes, como importes o número de registros declarados. Durante 2020, en línea con el trabajo de la CIR y las prioridades establecidas en el grupo de trabajo de AnaCredit, se han intensificado las tareas de depuración de la información, enfocando los esfuerzos particularmente en la completitud de la información declarada y en la coherencia de la información granular con la declarada en los estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria (estados UEM), definidos en la Circular 4/2017. La información es remitida por los bancos centrales nacionales (BCN) al BCE en dos envíos separados: por un lado, los datos relativos a la identificación y características de los deudores y otras contrapartes que intervienen en las operaciones se envían a RIAD, la base de datos de identificación del SEBC; y, por otro, la información sobre las operaciones y sus garantías se remite a la base de datos AnaCredit.

En 2020, la información enviada a RIAD ha supuesto el envío de un mayor número de datos de identificación, mejorados tras ser contrastados con distintas fuentes. Desde mayo de 2018, el Banco de España envía al BCE los datos de las contrapartes que intervienen en las operaciones declarables a AnaCredit, y completa y actualiza la información necesaria. Es importante señalar que la Orientación de AnaCredit atribuye a los BCN la responsabilidad de enviar la mejor información disponible sobre las contrapartes residentes en sus países.

4 La CIR en 2020

En diciembre de 2020, 288 entidades declarantes enviaron a la CIR información sobre más de 48 millones de operaciones de más de 21 millones de personas físicas y jurídicas, titulares de riesgo directo e indirecto (véase cuadro 1.1). El detalle de esta información se describe en el siguiente capítulo de esta Memoria. Por su parte, el Banco de España remitió a AnaCredit información de 175 entidades declarantes, sobre más de 600.000 personas jurídicas y 3,4 millones de operaciones. Se trata de un volumen de información relevante, pero muy inferior al que gestiona la CIR bajo el esquema de la Circular 1/2013, teniendo en cuenta las diferencias en el ámbito de aplicación detalladas anteriormente.

La Ley 44/2002 asigna al Banco de España la administración y la gestión de la Central de Información de Riesgos. Esta función es desempeñada por la División de CIR y Otros Microdatos, encuadrada en el Departamento de Información Financiera y CIR, de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución. La división está organizada en cuatro unidades: Información de

Cuadro 1.1

INFORMACIÓN DECLARADA A LA CIR Y ANACREDIT (REPORTES «PRIMARIO» Y «SECUNDARIO»)

	Diciembre de 2020	
	CIR	AnaCredit
Entidades (unidades)	288	175
Titulares de riesgos directos e indirectos (millones) (a)	21,6	0,6
Operaciones (millones)	48,7	3,4

FUENTE: Banco de España.

NOTA: La CIR también registra información sobre los riesgos indirectos de las entidades declarantes, es decir, los contraídos con los garantes, vendedores de protección en titulizaciones sintéticas o derivados de crédito, aseguradores y demás personas que respondan del riesgo en caso de incumplimiento de los titulares de riesgo directo.

a Los riesgos directos son los contraídos con los primeros obligados al pago de los préstamos, los emisores de valores representativos de deuda, las personas sobre las que se ha concedido una garantía financiera u otro tipo de aval o caución, y las contrapartes de los restantes compromisos y de los préstamos de valores.

Operaciones, Información de Personas y Bases de Datos Auxiliares, Atención a Usuarios de la CIR, y Metodología y Calidad de la Información. Las dos primeras son unidades de carácter operativo, cuya función fundamental es la gestión regular de la información (recepción y control de calidad) remitida por las entidades declarantes a la CIR, así como la selección, depuración y envío de los datos a RIAD y a AnaCredit. La Unidad de Atención a Usuarios de la CIR facilita los informes de riesgos a los titulares (personas físicas y jurídicas) con la información declarada por las entidades, atiende las peticiones de las entidades de informes de riesgos sobre nuevos acreditados y tramita las reclamaciones que, en su caso, interponen los titulares sobre la información declarada por las entidades y facilita información a usuarios institucionales (véase el capítulo 3). Finalmente, la Unidad de Metodología y Calidad de la Información tiene carácter transversal y es responsable del diseño y del mantenimiento del esquema de control de calidad integral de los datos de la CIR, así como de su coherencia metodológica con el resto de la normativa española y europea tanto estadística como contable, y de mantener su alineación con AnaCredit, RIAD, FINREP y el resto de los estándares internacionales. El cuadro 1.2 recoge los recursos humanos con los que cuenta esta división.

Cuadro 1.2

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE CIR Y OTROS MICRODATOS

	Diciembre de 2020
Jefa de división y responsables de unidad	5
Expertos	5
Técnicos	23
Administrativos	6
Total	39

FUENTE: Banco de España.



2

PRINCIPALES MAGNITUDES

288

Entidades declarantes a la CIR
en diciembre de 2020. Entre ellas,
194 entidades de crédito,
33 establecimientos financieros de
crédito y 38 prestamistas inmobiliarios

**ACREDITADOS
(TITULARES DE
RIESGO)**

19,2 millones de personas físicas
1,2 millones de personas jurídicas

48,7 MILLONES

Operaciones declaradas en la CIR
en 2020

**3 BILLONES DE
EUROS**

Saldo de los préstamos y de otros
riesgos declarados en la CIR en 2020

**2,1 BILLONES DE
EUROS**

Importe total de los préstamos
concedidos por entidades de crédito
y establecimientos financieros de crédito
registrados en la CIR en 2020

816.600

Préstamos a personas físicas

633.800

Préstamos a sociedades no financieras
acogidos a alguna medida (avales
o moratorias) frente al COVID-19

1 Introducción

En este capítulo se presentan los principales rasgos de la información sobre los riesgos crediticios registrados en la CIR en los dos últimos ejercicios. Tras esta introducción, donde se proporcionan cifras generales sobre las operaciones de riesgo crediticio, el capítulo se organiza en tres epígrafes, en los que se describe, en primer lugar, la estructura de los riesgos desde la óptica de los prestatarios (titulares de riesgo), distinguiendo entre residentes y no residentes o entre personas físicas y jurídicas¹. En segundo lugar, la perspectiva pasa a ser la de las operaciones a través de las que se instrumenta la financiación. Por último, se presentan los datos disponibles sobre la relevancia de las líneas de avales del Estado y de las moratorias, tanto legislativas como sectoriales, articuladas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia.

El grupo más numeroso de declarantes lo siguieron conformando las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito extranjeras en España (194), seguido por los establecimientos financieros de crédito (33). El número total de entidades declarantes ha pasado de 256 en 2019 a 288, aumentando más de un 12 %, debido a la incorporación como entidades declarantes de los prestamistas inmobiliarios (véase cuadro 2.1).

Cuadro 2.1

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTIDADES, INFORMES, OPERACIONES E IMPORTE, POR TIPO DE ENTIDAD

	Diciembre de 2019				Diciembre de 2020			
	Número de entidades	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Informes automáticos (miles)	Número de entidades	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Informes automáticos (miles)
Entidades de crédito y sucursales	197	40.802	2.506.110	226.714	194	41.748	2.834.634	226.849
Establecimientos financieros de crédito	36	6.750	57.068	18.788	33	6.704	48.961	18.915
Sociedades de garantía recíproca y sociedades de reafianzamiento	19	94	5.981	433	19	123	7.516	422
Prestamistas inmobiliarios	—	—	—	—	38	2	140	5
Resto de las entidades (a)	4	78	70.065	324	4	76	69.398	313
TOTAL	256	47.725	2.639.224	246.259	288	48.653	2.960.649	246.504

FUENTE: Banco de España.

a Sareb, Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria y Banco de España.

¹ Se consideran personas jurídicas las instituciones financieras, las Administraciones Públicas, las sociedades no financieras y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH).

El número de operaciones declaradas a la CIR en diciembre de 2020 se acercaba a los 48,7 millones y suponía un riesgo total para las entidades declarantes de algo menos de 3 billones de euros (véase cuadro 2.1), cifras que suponen incrementos del 1,9 % y del 12,2 %, respectivamente, respecto al cierre de 2019. Las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito (EFC) concentraron el mayor volumen de exposiciones al riesgo, si bien mostrando un claro desequilibrio entre ellas. Así, las entidades de crédito eran responsables del 85,8 % del total de las operaciones declaradas y del 95,7 % del riesgo directo², mientras que los EFC declararon algo menos del 13,8 % de las operaciones, que representaban el 1,7 % del riesgo total. La Sareb, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y el Banco de España mantenían el 2,3 % del riesgo directo total, aunque, en términos del número de operaciones, apenas alcanzaban el 0,2 % (véase cuadro 2.1). Finalmente, las sociedades de garantía recíproca (SGR) y las sociedades de reafianzamiento (SR) declararon el 0,3 % tanto del número de operaciones como del riesgo directo total. Los prestamistas inmobiliarios están aún en el proceso de incorporación como declarantes a la CIR y, en todo caso, suponen un número muy reducido de operaciones.

2 Distribución de los riesgos según las características del titular

En diciembre de 2020, el número de titulares que mantenían riesgos³ con entidades de crédito y EFC ascendió a 20,4 millones, de los cuales cerca de 20 millones eran residentes en España, lo que supone el 97,9 % del total de los prestatarios. El total de los titulares declarados en la CIR aumentó en 2020, por el incremento en el número tanto de prestatarios residentes (200.000) como de no residentes (algo más de 70.000) (véase cuadro 2.3).

Atendiendo a la naturaleza jurídica de los prestatarios residentes, el 94,3 % (18,8 millones) eran personas físicas y adeudaban casi un 35 % del importe total (1,9 billones). A su vez, las personas jurídicas suponían el 5,6 % (1,1 millones), si bien su participación en el volumen de riesgo crediticio ascendía al 65 % (véase gráfico 2.1).

A finales de 2020, los no residentes en España suponían solo un 2,1 % de los titulares registrados en la CIR, si bien su aportación al total de los riesgos fue de un 15,9 % aproximadamente. El grueso de estos titulares eran personas jurídicas (24.000), que representaban un 0,1 % del total de los acreditados, si bien su

2 Los riesgos directos son los contraídos con los primeros obligados al pago de los préstamos, los emisores de valores representativos de deuda, las personas sobre las que se ha concedido una garantía financiera u otro tipo de aval o caución, y las contrapartes de los restantes compromisos y de los préstamos de valores. La CIR también registra información sobre los riesgos indirectos de las entidades declarantes, es decir, los contraídos con los garantes, vendedores de protección en titulizaciones sintéticas o derivados de crédito, aseguradores y demás personas que respondan del riesgo en caso de incumplimiento de los titulares de riesgo directo.

3 En el resto del capítulo, las expresiones «riesgo dispuesto» y «riesgo» se utilizarán indistintamente.

Cuadro 2.2

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TIPO DE ENTIDAD Y TIPO DE PRODUCTO

	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Del que: Dispuesto (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Del que: Dispuesto (millones de euros)
Entidades de crédito y EFC	47.553	2.563.178	2.092.881	48.452	2.883.595	2.353.126
Préstamos y valores representativos de deuda	45.842	2.249.548	2.092.881	46.788	2.534.139	2.353.126
Otros productos	1.711	313.631	—	1.665	349.456	—
Resto de las entidades (a)	172	76.045	68.885	199	76.914	69.825
TOTAL	47.725	2.639.224	2.161.766	48.651	2.960.509	2.422.951

FUENTE: Banco de España.

a Sociedades de garantía recíproca, sociedades de reafianzamiento, Sareb, Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Banco de España y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria.

Cuadro 2.3

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR NATURALEZA Y POR RESIDENCIA DEL DEUDOR**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020		
	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)
Residentes	19.734,3	45.378,4	1.747.490	19.955,6	46.192,5	1.978.388
Persona física	18.609,7	40.064,0	688.666	18.812,3	40.925,4	682.712
Persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica	1.095,6	5.268,2	1.057.700	1.141,0	5.266,0	1.295.641
Sin dato (a)	29,1	46,1	1.123	2,4	1,1	36
No residentes	358,3	463,6	345.391	422,8	595,2	374.738
Persona física	332,1	339,7	18.244	397,8	427,9	19.234
Área del euro	166,5	177,0	9.469	205,9	236,7	10.555
Resto de la UE	79,8	68,1	4.317	85,6	73,9	4.145
Resto del mundo	85,8	94,6	4.458	106,3	117,2	4.534
Persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica	22,6	120,6	324.509	24,0	166,8	355.446
Área del euro	17,7	79,5	199.026	19,0	68,4	211.957
Resto de la UE	1,3	11,2	32.735	1,3	59,6	32.619
Resto del mundo	3,6	29,9	92.748	3,6	38,7	110.870
Sin dato (a)	3,6	3,3	2.638	1,0	0,5	58
TOTAL	20.092,6	45.842,0	2.092.881	20.378,4	46.787,6	2.353.126

FUENTE: Banco de España.

a Desglose no informado o no disponible.

endeudamiento (355.446 millones de euros) suponía el 15,1 % del total. Por áreas geográficas, el 59,4 % del importe dispuesto por los no residentes correspondía a personas del área del euro, el 9,8 % a los residentes en el resto de la Unión Europea (UE) y 30,8 % a residentes fuera de la UE.

El nivel de riesgos contraídos por entidades de crédito y EFC con deudores residentes en diciembre de 2020 (cerca de 2 billones de euros) fue un 13,2 % superior al nivel correspondiente a la situación al final del año precedente. La distribución de esta evolución fue muy desigual según el sector institucional: mientras que las instituciones financieras registraron un aumento del 56,1 %, el crecimiento para las Administraciones Públicas (AAPP) y las sociedades no financieras fue mucho menor (del 10,1 % y del 7,1 %, respectivamente). Por su parte, los hogares e ISFLSH⁴ redujeron su crédito en un 0,9 % (véase cuadro 2.4).

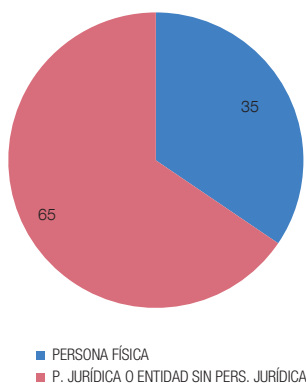
En cuanto a la distribución por sectores institucionales, el sector más importante fue el de ISFLSH, que representó el 88,8 % (41 millones) de las operaciones declaradas y el 94,5 % (18,8 millones) de los titulares. Sin embargo, en términos del volumen de riesgos, representaban únicamente el 34,8 % (véanse cuadro 2.4 y gráfico 2.2). Las sociedades no financieras (SNF), con 5,1 millones de operaciones, suponían el 11 % del total, si bien concentraban el 26,5 % del volumen de riesgos. Por último, los sectores de instituciones financieras y de las AAPP

Gráfico 2.1

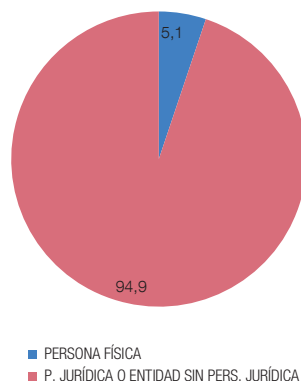
DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DISPUESTO (%)

Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda
Diciembre de 2020

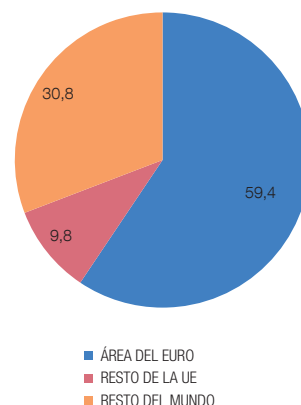
1 NATURALEZA DE LOS TITULARES RESIDENTES



2 NATURALEZA DE LOS TITULARES NO RESIDENTES



3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS TITULARES NO RESIDENTES



FUENTE: Banco de España.

4 El esquema de sectorización utilizado en la CIR sigue el estándar establecido por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010). El sector hogares incluye a todas las personas físicas incluidos los empresarios individuales, sin distinguir si las operaciones que realiza tienen o no finalidad empresarial.

Cuadro 2.4

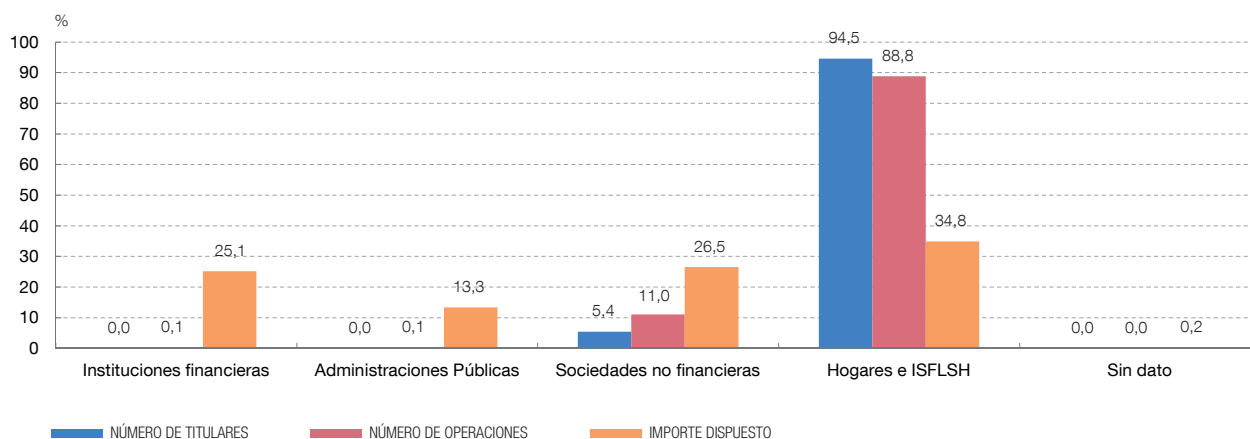
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR SECTOR INSTITUCIONAL. DEUDORES RESIDENTES
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020			
	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Del cual: Préstamos, importe dispuesto (millones de euros)
Instituciones financieras	3,8	26,6	318.541	5,9	31,7	497.189	377.174
Administraciones Públicas	8,0	43,7	239.091	7,8	40,2	263.211	75.191
Sociedades no financieras	1.031,3	5.104,0	489.398	1.073,5	5.100,0	523.987	519.901
Hogares e ISFLSH	18.670,6	40.180,8	695.390	18.861,1	41.012,8	689.452	689.451
Sin dato (a)	20,7	23,3	5.070	7,4	7,8	4.549	4.545
TOTAL SECTORES RESIDENTES	19.734,3	45.378,4	1.747.490	19.955,6	46.192,5	1.978.388	1.666.263

FUENTE: Banco de España.

a Desglose no informado o no disponible.

Gráfico 2.2

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR SECTOR INSTITUCIONAL. DEUDORES RESIDENTES
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda
Diciembre de 2019


FUENTE: Banco de España.

registraron el 25,1 % y el 13,3 %, respectivamente, del endeudamiento total de los sectores residentes.

Las sociedades no financieras y los hogares instrumentaron la financiación de las entidades declarantes a la CIR, fundamentalmente, a través de préstamos. Para las sociedades no financieras, estos supusieron el 99,2 % de su financiación en diciembre de 2020, mientras que para los hogares esta participación fue muy próxima al 100 %. Sin embargo, la contribución de los valores representativos

Cuadro 2.5

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD (CNAE). DEUDORES RESIDENTES. SOCIEDADES NO FINANCIERAS**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

	Diciembre de 2019		Diciembre de 2020	
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	163,8	12.904	168,7	14.002
Industrias extractivas	16,0	1.673	15,9	1.796
Industria manufacturera	933,2	77.556	874,2	83.723
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	28,5	21.034	30,2	18.740
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	23,3	3.951	23,5	4.062
Construcción	725,3	83.327	730,3	81.116
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	1.429,3	75.551	1.368,2	83.815
Transporte y almacenamiento	344,8	31.674	340,2	37.369
Hostelería	254,4	24.487	310,4	31.937
Información y comunicaciones	127,7	13.401	129,2	15.109
Actividades financieras y de seguros	32,9	28.606	24,5	30.598
Actividades inmobiliarias	217,9	62.174	231,0	61.424
Actividades profesionales, científicas y técnicas	316,3	21.140	335,5	23.857
Actividades administrativas y servicios auxiliares	227,0	15.644	231,4	17.565
Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria	0,9	2.082	1,1	2.662
Educación	47,8	2.261	52,6	2.713
Actividades sanitarias y de servicios sociales	80,1	5.544	88,2	6.113
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	62,8	3.860	70,4	4.781
Otros servicios	69,9	2.411	73,1	2.493
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio	0,6	9	0,6	9
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	0,4	4	0,3	10
Sin dato (a)	0,9	103	0,5	93
TOTAL	5.104,0	489.398	5.100,0	523.987

FUENTE: Banco de España.

a Desglose no informado o no disponible.

de deuda sí fue relevante para las instituciones financieras (24,1 %) y las AAPP (71,4 %).

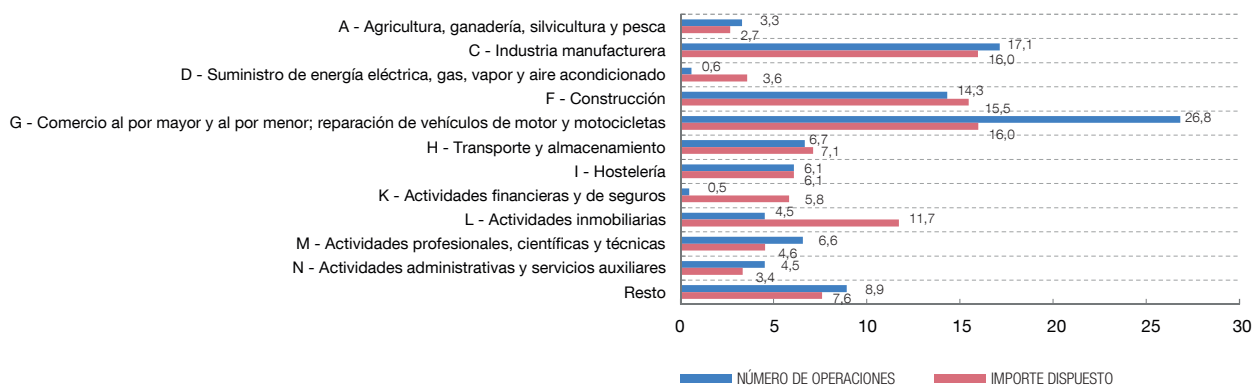
Atendiendo a la clasificación de los créditos a las sociedades no financieras residentes por sectores de actividad, destacó el comercio, que representó casi el 27 % del total del número de operaciones, seguido de la industria manufacturera con un 17 %. No obstante, teniendo en cuenta el importe dispuesto, la importancia de los sectores se encuentra más distribuida, representando el comercio, la industria manufacturera y la construcción un 16 %, aproximadamente, cada uno. En cuanto a

Gráfico 2.3

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD (CNAE). DEUDORES RESIDENTES. SOCIEDADES NO FINANCIERAS (%)

Entidades de crédito y EFC. Préstamos

Diciembre de 2020



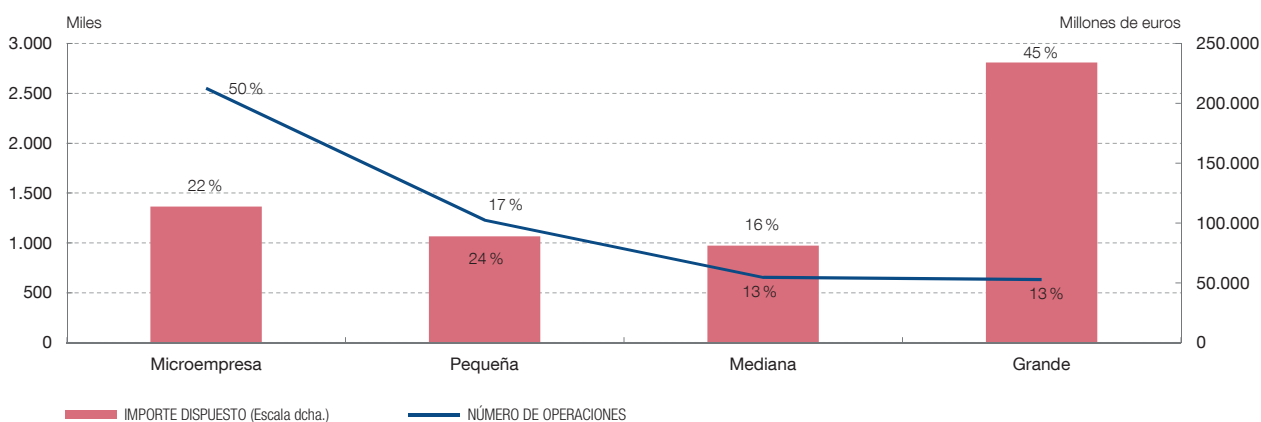
FUENTE: Banco de España.

Gráfico 2.4

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA. DEUDORES RESIDENTES. SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

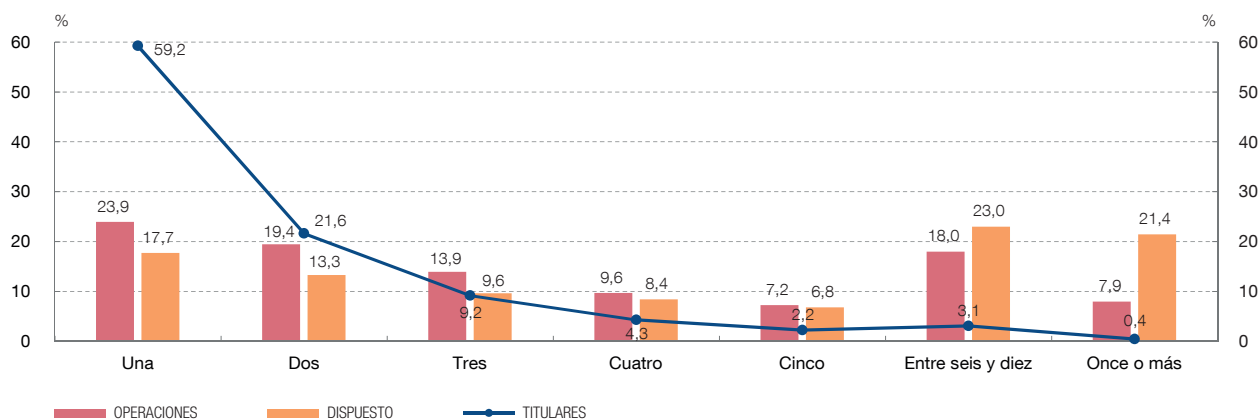
IMPORTE DISPUESTO Y NÚMERO DE OPERACIONES. DICIEMBRE DE 2020



FUENTE: Banco de España.

la evolución entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2019, el número total de operaciones se ha mantenido estable, mientras que el importe dispuesto ha crecido un 7 %. El aumento del importe dispuesto ha sido desigual entre las distintas actividades, destacando el comportamiento de la hostelería (con un aumento del 30 %) y de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (con un 24 %). Como veremos más adelante, este comportamiento vino condicionado por la crisis

Gráfico 2.5

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE OPERA EL DEUDOR. SOCIEDADES NO FINANCIERAS RESIDENTES
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda. Diciembre de 2020

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 2.6

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE EL TITULAR TIENE OPERACIONES. DEUDORES SOCIEDADES NO FINANCIERAS RESIDENTES
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

Número de entidades en las que el titular tiene operaciones	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020		
	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)
Una	616,4	1.169,6	87.899	635,9	1.219,1	92.523
Dos	219,0	937,4	69.918	231,6	989,7	69.561
Tres	91,9	676,6	45.190	98,3	709,3	50.196
Cuatro	43,7	488,5	43.074	46,1	491,7	43.765
Cinco	22,8	360,9	31.062	24,0	369,1	35.447
Entre seis y diez	32,4	991,3	110.597	32,9	916,4	120.315
Once o más	5,1	479,7	101.657	4,6	404,8	112.180
TOTAL	1.031,3	5.104,0	489.398	1.073,5	5.100,0	523.987

FUENTE: Banco de España.

del COVID-19 y por las medidas de apoyo puestas en marcha por el Gobierno para mitigar su impacto.

Portamaño de empresa, las grandes representan solo el 13 % de las operaciones pero el 45 % del importe de los riesgos, mientras que las microempresas eran deudoras del 22 % del crédito declarado a la CIR, con un 50 % de las operaciones (véase gráfico 2.4).

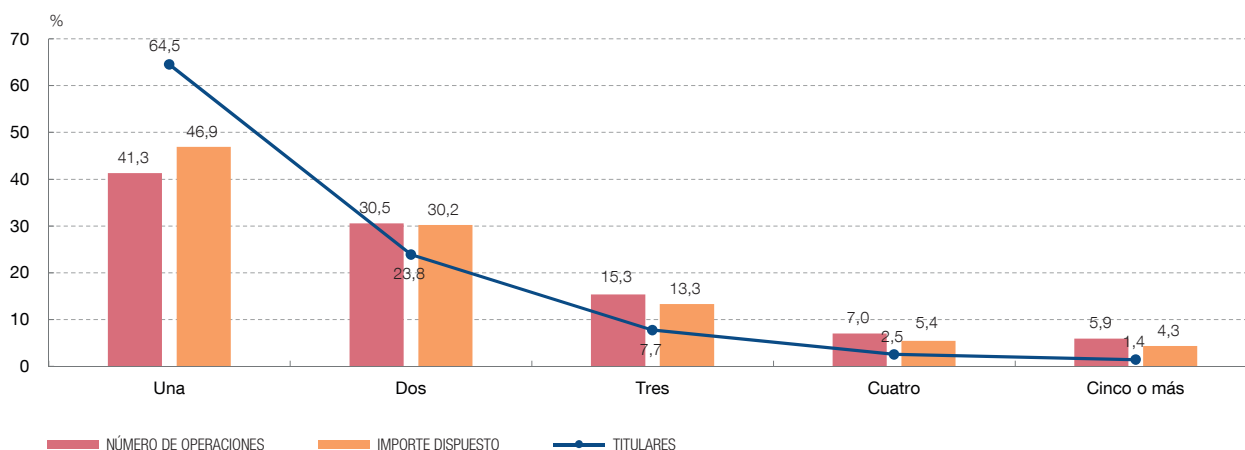
Cuadro 2.7

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE EL TITULAR TIENE OPERACIONES. HOGARES E ISFLSH RESIDENTES**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

Número de entidades con las que opera el deudor	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020		
	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Titulares (miles)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)
Una	12.077,0	16.737,6	328.318	12.169,4	16.930,7	323.169
Dos	4.459,3	12.287,1	209.960	4.497,7	12.527,8	207.995
Tres	1.418,3	6.055,0	91.265	1.454,0	6.277,2	91.458
Cuatro	455,8	2.711,8	36.824	475,9	2.857,7	37.398
Cinco o más	260,2	2.389,3	29.023	264,2	2.419,5	29.433
Total	18.670,6	40.180,8	695.390	18.861,1	41.012,8	689.452

FUENTE: Banco de España.

Gráfico 2.6

DISTRIBUCIÓN DE LOS DEUDORES, OPERACIONES E IMPORTE, POR NÚMERO DE ENTIDADES CON LAS QUE OPERA EL DEUDOR. HOGARES E ISFLSH RESIDENTES**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda. Diciembre de 2020**

FUENTE: Banco de España.

Las sociedades no financieras residentes que tenían créditos con una sola entidad eran casi el 60 % del total y representaban el 17,7 % del riesgo contraído (véanse cuadro 2.6 y gráfico 2.5). Por su parte, las que mantenían riesgos con seis o más entidades suponían el 3,5 % del número total de empresas no financieras, si bien en términos de los riesgos declarados a la CIR absorbían más del 44,4 % del total.

El 64,5 % de los hogares e ISFLH residentes mantenían operaciones con una sola entidad; los que acumulaban deudas con dos representaban el 23,8 %,

mientras que aquellos que habían operado con cinco o más entidades eran el 1,4 %. A diferencia de lo que ocurre con las sociedades no financieras, en el caso de los hogares estas tres categorías son directamente proporcionales en términos de importes de los riesgos, y representan el 46,9 %, el 30,2 % y el 4,3 %, respectivamente (véanse cuadro 2.7 y gráfico 2.6).

3 Distribución de los riesgos según las características de las operaciones

La financiación concedida por las entidades de crédito y EFC en diciembre de 2020 repartió su importe dispuesto en préstamos (1,9 billones de euros, el 82,8 % del total) y en valores representativos de deuda (0,4 billones de euros, el 17,2% del total). En el caso de los préstamos, por tipo de producto, el riesgo se

Cuadro 2.8

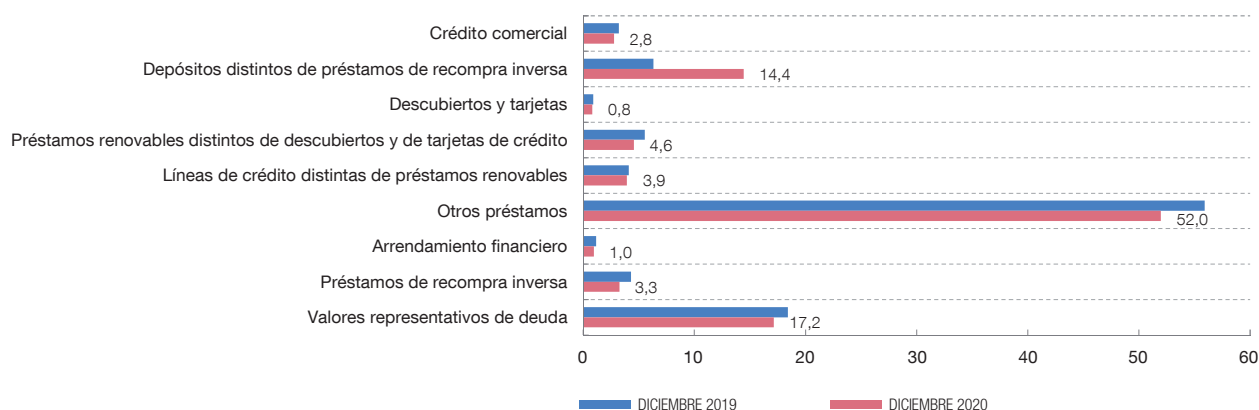
DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TIPO DE PRODUCTO. ENTIDADES DE CRÉDITO Y EFC

	Diciembre de 2019				Diciembre de 2020			
	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Del que: Dispuesto (millones de euros)	Del que: Disponible (a) (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe del riesgo total (millones de euros)	Del que: Dispuesto (millones de euros)	Del que: Disponible (a) (millones de euros)
Entidades de crédito y EFC	47.552,7	2.563.178	2.092.881	299.734	48.452,3	2.883.595	2.353.126	360.531
Préstamos	45.827,5	1.864.036	1.707.369	156.667	46.772,1	2.130.312	1.949.299	181.013
Crédito comercial	617,9	72.058	67.284	4.774	610,4	70.735	65.443	5.292
Crédito comercial con recurso	362,0	24.596	22.559	2.036	332,4	23.714	22.006	1.708
Crédito comercial sin recurso	256,0	47.463	44.725	2.738	278,0	47.021	43.437	3.584
Crédito financiero	44.557,5	1.676.588	1.524.833	151.755	45.509,5	1.959.805	1.784.199	175.606
Depósitos distintos de préstamos de recompra inversa	5,7	133.673	132.583	1.090	6,6	340.661	340.018	643
Descubiertos	2.566,8	6.715	6.166	549	2.811,1	7.300	6.715	584
Tarjetas de crédito	15.759,0	44.050	13.051	31.000	16.917,0	46.133	13.168	32.965
Préstamos renovables distintos de descubiertos y de tarjetas de crédito	1.168,6	208.390	116.537	91.853	884,3	222.894	108.048	114.846
Líneas de crédito distintas de préstamos renovables	341,6	108.744	86.095	22.650	357,6	115.386	92.930	22.456
Otros préstamos	24.715,8	1.175.017	1.170.402	4.615	24.532,8	1.227.432	1.223.320	4.112
Arrendamiento financiero	649,7	24.788	24.650	137	649,6	22.857	22.742	115
Préstamos de recompra inversa	2,3	90.601	90.601	0	2,6	76.915	76.915	0
Valores representativos de deuda	14,5	385.512	385.512	0	15,6	403.827	403.827	0
Garantías financieras	225,2	34.054	0	0	213,3	35.356	0	0
Avaes y otros compromisos	1.485,5	279.577	0	143.067	1.451,4	314.100	0	179.518
Resto de las entidades (a)	171,8	76.045	68.885	2.473	198,9	76.914	69.825	895
TOTAL	47.724,5	2.639.224	2.161.766	302.207	48.651,3	2.960.509	2.422.951	361.426

FUENTE: Banco de España.

a En las rúbricas distintas de «Préstamos» y «Valores representativos de deuda», la suma del importe dispuesto y del disponible puede no coincidir con el importe total, al existir la posibilidad de que estos productos tengan riesgo de firma, que no se contabiliza en ninguno de estos campos.

Gráfico 2.7

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO TOTAL, POR TIPO DE PRODUCTO. IMPORTE DISPUESTO (%)**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 2.9

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR MONEDA**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

	Diciembre de 2019		Diciembre de 2020	
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)
Euro	45.782,3	1.966.588	46.675,5	2.210.598
Dólar estadounidense	29,6	91.869	30,0	103.459
Libra esterlina	2,2	18.163	51,9	18.489
Yen	15,2	6.754	12,9	7.470
Franco suizo	6,1	1.667	4,9	1.629
Otras monedas	6,5	7.840	12,5	11.480
TOTAL	45.842,0	2.092.881	46.787,6	2.353.126

FUENTE: Banco de España.

había contraído principalmente a través del denominado «crédito financiero» (1,8 billones) y, dentro de este, bajo la rúbrica de Otros préstamos (que incluyen, fundamentalmente, los préstamos «tradicionales» a plazo, con o sin garantía personal o hipotecaria), que en 2020 llegó a representar el 52 % del importe dispuesto (1,2 billones).

El 93,9 % del importe dispuesto estaba denominado en euros (véase cuadro 2.9). Del resto de las monedas, el dólar estadounidense era la moneda más relevante y representaba un 4,4 % del total. Estas dos denominaciones principales presentaron una evolución muy similar, habiendo crecido alrededor de un 12 % respecto a diciembre de 2019.

Cuadro 2.10

DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LAS QUE SE REALIZA LA INVERSIÓN. DEUDORES RESIDENTES. SNF Y HOGARES E ISFLSH
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

	Diciembre de 2019		Diciembre de 2020			
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto		
				(Millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
Andalucía	6.592,1	163.088	6.719,8	163.298	0,1	13,5
Aragón	1.141,4	31.556	1.136,4	31.891	1,1	2,6
Asturias	925,5	19.994	937,1	20.204	1,0	1,7
Canarias	1.894,7	37.670	1.943,5	38.881	3,2	3,2
Cantabria	486,7	10.744	495,3	10.793	0,5	0,9
Castilla y León	1.762,3	43.644	1.789,2	43.901	0,6	3,6
Castilla-La Mancha	1.592,0	35.359	1.625,9	36.122	2,2	3,0
Cataluña	7.994,3	205.709	8.315,6	211.346	2,7	17,4
Ceuta	63,0	1.123	61,1	1.110	-1,2	0,1
Extremadura	782,5	15.710	800,2	16.045	2,1	1,3
Galicia	2.146,7	45.608	2.174,0	46.981	3,0	3,9
Islas Baleares	1.081,8	31.938	1.105,7	34.559	8,2	2,8
La Rioja	276,3	7.402	277,3	7.454	0,7	0,6
Madrid	10.179,6	299.012	10.248,5	310.238	3,8	25,6
Melilla	50,1	947	49,5	946	-0,1	0,1
Murcia	1.334,3	33.830	1.360,3	34.007	0,5	2,8
Navarra	536,9	16.078	544,9	16.633	3,5	1,4
País Vasco	1.767,5	65.545	1.793,3	67.040	2,3	5,5
Valencia	4.480,0	112.943	4.540,1	114.842	1,7	9,5
Sin dato (a)	196,8	6.886	195,4	7.147	3,8	0,6
TOTAL	45.284,8	1.184.788	46.112,8	1.213.440	2,4	100,0

FUENTE: Banco de España.

a Desglose no informado o no disponible.

Tres comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña y Madrid), concentraban el 56,4 % de los fondos declarados a la CIR⁵, medidos por la provincia donde se realiza la inversión (véase cuadro 2.10). En un segundo grupo están Valencia y País Vasco, con un 15 %. En las restantes comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se contabilizó el 28 % del crédito restante. El mayor crecimiento en este año se produjo en las Islas Baleares, reflejo del fuerte impacto que tuvo allí la crisis del COVID-19.

Los instrumentos con un plazo residual⁶ de más de cinco años suponían el 43,9 % de los préstamos declarados (véanse cuadro 2.11 y gráfico 2.8), aunque solo representaban el 19,9 % de las operaciones declaradas. En términos del número de operaciones, 13,8 millones (un 29,5 % del total) se clasifican en la categoría «Vencimiento

⁵ Esta variable solo contempla la financiación concedida a sociedades no financieras y a familias.

⁶ Plazo residual es el que media entre la fecha de la declaración a la CIR y la del vencimiento de la operación.

Cuadro 2.11

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR PLAZO RESIDUAL**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

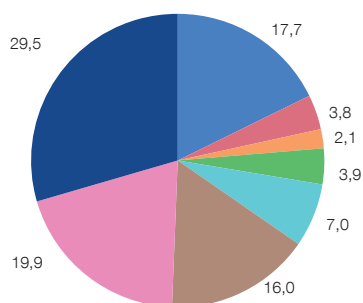
	Diciembre de 2019		Número de operaciones (miles)	Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)		Importe dispuesto (millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
A la vista	8.152,7	199.925	8.303,4	370.031	85,1	15,7
Hasta 3 meses (excepto a la vista)	2.069,7	192.382	1.786,9	179.690	-6,6	7,6
Más de 3 meses y hasta 6 meses	1.117,5	53.636	992,6	56.043	4,5	2,4
Más de 6 meses y hasta 1 año	2.014,8	117.798	1.841,6	102.039	-13,4	4,3
Más de 1 año y hasta 2 años	3.184,6	113.244	3.279,7	109.756	-3,1	4,7
Más de 2 años y hasta 5 años	6.911,5	288.013	7.475,5	414.157	43,8	17,6
Más de 5 años	9.570,0	1.045.573	9.305,9	1.032.773	-1,2	43,9
Vencimiento indeterminado	12.821,1	82.311	13.802,0	88.637	7,7	3,8
TOTAL	45.842,0	2.092.881	46.787,6	2.353.126	12,4	100,0

FUENTE: Banco de España.

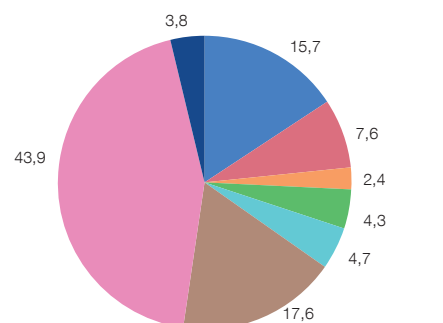
Gráfico 2.8

DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS OPERACIONES, POR PLAZO RESIDUAL (%)**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda****Diciembre de 2020**

1 OPERACIONES



2 DISPUESTO



■ A LA VISTA
 ■ HASTA 3 MESES (EXCEPTO A LA VISTA)
 ■ MÁS DE 3 MESES Y HASTA 6 MESES
 ■ MÁS DE 6 MESES Y HASTA 1 AÑO
 ■ MÁS DE 1 AÑO Y HASTA 2 AÑOS
 ■ MÁS DE 2 AÑOS Y HASTA 5 AÑOS
 ■ MÁS DE 5 AÑOS
 ■ VENCIMIENTO INDETERMINADO

FUENTE: Banco de España.

indeterminado», que se corresponde con las operaciones que, no siendo a la vista, no tienen fecha de vencimiento. No obstante, estas operaciones apenas alcanzaban el 3,8 % de los importes dispuestos en diciembre de 2020. Un gran número de estas operaciones —cerca de 13,1 millones— corresponde a tarjetas de crédito. Las operaciones entre dos y cinco años experimentaron un avance muy significativo

Cuadro 2.12

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TIPO DE GARANTÍA REAL**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

	Diciembre de 2019			Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)		Importe dispuesto (millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
Préstamos y valores representativos de deuda	45.842,0	2.092.881	46.787,6	2.353.126	12,4	100,0
Del cual: Con garantía personal	3.661,9	324.438	4.156,0	397.762	22,6	16,9
Garantía de los hogares	3.104,8	168.032	2.745,9	156.647	-6,8	6,7
Garantía AAPP, CESCE y empresas públicas	19,4	17.159	969,8	106.425	520,2	4,5
Del cual: Avaes de AAPP españolas por COVID-19 (a)			942,7	85.006	—	3,6
Del cual: Con garantía real	9.998,0	773.632	9.742,3	772.217	-0,2	32,8
Hipoteca inmobiliaria (primera hipoteca)	8.499,5	686.604	8.296,7	668.453	-2,6	28,4
Del cual: Sin ninguna garantía (o garantizada sin conocimiento del titular)	33.831,7	1.166.679	34.469,2	1.344.965	15,3	57,2

FUENTE: Banco de España.**a** Incluye los avales establecidos en los artículos 29 del RDL 8/2020, 1 del RDL 25/2020 y 11 del RDL/2020.

(43,8 %) en 2020. Recuérdese que este es el plazo en el que se enmarca el programa de préstamos avalados por el Gobierno para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19.

En diciembre de 2020, el 32,8 % del saldo de crédito se había instrumentado a través de operaciones con garantía real (véase cuadro 2.12), fundamentalmente a través de la primera hipoteca inmobiliaria (28,4 % del total). Por otra parte, el riesgo de las operaciones con algún tipo de garantía personal se cifraba en el 16,9 % del total, siendo las operaciones garantizadas de los hogares las que tenían un mayor peso (6,7 %). En este ámbito destaca el fuerte avance de los préstamos con garantía de las AAPP, ligado al programa de préstamos avalados. Alguna de estas operaciones, además, contaba con garantía real. Por último, el 57,2 % de la financiación concedida no contaba con garantía real ni personal.

Los préstamos a tipo de interés fijo representaban el 48,3 % del importe total, los contratados a tipo de interés variable el 33,5 % y los de tipo de interés mixto el 9,1 %. En este año, destacó el fuerte crecimiento de los préstamos a tipo fijo (25,8 %). Por número de operaciones, el tipo de interés fijo representaba la mayor proporción (un 79,6 %). En las operaciones a tipo de interés variable y mixto, el euríbor era el tipo de interés mayoritariamente utilizado como tipo de referencia: el 85,9 % y el 93,9 % de los importes dispuestos en cada modalidad, respectivamente.

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR MODALIDAD DEL TIPO DE INTERÉS**Entidades de crédito y EFC. Préstamos**

	Diciembre de 2019		Número de operaciones (miles)	Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)		Importe dispuesto		
				(millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
Tipo de interés fijo	36.431,8	748.918	37.228,6	942.083	25,8	48,3
Tipo de interés variable	6.040,0	650.397	5.734,4	653.585	0,5	33,5
Del cual: Referenciado al euríbor	5.099,3	573.396	4.890,3	561.565	-2,1	28,8
Tipo de interés mixto	1.604,5	180.776	1.635,8	177.145	-2,0	9,1
Del cual: Referenciado al euríbor	1.436,5	167.617	1.485,3	166.420	-0,7	8,5
No aplicable (a)	1.708,2	100.994	1.863,9	155.144	53,6	8,0
Sin dato (b)	43,0	26.285	309,3	21.343	-18,8	1,1
TOTAL	45.827,5	1.707.369	46.772,1	1.949.299	14,2	100,0

FUENTE: Banco de España.

a No aplicable ninguno de los valores anteriores.

b Valores declarados a partir de mayo de 2018, por las modificaciones introducidas por la Circular 1/2017. Operaciones con esta información pendiente de declaración.

En diciembre de 2020, el 78,4 % del dispuesto en préstamos llevaba asociado algún esquema de amortización. El 45,3 % se correspondía con operaciones con cuotas de amortización (principal e intereses) constantes (véase cuadro 2.14⁷). Cabe indicar que, por su naturaleza, un buen número de operaciones no llevan vinculado ningún esquema de amortización. Este es el caso de determinados tipos de producto, como tarjetas de crédito, descubiertos o crédito comercial.

El número de operaciones con importes inferiores a 10.000 euros, en diciembre de 2020 (30,7 millones), suponían el 74,8 % de las contratadas por los hogares y las ISFLSH (véase cuadro 2.15), si bien únicamente representaban el 7,6 % del importe dispuesto. Por el contrario, en los tramos entre 50.000 y 99.999 euros y entre 100.000 y 199.999 euros, el número de operaciones era bastante más reducido, pero representaban un mayor peso de los riesgos declarados a la CIR: el 24,9 % y el 37,2 % del importe dispuesto, respectivamente. Es relevante mencionar que, del número de préstamos a hogares e ISFLSH superiores a 100.000 euros, el 96 % tiene garantía hipotecaria.

7 La Circular 1/2017, que adaptó la información de la CIR a la requerida por AnaCredit, introdujo dos nuevos valores en relación con el esquema de amortización: el método alemán y el método de amortización del principal con progresión geométrica. El método alemán consiste en un esquema de amortización en el que en el primer plazo solo se devuelven intereses y los plazos restantes son constantes, e incluyen amortización del principal e intereses. En el método de amortización del principal con progresión geométrica existe un incremento progresivo de la cuota en el porcentaje (razón) que se ha de realizar a una frecuencia pactada, manteniéndose constante la cuota periódica hasta su actualización.

Cuadro 2.14

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR ESQUEMA DE AMORTIZACIÓN DE LAS OPERACIONES**Entidades de crédito y EFC. Préstamos**

	Diciembre de 2019		Número de operaciones (miles)	Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)		Importe dispuesto		
				(millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
Cuotas de amortización (principal e intereses) constantes (método francés)	22.688,7	836.351	22.918,6	883.834	5,7	45,3
Cuotas de amortización del principal constantes	369,9	96.406	336,1	118.080	22,5	6,1
Cuotas de amortización según el método alemán (a)	99,3	3.626	45,3	2.948	-18,7	0,2
Amortización del principal con progresión geométrica (a)	47,5	1.129	40,8	917	-18,7	0,0
Amortización única del principal al vencimiento	1.036,5	317.137	952,6	299.204	-5,7	15,3
Cuotas de amortización del principal variables	1.475,3	215.548	1.232,3	223.550	3,7	11,5
Sin vencimiento	324,7	30.001	182,2	28.719	-4,3	1,5
Sin dato (a)	19.785,6	207.171	21.064,1	392.047	89,2	20,1
TOTAL	45.827,5	1.707.369	46.772,1	1.949.299	14,2	100,0

FUENTE: Banco de España.

a Valores declarados a partir de mayo de 2018, por las modificaciones introducidas por la Circular 1/2017.

Cuadro 2.15

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TRAMOS DEL IMPORTE DISPUESTO DE LA OPERACIÓN.**HOGARES E ISFLSH RESIDENTES****Entidades de crédito y EFC. Préstamos**

Diciembre de 2020	Total operaciones			Del cual: Operaciones con hipoteca inmobiliaria		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Importe dispuesto (porcentaje del total)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Importe dispuesto (porcentaje del total)
Tramo del importe dispuesto de la operación						
Menos de 10.000 euros	30.661,3	52.104,4	7,6	1.285,9	5.441	1,0
Entre 10.000 y 24.999 euros	4.011,0	62.565,2	9,1	1.085,0	18.614	3,4
Entre 25.000 y 49.999 euros	2.008,8	72.570,5	10,5	1.496,9	55.760	10,1
Entre 50.000 y 99.999 euros	2.373,8	171.895,1	24,9	2.242,7	163.029	29,6
Entre 100.000 y 249.999 euros	1.777,2	256.523,2	37,2	1.717,7	247.889	45,0
Más de 250.000 euros	180,7	73.793,7	10,7	163,8	60.721	11,0
TOTAL	41.012,8	689.452,2	100,0	7.992,0	551.453	100,0

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 2.16

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TRAMOS DEL IMPORTE DISPUESTO DE LA OPERACIÓN.
SOCIEDADES NO FINANCIERAS RESIDENTES
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

Tramo del importe dispuesto de la operación	Diciembre de 2020		
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Importe dispuesto (porcentaje del total)
Menos de 10.000 euros	2.875,2	5.228	1,0
Entre 10.000 y 24.999 euros	702,3	11.533	2,2
Entre 25.000 y 49.999 euros	514,2	18.128	3,5
Entre 50.000 y 99.999 euros	411,0	28.504	5,4
Entre 100.000 y 249.999 euros	337,9	51.450	9,8
Entre 250.000 y 999.999 euros	196,1	89.617	17,1
Entre 1 y 5 millones de euros	51,8	101.242	19,3
Entre 5 y 25 millones de euros	9,7	95.783	18,3
Más de 25 millones de euros	1,9	122.505	23,4
TOTAL	5.100,0	523.987	100,0

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 2.17

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR CANAL DE CONTRATACIÓN
Entidades de crédito y EFC. Préstamos

	Diciembre de 2019		Diciembre de 2020			
	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto (millones de euros)	Número de operaciones (miles)	Importe dispuesto		
				(millones de euros)	Variación interanual (%)	Porcentaje del total
Oficina central	2.512,8	360.582	2.486,9	505.764	40,3	25,9
Red de oficinas	32.108,9	1.227.576	32.759,0	1.317.919	7,4	67,6
Sitio web	2.108,3	19.049	2.214,9	19.634	3,1	1,0
Aplicaciones instaladas en los dispositivos móviles	47,1	216	64,7	302	39,5	0,0
Banca telefónica	1.436,9	9.376	1.397,0	8.909	-5,0	0,5
Agente	764,3	27.831	803,8	28.849	3,7	1,5
Punto de venta	5.316,9	19.977	5.518,8	19.679	-1,5	1,0
Otros intermediarios	1.088,8	31.628	1.099,4	35.672	12,8	1,8
Preconcedido	288,3	2.052	261,9	1.467	-28,5	0,1
Adquirido a terceros	85,6	6.891	102,5	8.761	27,1	0,4
No aplicable	69,4	2.189	63,2	2.344	7,1	0,1
TOTAL	45.827,5	1.707.369	46.772,1	1.949.299	14,2	100,0

FUENTE: Banco de España.

En el caso de las sociedades no financieras, las operaciones de menor importe —hasta 50.000 euros— suponían, en diciembre de 2020, la gran mayoría de las operaciones (el 80,2 %), aunque el importe dispuesto apenas alcanzaba el 6,7 % del total. El 61 % del riesgo se concentraba en operaciones de más de 1 millón de euros, que suponen el 1,2 % del total de las operaciones (véase cuadro 2.16).

La gran mayoría de los préstamos vivos a diciembre de 2020 se habían contratado a través de la red de oficinas, que, junto con los contratados en la oficina central, representaban el 75,4 % del número de operaciones y el 93,6 % del importe dispuesto (véase cuadro 2.17). Los siguientes canales de comercialización, por número de operaciones, fueron los puntos de venta y la página web.

4 Información de las medidas por el COVID-19

A lo largo del 2020 se fueron aprobando varias medidas de apoyo a las empresas y a las familias para mitigar el impacto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. En este epígrafe se presentan los datos disponibles sobre el impacto de las líneas de avales del Estado y de las moratorias tanto legislativas⁸ como sectoriales (de las asociaciones de entidades)⁹. Además, también se proporciona información sobre el resto de las moratorias individuales, amparadas en el principio de libertad de pactos del Código Civil y que son acordadas por las partes, aunque no se deriven de una norma legal ni estén acogidas a un acuerdo marco sectorial. Los datos presentados en este epígrafe recogen las medidas vivas al 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, las operaciones acogidas a los programas, pero ya vencidas en esa fecha, no aparecen en los siguientes cuadros.

Las medidas totales de apoyo concedidas a las sociedades no financieras, vigentes en diciembre de 2020, alcanzan 81,4 mm de euros de financiación, que suponen un 15,5 % del importe total dispuesto por este sector (más de 630.000 operaciones, un 12,4 % del total de las operaciones), correspondiendo la gran mayoría (el 96,1 %) a garantías del Estado (véase cuadro 2.18).

En cuanto a las personas físicas, el 5 % del importe total dispuesto en diciembre de 2020 se había acogido a alguna medida de apoyo (véase cuadro 2.18). Esto representa más de 800.000 operaciones, con un importe de 34,8 mm de euros. En gran parte, fueron moratorias sectoriales (75,8 %) y garantías del Estado

8 Las moratorias legislativas o legales han sido establecidas en distintos reales decretos-leyes publicados en 2020: las moratorias de deudas hipotecarias en el RD-L 8/2020, las moratorias de créditos de financiación no hipotecaria en el RD-L 11/2020, las moratorias referidas al sector turístico en el RD-L 25/2020, mientras que las enfocadas a las actividades del sector de transporte están reguladas en el RD-L 26/2020.

9 Llevadas a cabo a través de los acuerdos marco de asociaciones de entidades, según se establece en el Real Decreto 19/2020.

Cuadro 2.18

OPERACIONES ACOGIDAS A MEDIDAS COVID-19. SNF Y PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

	Diciembre de 2020							
	Sociedades no financieras				Hogares (personas físicas) e ISFLSH			
	Número de operaciones		Importe dispuesto		Número de operaciones		Importe dispuesto	
	(miles)	Proporción del total (%)	(millones de euros)	Proporción del total (%)	(miles)	Proporción del total (%)	(millones de euros)	Proporción del total (%)
Garantía del Estado. COVID-19	625,9	98,8	78.231	96,1	313,4	38,4	6.408	18,4
Garantía de otra administración pública. COVID-19	2,0	0,3	334	0,4	1,3	0,2	33	0,1
Moratoria legal. COVID-19	1,8	0,0	1.275	1,6	3,8	0,5	113	0,3
Moratoria asociación. COVID-19	0,2	0,0	21	0,0	471,6	57,7	26.375	75,8
Moratoria individual. COVID-19	3,7	0,6	1.518	1,9	26,3	3,2	1.865	5,4
Con garantía y moratoria	0,2	0,0	65	0,1	0,2	0,0	3	0,0
TOTAL	633,8	100,0	81.444	100,0	816,6	100,0	34.798	100,0
Pro memoria: Préstamos y VRD a SNF y Hogares	5.100,0		523.987		41.012,8		689.452	
Pro memoria: Proporción operaciones con alguna medida sobre el total (%)	12,4		15,5		2,0		5,0	

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 2.19

DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES E IMPORTE, POR TRAMOS DEL IMPORTE DISPUESTO. PERSONAS FÍSICAS, HOGARES E ISFLSH. MEDIDAS COVID-19**Entidades de crédito y EFC. Préstamos**

Tramo del importe dispuesto de la operación	Diciembre de 2020 - Importe dispuesto					
	Garantía del Estado. COVID-19		Moratoria asociación. COVID-19		Moratoria entidad. COVID-19	
	Importe dispuesto (millones de euros)	Operaciones con garantía sobre total de operaciones (%) (a)	Importe dispuesto (millones de euros)	Operaciones con moratoria sobre total de operaciones (%) (a)	Importe dispuesto (millones de euros)	Operaciones con moratoria sobre total de operaciones (%) (a)
1 0-9.999 euros	623,5	1,2	598,9	1,1	31,1	0,1
2 10.000-24.999 euros	1.758,8	2,8	1.048,7	1,7	55,7	0,1
3 25.000-50.000 euros	1.467,2	2,0	2.117,9	2,9	116,4	0,2
4 50.000-99.999 euros	990,1	0,6	6.625,3	3,9	413,1	0,2
5 100.000-249.999 euros	656,7	0,3	12.333,5	4,8	941,3	0,4
6 250.000+ euros	912,0	1,2	3.650,5	4,9	307,6	0,4
TOTAL GENERAL	6.408,2	0,9	26.374,7	3,8	1.865,2	0,3

FUENTE: Banco de España.

a Véase cuadro 2.14.

OPERACIONES CON GARANTÍA DEL ESTADO COVID-19. SNF**Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda**

Tramo del importe dispuesto de la operación	Diciembre de 2020			
	Número de operaciones		Importe dispuesto	
	(miles)	Operaciones con garantía sobre total de operaciones (%) (a)	(millones de euros)	Operaciones con garantía sobre total de operaciones (%) (a)
C Industria manufacturera	96,1	11,0	16.547,9	19,8
F Construcción	69,1	9,5	7.422,8	9,2
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas	179,1	13,1	22.065,5	26,3
H Transporte y almacenamiento	35,2	10,4	4.950,6	13,2
I Hostelería	63,2	20,4	6.987,6	21,9
M Actividades profesionales, científicas y técnicas	46,7	13,9	4.489,6	18,8
N Actividades administrativas y servicios auxiliares	26,3	11,4	3.366,9	19,2
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	12,9	18,3	1.385,0	29,0
Resto	97,3	11,6	11.014,8	6,9
TOTAL	625,9	12,3	78.230,7	14,9

FUENTE: Banco de España.

a Véase cuadro 2.14.

(18,4 %). Hay que tener en cuenta que estos importes no representan los créditos totales que se han beneficiado de estas medidas a lo largo de 2020. Especialmente, en el caso de las moratorias legales, los plazos originales a los que se concedieron hacen que una gran parte de ellas se encuentren ya vencidas a diciembre de 2020 y, por lo tanto, que esos créditos no aparezcan como beneficiados de las medidas adoptadas.

En el caso de los hogares y de las moratorias de las asociaciones, las operaciones entre 100.000 y 250.000 euros fueron, en términos absolutos, las más beneficiadas, y el 4,8 % de los préstamos de ese tramo pudieron acogerse a la suspensión de pagos, por un importe total de más de 12,3 mm de euros (véase cuadro 2.19). Por su parte, las garantías se concentraron en operaciones entre 10.000 y 50.000 euros, afectando a un importe total de 3,1 mm de euros.

Las principales actividades receptoras de garantías del Estado, en términos absolutos, según el importe total dispuesto, fueron el comercio (22,1 mm de euros) y la industria manufacturera (16,5 mm de euros). No obstante, las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento son las que presentaron una mayor proporción de su importe total dispuesto garantizado con avales del Estado, en relación con el total de la financiación de esa actividad, ya que el 29 % del crédito para estas actividades se acogió a dicha medida.

OPERACIONES CON GARANTÍA DEL ESTADO COVID-19. SNF. DISTRIBUCIÓN POR EL IMPORTE DISPUESTO EN LA OPERACIÓN
Entidades de crédito y EFC. Préstamos y valores representativos de deuda

	Diciembre de 2020			
	Número de operaciones		Importe dispuesto	
	(miles)	Operaciones con garantía sobre total de operaciones (%) (a)	(millones de euros)	Operaciones con garantía sobre total de operaciones (%) (a)
Menos de 10.000 euros	121,8	4,2	282,2	5,4
Entre 10.000 y 24.999 euros	112,2	16,0	1.872,6	16,2
Entre 25.000 y 49.999 euros	120,4	23,4	4.160,8	23,0
Entre 50.000 y 99.999 euros	109,7	26,7	7.253,4	25,4
Entre 100.000 y 249.999 euros	97,0	28,7	14.196,5	27,6
Entre 250.000 y 999.999 euros	54,4	27,7	23.532,7	26,3
Entre 1 y 5 millones de euros	9,5	18,4	15.477,7	15,3
Entre 5 y 25 millones de euros	0,8	8,5	7.099,6	7,4
Más de 25 millones de euros	0,1	4,6	4.355,2	3,6
TOTAL	625,9	12,3	78.230,7	14,9

FUENTE: Banco de España.

a Véase cuadro 2.15.

Por tramos del importe dispuesto de la financiación a las sociedades no financieras, las operaciones entre 250.000 y un millón de euros fueron las principales receptoras de garantías del Estado. Ese tramo recibió garantías por un importe de 23,5 mm de euros, lo que supuso que el 26,3 % del total de los riesgos y el 27,7 % de las operaciones de ese tramo se acogieron a esta medida. No obstante, hay que señalar que el mayor número de operaciones beneficiadas de los avales se encuentra en los tramos de importes por debajo de los 100.000 euros.



3

USOS DE LA INFORMACIÓN DE LA CIR Y EJERCICIO DE DERECHOS POR LOS TITULARES DE RIESGO

INFORME DE RIESGOS

Instrumento muy práctico para acreditar el historial crediticio de empresas y de hogares. Disponible gratuitamente para todos los prestatarios (personas físicas y jurídicas)

473.000

Informes de riesgos solicitados por los acreditados en 2020

322 ENTIDADES

Tienen acceso a la información sobre el riesgo de sus clientes en el conjunto del sistema

NUEVAS ENTIDADES RECEPTORAS

80 prestamistas inmobiliarios y 34 intermediarios de crédito inmobiliario

DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y/O CANCELACIÓN

Los acreditados pueden ejercer sus derechos ante la entidad declarante o ante el Banco de España presentando una reclamación en la CIR

5.348

Reclamaciones recibidas en el Banco de España en 2020 sobre la información de riesgos declarada a la CIR

AVALES POR COVID-19

Los informes de la CIR a 31.12.2019 fueron una pieza clave para el acceso a estas ayudas/medidas

ICO

El ICO tiene acceso a la información de las operaciones avaladas por el Estado con carácter previo al pago de las cantidades impagadas por los prestatarios

1 Introducción

Tanto usuarios internos del Banco de España como externos utilizan la información de la CIR. Entre los primeros, se encuentran las personas encuadradas en los departamentos del Banco que desarrollan las funciones anteriormente mencionadas (analistas de estabilidad financiera, inspectores de entidades de crédito, analistas de riesgos, estadísticos, investigadores, etc.). Por su parte, entre los usuarios externos, además de las entidades declarantes y los propios acreditados, hay que mencionar las autoridades judiciales, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Hacienda (MINH).

Para analizar estos usos, este capítulo se articula en torno a seis epígrafes, además de esta introducción. En el segundo epígrafe se resume la información que la CIR pone a disposición de las entidades declarantes (conocida como «información de retorno»). El tercer y el cuarto epígrafes reflejan, respectivamente, el ejercicio por los acreditados del derecho de acceso a la información registrada sobre ellos en la CIR —a través de los informes de riesgos— y, frente a las entidades declarantes, de los derechos de rectificación o supresión de esta información a través de la CIR. Estos epígrafes incluyen dos recuadros: el primero describe la relación de la CIR con los avales ICO y el segundo se enfoca a aclarar el alcance del ejercicio de los derechos de rectificación/supresión de datos declarados a la CIR. En el quinto epígrafe se describe el uso de la CIR por el Banco de España, incluyendo un recuadro con una descripción del uso de los datos de la CIR en los trabajos estadísticos que desarrolla la Central de Balances del Banco de España. En el último epígrafe se repasa el uso de la CIR por otros usuarios institucionales.

2 Información de retorno a las entidades

Una de las funciones fundamentales de la CIR es proporcionar información a las entidades declarantes sobre el nivel de endeudamiento y el cumplimiento con las obligaciones crediticias tanto de sus clientes como de sus potenciales nuevos clientes. En este sentido, el artículo 61 de la Ley 44/2002 establece que, para que las entidades puedan acceder a esa información, debe darse alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que el titular mantenga algún tipo de riesgo con la entidad.
- b) Que haya solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra operación de riesgo.

- c) Que el titular figure como obligado al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad.

La información que proporciona la CIR a las entidades se facilita telemáticamente, por dos vías:

- Mensualmente se remiten, a cada entidad, de forma automática y sin solicitud previa, los informes de riesgos de todos los deudores con los que la entidad mantiene a fin de mes algún tipo de riesgo («informes automáticos»).
- A solicitud de la entidad, y para la evaluación de un posible nuevo deudor (casos b y c anteriores), se remite el informe de riesgos sobre nuevos acreditados («informes puntuales»). En este caso, se proporciona a la entidad, además del informe de riesgo del titular correspondiente al último mes disponible, el informe correspondiente al sexto mes anterior al último disponible.

En los informes se proporcionan datos sobre los riesgos contraídos por un determinado titular en el conjunto de las entidades declarantes siempre que el riesgo acumulado en una misma entidad sea superior a un determinado umbral. Además, se incluye, para cada tipo de producto y sin identificar a las entidades, el saldo agregado de todas las operaciones en las que coinciden sus características (garantías, plazo, moneda, etc.).

El número de entidades e intermediarios inmobiliarios que en 2020 tuvieron la posibilidad de acceder a los informes de riesgos de sus clientes a través de la CIR fue de 322. Hasta 2019, accedían a los informes de la CIR un total de 256 entidades. Durante 2020, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 5/2019, se ha producido la paulatina incorporación a la CIR de los prestamistas inmobiliarios y de los intermediarios de crédito inmobiliario; estos últimos, únicamente como entidades usuarias de los «informes puntuales». Su incorporación no ha estado exenta de dificultades, dada la dispar naturaleza de estos nuevos agentes y su falta de experiencia en el reporte regulatorio. En la fecha de confección de esta Memoria, 80 prestamistas inmobiliarios (no todos están declarando, ya que están en proceso de incorporación) y 34 intermediarios de crédito inmobiliario están registrados en la CIR, lo que supone un aumento de más del 30 % respecto a las entidades existentes hasta la incorporación de estas nuevas entidades.

En 2021 se reduce el umbral de la información que se retorna a las entidades y se adelanta la fecha en la que esta información se pone a su disposición. Otros desarrollos normativos más recientes inciden también, como se ha explicado anteriormente, en la actividad de la CIR, particularmente en los usos por las entidades de los datos registrados. En concreto, tras la aprobación de la Orden

ETD/699/2020, de regulación del crédito revolving, se ha rebajado el umbral de los datos facilitados por el Banco de España a las entidades declarantes y a los intermediarios de crédito inmobiliario para el ejercicio de su actividad, desde los 9.000 euros de riesgo acumulado por el acreditado en una entidad hasta los 1.000. Asimismo, la OM de crédito revolving fija el vigésimo primer día natural del mes siguiente al que se refieran los datos como la fecha en la que estos se ponen a disposición de las entidades; anteriormente, la información estaba disponible a principios del segundo mes siguiente al que se refieran. Estas dos modificaciones entraron en vigor en enero de 2021, con lo que la información recibida por las entidades ha ganado tanto en contenido material como en agilidad.

En 2020, el número de informes facilitados a las entidades por la CIR fue de 251,2 millones (un 0,2 % inferior al año anterior), de los que el 98,1 % fueron *automáticos* y el 1,9 % *puntuales* (véase cuadro 3.1). Este descenso fue consecuencia de la reducción en los informes puntuales solicitados por las entidades. La incertidumbre asociada a la crisis sanitaria del COVID-19 y el comportamiento prudente de las entidades pueden estar en el origen del descenso de estas cifras. No obstante, hay que destacar el aumento de casi un 34 % de los informes solicitados directamente por los acreditados. Como se explica en el siguiente punto y en el recuadro 3.1, este aumento se ha debido, en gran medida, a que, entre los requisitos para el acceso a las líneas de avales por cuenta del Estado gestionados por el ICO, figuraba la exigencia de no estar en situación de morosidad en el informe de riesgos de la CIR a 31 de diciembre de 2019 y a que las entidades inicialmente no podían tener acceso los informes en esta fecha, lo que obligaba a que fuesen los interesados quienes tuvieran que solicitarlos.

La solicitud y el envío por la CIR de los informes de riesgos para la evaluación de solvencia se realizan mediante procedimientos telemáticos y automatizados. No obstante, esta automatización puede precisar un tratamiento manual cuando existe una disparidad entre los datos del titular registrados por la entidad en su solicitud (DNI, NIE o NIF y nombre) y los registrados previamente en la CIR, aportados por las otras entidades declarantes. Durante 2020, la CIR recibió un total de 336.000 solicitudes con errores, de las que fueron rechazadas 8.600, por resultar la discrepancia invalidante.

En aplicación del principio de reciprocidad que rige la CIR, las entidades solo pueden acceder a los informes de riesgos de la CIR si, a su vez, ponen a disposición de todo el sistema los datos de sus clientes y de sus operaciones.

En relación con el acceso de las entidades declarantes a la CIR, es relevante señalar que, la Circular 1/2013, en su redacción actual, contempla la posibilidad de que el Banco de España impida temporalmente el acceso de una entidad declarante a los informes de la CIR cuando, a su juicio, haya incumplido sus obligaciones de declaración con la puntualidad, calidad y exactitud necesarias. Por otro lado, hay que destacar que las solicitudes de informes de riesgos sobre nuevos acreditados

INFORMES A LAS ENTIDADES, ACREDITADOS Y OTROS

Año	Informes emitidos (miles)										
	Total	% var.	Para entidades declarantes				Para acreditados y otros				
			Total	% var.	Automáticos	Puntuales	Total	% var.	Acreditados	Juzgados	Otros
2009	302.561	3,7	302.451	-2,1	297.264	5.187	110	-15,4	107,0	0,8	1,9
2010	294.982	-2,5	294.864	-2,5	290.290	4.574	118	7,3	116,7	0,3	1,0
2011	284.789	-3,5	284.658	-3,5	280.940	3.718	131	11,0	130,1	0,1	0,7
2012	270.780	-4,9	270.633	-4,9	267.412	3.221	147	12,1	146,5	0,1	0,2
2013	257.384	-4,9	257.227	-5,0	253.897	3.330	157	6,9	156,8	0,0	0,1
2014	250.351	-2,7	250.175	-2,7	245.905	4.270	176	12,1	175,5	0,1	0,4
2015	248.726	-0,6	248.525	-0,7	243.615	4.910	201	14,2	200,7	0,1	0,2
2016	241.725	-2,8	241.475	-2,8	236.524	4.951	250	24,6	246,9	2,7	0,9
2017	244.108	1,0	243.855	1,0	239.097	4.758	253	1,0	250,8	1,2	0,9
2018	247.456	1,4	247.151	1,4	242.266	4.885	305	20,6	303,0	1,1	0,9
2019	252.074	1,9	251.719	1,8	246.259	5.460	355	16,4	350,3	3,6	1,1
2020	251.650	-0,2	251.174	-0,2	246.499	4.675	476	33,9	473,3	1,2	1,0

FUENTE: Banco de España.

se tramitan sin que el Banco de España compruebe previamente que se cumplen los requisitos marcados por la norma (es decir, que el titular haya solicitado a la entidad un préstamo o cualquier otra operación de riesgo, o que figure como obligado al pago o garante en documentos cambiarios o de crédito cuya adquisición o negociación haya sido solicitada a la entidad). Siguiendo el principio de responsabilidad proactiva que inspira la normativa de protección de datos, y según dispone la Circular 1/2013, el Banco de España supervisa el cumplimiento por las entidades de crédito de los requisitos legales necesarios, pudiendo llegar a la imposición de sanciones por un uso inadecuado de la CIR por parte las entidades declarantes o de los intermediarios de crédito.

Las entidades que soliciten estos informes deben informar por escrito a los solicitantes de que disponen del derecho a consultar los datos de la CIR. Adicionalmente, deben conservar los documentos justificativos de las solicitudes de operaciones de riesgo que hayan sido denegadas y por las que, en su momento, solicitaron los informes. Por su parte, la Ley 44/2002 establece, en su artículo 62, que las entidades solo podrán utilizar la información proporcionada por la CIR en el marco de su actividad de concesión y gestión de préstamos o para el cumplimiento de la normativa sobre concentración de riesgos y cualquier otra que, en el ámbito de la supervisión prudencial a la que están sometidas, les sea de aplicación. La norma decimosexta de la Circular 1/2013 del Banco de España le faculta a comprobar la correcta actuación de las entidades en relación con dicho procedimiento. En los cuatro últimos años se ha revisado la actuación de un conjunto de entidades en este

LA CIR Y LOS AVALES ICO

Para paliar las consecuencias económicas del coronavirus, en 2020 se aprobaron diversas líneas de avales por cuenta del Estado gestionadas por el ICO («avales ICO»). La información que contiene y recopila la CIR ha sido relevante en distintos momentos de la vida de las operaciones para las que se han solicitado «avales ICO».

- Elegibilidad de los préstamos con avales gestionados por el ICO: no morosidad en el informe CIR de diciembre de 2019.

El acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 articulaba las líneas de avales ICO y determinaba los requisitos para evaluar la elegibilidad de los préstamos. Entre otras condiciones, se exigía que los acreditados no estuvieran en situación de morosidad en el informe de riesgos de la CIR a 31 de diciembre de 2019.

En abril de 2020, cuando se empezaron a solicitar los avales, las entidades no tenían acceso al reporte correspondiente a esta fecha mediante el proceso normal de solicitud de informes de riesgo de nuevos acreditados. Téngase en cuenta que la información que el Banco de España pone a su disposición incluye los datos referidos al último mes disponible (en ese momento, febrero de 2020) y a los seis meses anteriores (en este caso, agosto de 2019). Eso implicaba, que solo los interesados podían acceder a su informe de riesgos y, dadas las restricciones de movilidad vigentes en aquellas fechas, el acceso era exclusivamente por procedimientos telemáticos, que requieren el uso de certificado electrónico, del que muchos ciudadanos carecían.

Durante las primeras semanas de abril, y como consecuencia de este requisito, las solicitudes de informes de riesgos y la demanda de información sobre los procedimientos de obtención crecieron de forma desmedida y supusieron más del 85 % de la información consultada o descargada desde el sitio web del Banco de España. Adicionalmente, durante esos días, se recibieron en la CIR cerca de 17.000 llamadas telefónicas y más de 2.000 correos electrónicos, procedentes de entidades y de particulares, poniendo en evidencia la imposibilidad de acceder a los informes, por carecer de certificado electrónico y de la posibilidad de conseguirlo.

Ante esta situación, para facilitar la rápida implementación del programa de avales del ICO, excepcionalmente y con carácter urgente, durante la primera semana de abril, la CIR modificó sus procedimientos, habilitando el acceso

directo de las entidades al informe de diciembre de 2019 de sus potenciales nuevos clientes. De este modo, las entidades disponían de la información requerida para determinar la elegibilidad de las operaciones, evitando que tuviera que ser aportada por los solicitantes. Aun así, según puede deducirse del cuadro 3.1, los informes de riesgos obtenidos por los acreditados se incrementaron en 2020 cerca de un 35 % respecto a los obtenidos el año anterior.

- Reporte a la CIR de operaciones afectadas por las medidas COVID.

Por otro lado, la normativa también estableció la obligación de que las entidades señalizasen en sus sistemas de contabilidad y de gestión de riesgo las operaciones anteriormente mencionadas, con el fin de facilitar su trazabilidad. Además, esta señalización debía incorporarse en su declaración a la CIR. Para dar cumplimiento a esta obligación y así facilitar el seguimiento y análisis posterior de las operaciones correspondientes, el Banco de España estableció los procedimientos necesarios para que las entidades incorporasen, en la información regular que mensualmente remiten a la CIR, los datos necesarios sobre estas operaciones (véase el epígrafe 4.4 de la *Memoria de la CIR 2019*). Una información más detallada sobre las operaciones acogidas a medidas COVID-19 puede encontrarse en el epígrafe 2.4 de esta Memoria.

- Control por el ICO de las operaciones avaladas.

Por último, la normativa también establecía que el ICO gestionaría los avales concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Entre otras funciones, al ICO le corresponde abonar a las entidades financieras los importes correspondientes a los avales ejecutados.

Para cumplir con esta obligación, el ICO necesita acceder a los informes existentes en la CIR de los acreditados, a fin de verificar que efectivamente las reclamaciones por parte de las entidades financieras relativas al abono de los avales ejecutados son acordes con la información que posee la CIR, y, una vez contrastada esta información, proceder con las máximas garantías al abono del importe de los avales a las entidades financieras. Sin embargo, en marzo de 2020 el ICO no podía legalmente tener acceso a estos informes, ni como entidad declarante (los acreditados no son clientes suyos, ni tampoco potenciales nuevos clientes), ni como

avalista de las operaciones (el ICO actúa como gestor; dependiendo del tipo de aval, los avalistas son el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o el de Asuntos Económicos y Transformación Digital). Para solventar esta dificultad, la disposición adicional única del [RDL 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria](#), facilitó legalmente el acceso del ICO a los informes de riesgos los acreditados en estas operaciones. El citado real decreto-ley establece que el ICO, con el objeto de agilizar los trámites relativos a la comprobación de los

impagados en la CIR que le sean comunicados por las entidades financieras otorgantes de los préstamos a los que haya aportado un aval, tendrá derecho a obtener la información referida sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas registrados en la CIR, cuando así lo solicite, sin que deba cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Ley 44/2002. Al objeto de poder atender este requerimiento por parte de la CIR, se ha establecido un proceso técnico especial y específico para el ICO, que permite facilitarle los informes necesarios para el desarrollo de esta atribución de responsabilidades.

ámbito, que, globalmente, son las responsables de haber solicitado a la CIR en torno al 60 % de los «informes puntuales». En la fecha de publicación de esta Memoria se ha iniciado la revisión de la actuación de otras cinco entidades. Para una explicación más detallada de este procedimiento, véase el recuadro 3.1 de la *Memoria de la CIR 2018*.

3 Derecho de acceso de los ciudadanos a su información registrada en la CIR (informes de riesgos)

Los derechos de acceso y rectificación/cancelación que los ciudadanos pueden ejercer sobre la información de la CIR no se suspendieron durante el estado de alarma. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció que los plazos de determinados procedimientos administrativos y judiciales quedaban suspendidos durante su vigencia. No obstante, la CIR siguió tramitando tanto las solicitudes de informes y como las reclamaciones recibidas.

El ejercicio del derecho de acceso por los interesados a los datos declarados por las entidades a la CIR se rige por su normativa específica, la Ley 44/2002 y su normativa de desarrollo. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española, que dispone que «la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». Tanto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 —Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)—, como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,

de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), establecen una serie de derechos a favor de las personas físicas, en relación con el tratamiento de sus datos (derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho a la limitación del tratamiento, a la supresión o derecho al olvido y a la portabilidad de los datos). Frente a esto, el artículo 23 del RGPD establece que el alcance de estos derechos puede ser limitado por una ley nacional (por ejemplo, en el caso de la CIR, para salvaguardar una función de supervisión vinculada con el ejercicio de la autoridad pública). En virtud de este artículo, en materia de ejercicio de derechos, no se aplica el régimen general del RGPD a los datos recogidos en la CIR, sino el establecido en la Ley 44/2002. En virtud de esta última norma, la CIR contempla, con sus especialidades, los derechos de acceso y de cancelación/rectificación de las personas jurídicas.

En el caso de la CIR, la Circular 1/2013 establece que el ejercicio de este derecho se concreta en facilitar al titular de riesgo, ya sea persona física o jurídica, la información crediticia que mantiene frente a cada entidad, a través del denominado «informe de riesgos». A partir de esa información, los titulares pueden ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, ante el Banco de España o la propia entidad, si detectan algún error o discrepan con la información declarada por las entidades.

El derecho de acceso a los datos de la CIR es gratuito. La CIR emite dos informes relativos a los riesgos declarados a nombre de los titulares que lo soliciten. El primero de ellos contiene la misma información que la facilitada a las entidades declarantes en los informes automáticos. En el segundo se proporciona información de cada operación, siempre que el importe agregado en una entidad sea superior al umbral de retorno e indicando la entidad que declaró cada operación. Adicionalmente, las personas físicas pueden acceder a la información sobre los cesionarios de sus datos durante los seis últimos meses.

El informe de riesgos es un instrumento práctico para acreditar el historial crediticio de empresas y de hogares, puesto que incluye toda la información de sus operaciones crediticias, incluyendo los posibles impagos. Puede utilizarse para acreditar de forma sólida la solvencia frente a los terceros que así lo requieran por motivos diversos (contratos de alquiler, apertura de cuentas, procesos de auditoría empresarial, etc.).

La solicitud de estos informes puede hacerse a través de la web del Banco de España, por correo postal o de forma presencial en cualquiera de las sedes del Banco de España (sede central o alguna de sus sucursales). Para ello, solo es necesario que el titular presente una solicitud firmada y aporte la documentación necesaria para acreditar debidamente su identidad y su derecho a la obtención del informe de riesgos solicitado. Cuando la solicitud no se presenta en nombre propio, es decir, cuando se solicita el informe de riesgos de un tercero (una sociedad,

DETALLE DE LOS INFORMES DE RIESGOS

DATOS DEL PRODUCTO	<ul style="list-style-type: none"> — Entidad — Código identificativo de la operación 		INFORMES DETALLADOS A LOS TITULARES (importes en euros)
	<ul style="list-style-type: none"> — Tipo de producto — Moneda — Plazo residual 		
DATOS DE TITULARIDAD	<ul style="list-style-type: none"> — Identificación del titular — Naturaleza de la intervención en la operación — Solidario/colectivo 		
DATOS DE IMPORTES Y SITUACIÓN DE LA OPERACIÓN	SITUACIÓN DE LA OPERACIÓN		
	IMPORTES: RIESGOS DIRECTOS <ul style="list-style-type: none"> — Riesgo dispuesto total <ul style="list-style-type: none"> Del que: Importes vencidos Del que: Intereses de demora y gastos exigibles — Riesgo disponible 		INFORMES AGREGADOS (importes en miles de euros)
	IMPORTES: RIESGOS INDIRECTOS <ul style="list-style-type: none"> — Riesgo dispuesto total <ul style="list-style-type: none"> Del que: Importes vencidos Del que: Intereses de demora y gastos exigibles — Riesgo disponible 		
DATOS DE LAS GARANTÍAS	<ul style="list-style-type: none"> — Garantía real <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de garantía • Cobertura (total/parcial) 		
	<ul style="list-style-type: none"> — Garantía personal <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de garantía • Cobertura (total/parcial) 		

FUENTE: Banco de España.

un titular fallecido en el caso de la tramitación de una testamentaría, un representado), es preciso verificar la adecuación de los poderes presentados para valorar el derecho del solicitante a acceder al informe de riesgos de la persona en cuyo nombre se solicita, y hay que bastantear los poderes. En otros casos, si el titular tiene varios documentos de identidad (por ejemplo, un NIE y un DNI), es necesario comprobar si tiene riesgos adicionales con cualquiera de los documentos que le identifican y no solo con el presentado. En 2020 se atendieron más de 3.300 peticiones de comprobación recibidas desde las diferentes sucursales, normalmente para el bastanteo de los poderes o de las testamentarías presentados.

El Banco de España dispone de un plazo legal de diez días para atender el derecho de acceso del titular. En las solicitudes presenciales, la entrega de los

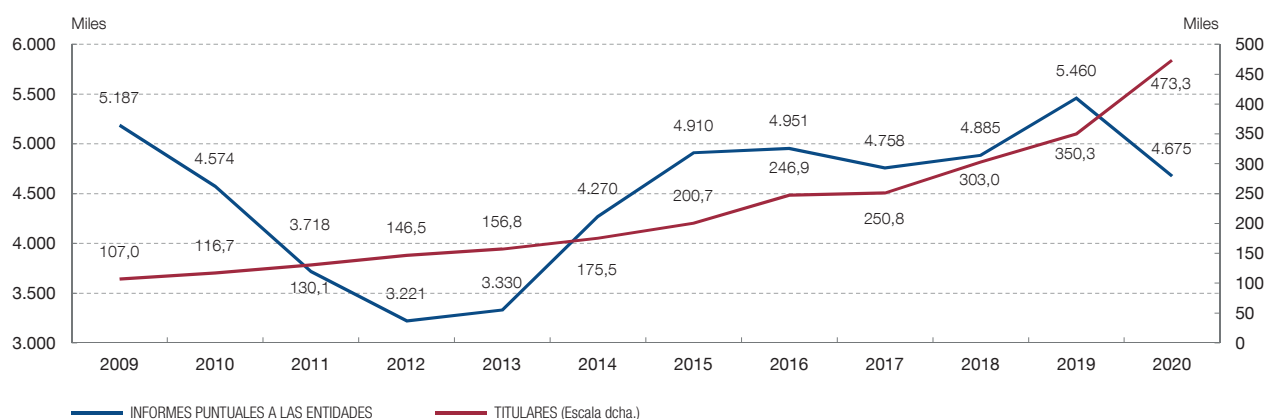
informes es inmediata si no es necesaria ninguna verificación adicional de la identidad del solicitante o de su derecho a la obtención del informe que solicita, cuando no se actúa en nombre propio. Si la documentación aportada plantea alguna dificultad que impida una comprobación ágil, el informe se envía con posterioridad por correo certificado al domicilio del solicitante. Las solicitudes por correo postal¹ se contestan desde la sede central. Una vez revisada la documentación, en pocos días, el informe se envía por correo certificado al domicilio del solicitante. Este año, para la atención de estas solicitudes, se remitieron 7.695 cartas, a las que se adjuntaron 10.746 informes. Si el escrito no refleja la firma original y autógrafa del solicitante o si la documentación aportada no acredita suficientemente su derecho, la CIR remite al demandante un escrito indicando la subsanación necesaria. Se contestaron otras 1.855 solicitudes para las que se requería documentación adicional.

La vía más utilizada y rápida para la obtención del informe de riesgos es a través de la Oficina Virtual, en la web del Banco de España. Para ello, es imprescindible disponer de firma digital o de certificado electrónico emitido por alguno de los prestadores de servicios de certificación (PSC) admitidos por el Banco de España. Los más utilizados son el DNI electrónico y el emitido por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Una vez cursada la solicitud, los informes de riesgos correspondientes a la última fecha disponible están listos aproximadamente en 15 minutos (los de fechas anteriores a la última disponible pueden descargarse al día hábil siguiente). Como en el caso de los informes de riesgos a entidades declarantes, en ocasiones se produce alguna disparidad entre los datos del certificado de firma digital y los datos declarados por las entidades a la CIR, que no puede resolverse de forma automática, sino que precisa la intervención del personal del Banco de España.

De forma excepcional, desde marzo hasta junio no hubo atención presencial, ni en la sede central de Cibeles, ni en las sucursales. Sin embargo, esto no supuso una interrupción de la actividad de la CIR, que siguió atendiendo al público a través del correo postal y de la Oficina Virtual. No obstante, el servicio de correos funcionó con dilaciones, lo que ocasionó que las solicitudes por correo postal se ralentizaran. Además, durante estos meses tampoco estaba disponible la atención al público en la FNMT, que hubiera permitido a los titulares conseguir su certificado digital. Hay que añadir a estas dificultades el hecho de que la demanda de informes de riesgos por los titulares aumentó de forma exponencial (véase el recuadro 3.1). Lógicamente, el aumento en las solicitudes de informes de riesgos a la CIR a través de la web fue muy significativo. Por otro lado, también se incrementaron las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, que ponían en evidencia la dificultad de acceder a los informes o demandaban información sobre incidencias técnicas en

¹ Las solicitudes han de remitirse al Banco de España, calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid, a la atención de la Central de Información de Riesgos.

Gráfico 3.1

INFORMES PUNTUALES A LAS ENTIDADES Y A LOS TITULARES

FUENTE: Banco de España.

las descargas, sobre el significado de las claves del informe o sobre el procedimiento para la cancelación o la rectificación de datos, por considerarlos inexactos o incompletos. Las llamadas totales atendidas en 2020 en relación con estos asuntos fueron cercanas a las 51.000, de las que casi 17.000 se concentraron en abril. En cuanto a los correos electrónicos remitidos por los titulares para esta misma finalidad, fueron 7.300 este año (más de 2.000 únicamente en abril).

En conjunto, el número de acreditados que solicitó informes a la CIR en 2020 ascendió a 473.300, lo que supone un incremento de casi el 35 % respecto a 2019 (véase cuadro 3.1). El grueso de los informes de riesgos (más del 80 %) se pidió a través de la Oficina Virtual del Banco de España (www.bde.es). En los próximos años se podrá comprobar si este porcentaje se consolida o, incluso, si sigue aumentando. Por el contrario, durante 2020 las solicitudes de informes de riesgo puntuales por parte de las entidades disminuyeron casi un 15 %.

4 Derecho de rectificación o de supresión (reclamaciones de los acreditados)

Los acreditados pueden ejercitar sus derechos de rectificación y de cancelación si detectan algún error o discrepan de la información disponible en la CIR. Por otro lado, en el momento en que las entidades declarantes identifiquen información errónea declarada a la CIR, están obligadas a corregirla. Esto da lugar a rectificaciones o a cancelaciones de los datos declarados. En todo caso, son las entidades declarantes, como responsables de las declaraciones, las que han de enviar las posibles rectificaciones a la CIR. Los acreditados que detectan algún error o discrepan de la información declarada pueden dirigirse directamente a las

entidades para solicitar su rectificación o cancelación, o realizar la reclamación pertinente a través del Banco de España. En este último caso, la CIR colabora con los titulares² en la resolución de sus discrepancias con las entidades, sin perjuicio del derecho de las personas físicas a presentar reclamaciones contra las entidades declarantes ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El procedimiento de reclamación se inicia mediante una solicitud del interesado dirigida al Banco de España, lo que se puede hacer presencialmente en la sede central o en cualquiera de sus sucursales, mediante correo postal o electrónicamente a través de la Oficina Virtual del Banco de España (www.bde.es).

El titular deberá cumplir una serie de requisitos formales para que la CIR acepte la tramitación de su reclamación. En particular, deberá acreditar adecuadamente su identidad en función del medio a través del cual se presente la reclamación. Además, es imprescindible que el titular identifique aquellas operaciones respecto de las que solicita su cancelación o rectificación, explicando los datos que considera erróneos, justificando las razones y el alcance de su petición, e indicando la corrección que haya de realizarse. El titular puede aportar, en su caso, documentación justificativa de la inexactitud o del carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. En caso de incumplirse estos requisitos, la CIR solicitará al titular la subsanación del error, a fin de poder tramitar su petición. Cuando la solicitud contenida en el escrito de reclamación no se ajusta a las atribuciones de la CIR, se rechaza motivadamente.

Una vez que la CIR admite a trámite una solicitud de cancelación o rectificación de datos, se suspende la cesión de la información a terceros durante el proceso de revisión y se avisa de su bloqueo cautelar. Esto evita que datos cuestionados por el titular sean cedidos a las entidades declarantes. Este bloqueo cautelar se mantiene durante el proceso de reclamación. La CIR da traslado de la reclamación recibida a la entidad y esta ha de dar contestación en un plazo de 15 días si el reclamante es una persona física o de 20 días si quien presenta la reclamación es una persona jurídica. Ante la presentación de una reclamación, la entidad puede contestar ratificando razonadamente los datos declarados, o bien, si son incorrectos, puede proceder a rectificarlos o cancelarlos. Si la entidad corrige (o cancela) los datos sobre los que se ha presentado la reclamación, la CIR levantará el bloqueo de los datos rectificados y comunicará dicha rectificación a las entidades a las que fue cedido el dato erróneo. Si, por el contrario, la entidad se ratifica en su declaración y no se modifican o cancelan los datos reclamados, el bloqueo cautelar se prolonga durante dos meses, a fin de que el titular pueda realizar otras actuaciones tendentes a la rectificación del dato, ante los tribunales o ante la AEPD, por ejemplo. Si el titular acredita la admisión a trámite de una demanda encaminada a declarar la inexactitud de los datos, o si la AEPD comunica que se ha interpuesto una reclamación encaminada a la tutela de los derechos de acceso,

² Esta colaboración se da tanto con las personas físicas como con las personas jurídicas, aunque estas últimas no estén incluidas en el ámbito de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

ALCANCE DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y/O SUPRESIÓN DE DATOS DECLARADOS A LA CIR

Los titulares de operaciones declaradas a la CIR, al ejercer ante el Banco de España sus derechos de rectificación y/o supresión de los datos declarados, frecuentemente consideran que la función de la CIR es valorar si los datos están o no correctamente declarados y, en su caso, rectificarlos o suprimirlos. Sin embargo, esta no es la forma en la que funciona la CIR.

La CIR, cuya administración corresponde al Banco de España según lo establecido en el artículo 59 de la Ley 44/2002, recibe las declaraciones de las entidades obligadas a ello y, con esa información, genera los informes para los distintos usuarios que, conforme a la normativa, tienen acceso a ella.

Los datos incluidos en las declaraciones mensuales son responsabilidad de las entidades y deben ser exactos y estar actualizados, de forma que respondan con veracidad a la situación real de los riesgos y de sus titulares en la fecha de la declaración.

La CIR no puede modificar los datos declarados. Si se detecta algún error, debe ser la entidad que efectuó la declaración la que envíe declaraciones complementarias rectificando o suprimiendo el dato erróneo.

Los titulares de riesgos que consideren que algún dato declarado es incorrecto pueden solicitar su modificación a través de dos vías: bien directamente ante la entidad que ha declarado el dato, o bien acudiendo al Banco de España para que tramite ante la entidad declarante su solicitud de rectificación y/o supresión.

El ejercicio de los derechos de rectificación y/o supresión de datos declarados a la CIR tiene las siguientes características:

- Las entidades declarantes son las responsables del contenido de las declaraciones que remiten a la CIR.
- El ejercicio del derecho de rectificación y/o supresión por el titular no se ejercita ante el Banco de España (que no es responsable de los datos y no los puede modificar), sino ante la entidad declarante.

- La función del Banco de España se limita a tramitar las solicitudes de rectificación y/o supresión de datos ante las entidades declarantes. Por lo tanto, le corresponde trasladar con carácter inmediato la solicitud del titular a la entidad declarante, recibir la contestación de esta y remitir su respuesta (que será exactamente la misma que ha recibido de la entidad) al solicitante.
- El Banco de España solo puede tramitar las solicitudes de titulares cuando el riesgo acumulado de ese titular con la entidad declarante supera el importe de 1.000 euros. En otro caso, el titular debe ejercer su derecho directamente ante la entidad.
- No se trata de un procedimiento administrativo de carácter contradictorio en el que cada parte formula sus alegaciones y el órgano competente emite una resolución. Por el contrario, es el ejercicio por parte de un titular de su derecho a rectificar y/o suprimir unos datos, a su juicio erróneos, ante el responsable de ellos, que es la entidad. No corresponde, por tanto, al Banco de España dictar resolución alguna en relación con la respuesta de la entidad.
- La única diferencia entre ejercer estos derechos directamente ante la entidad o a través del Banco de España es que, en este último caso, según la Circular 1/2013, «en tanto las entidades declarantes dan respuesta a la solicitud de rectificación o cancelación presentada a través del Banco de España [...] el Banco de España suspenderá toda cesión a terceros de los datos sobre los que verse la solicitud, así como de los congruentes con ellos que hayan sido registrados en la CIR con motivo de declaraciones anteriores y posteriores»¹.
- Cuando estos derechos sean ejercitados por una persona física, si no está de acuerdo con el contenido de la respuesta de la entidad, o la entidad no responde en el plazo establecido por la normativa, el interesado no debe reclamar ante el Banco de España, sino ante la Agencia Española de Protección de Datos.

¹ Artículo 66.1 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

rectificación o cancelación, el bloqueo se prolonga mientras se sustancian estos procedimientos. El aumento de las reclamaciones experimentado en los últimos años ha supuesto un incremento en el número de operaciones sujetas a bloqueo cautelar, sobre las que no se puede proporcionar información a las entidades. En estos casos, la CIR aconseja a las entidades que están evaluando la solvencia de un potencial deudor que utilicen fuentes adicionales de información, a fin de valorar adecuadamente el riesgo que se plantean asumir. De hecho, se han detectado comportamientos estratégicos por parte de algunas personas para evitar la puesta a disposición de las entidades de sus informes de riesgo.

La suspensión de la cesión de datos finaliza cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: i) la CIR es informada por la entidad de la modificación o cancelación de los datos, lo que se comunica al titular; ii) el Banco de España tiene constancia de que se ha dictado sentencia en firme o de que la AEPD ha adoptado una resolución. Los datos objeto de rectificación o cancelación, así como los que los sustituyen, son comunicados por el Banco de España a las entidades a las que se hubieran cedido los datos corregidos, y iii) transcurren dos meses desde la comunicación de la entidad ratificando el dato controvertido.

La atención al público quedó interrumpida en los primeros meses del estado de alarma, no solo en el Banco de España, sino, en gran medida, en la Administración del Estado. No obstante, como ya se ha indicado, los procedimientos de acceso y de rectificación/cancelación que se tramitan en la CIR no quedaron suspendidos, dado que se correspondían con ejercicios de derechos fundamentales de los ciudadanos. Tras la reapertura de los servicios, tanto las entidades como el Banco de España tuvieron que adaptarse a una nueva situación de atención presencial reducida, que afectó de manera fundamental a muchos de los procesos de la CIR. Por ello, a lo largo de 2020 y, especialmente, a partir de 2021 se han desplegado medidas tendentes a atenuar el impacto en la CIR del trabajo no presencial, como la generalización del uso del Registro Electrónico del Banco de España en las comunicaciones recibidas de las entidades o la incorporación de la robótica a los procesos documentales, a través del programa de transformación digital incluido en el Plan Estratégico 2020-2024 del Banco de España.

Por primera vez, se ha producido una disminución en el número de reclamaciones recibidas. En efecto, durante 2020 se recibieron 5.348 reclamaciones, frente a las 6.378 de 2019 (-16 %). Sin embargo, esta caída se debió al confinamiento ordenado para frenar la pandemia, pues el mayor descenso —superior al 60 % del total— se produjo en el segundo trimestre del año (véase gráfico 3.3). Excluyendo este paréntesis temporal, las reclamaciones han seguido su progresión al alza y en los primeros meses de 2021 se ha producido una aceleración significativa, al presentar un crecimiento interanual de más del 60 %. Aunque parte de este aumento se explica por un efecto base de la caída del año

Cuadro 3.2

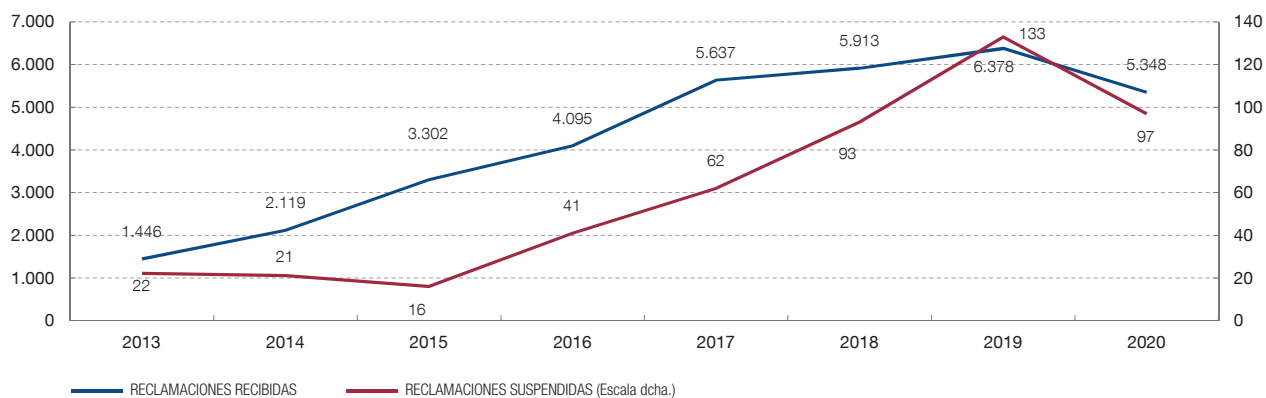
RECLAMACIONES RECIBIDAS. DISTRIBUCIÓN POR CANAL DE PRESENTACIÓN 2020

	Tramitadas	Rechazadas	Total
Internet	2.143	1.180	3.323
Ventanilla (Madrid)	1.096	522	1.617
Correo (sucursales)	293	115	408
TOTAL	3.532	1.816	5.348

FUENTE: Banco de España.

Gráfico 3.2

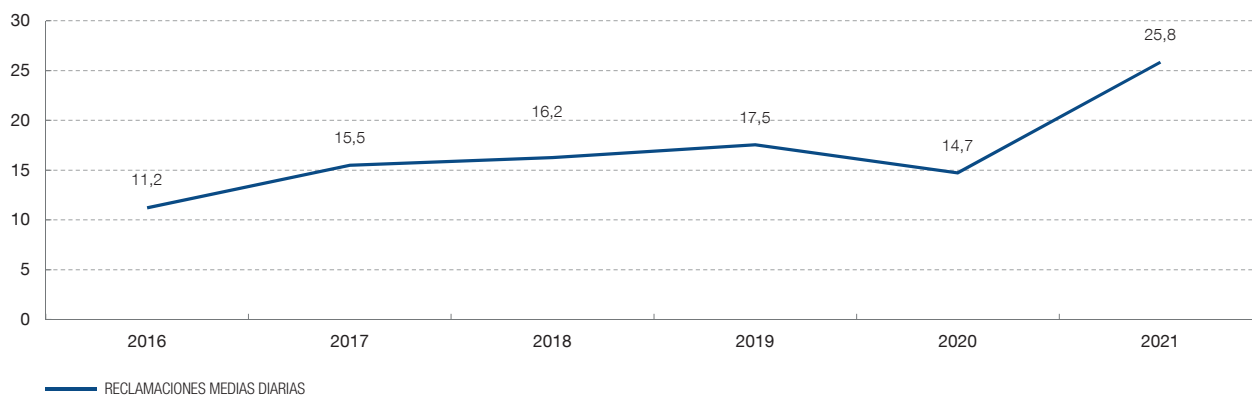
NÚMERO DE RECLAMACIONES



FUENTE: Banco de España.

Gráfico 3.3

RECLAMACIONES RECIBIDAS (MEDIA DIARIA)



FUENTE: Banco de España.

NOTA: Datos recibidos hasta el cierre de esta Memoria.

anterior, el grueso se justifica por la bajada del umbral de retorno desde 9.000 euros a 1.000 euros agregados, que entró en vigor en enero (véase el recuadro 4.1 de esta Memoria).

De las reclamaciones recibidas, más de la mitad se presentaron por Internet, a través de la Oficina Virtual.

Las reclamaciones recibidas en la CIR han de cumplir determinados requisitos para poder ser aceptadas para su tramitación. Si alguna reclamación adolece de defectos subsanables, la CIR así se lo solicita al titular (por ejemplo, reclamaciones sin firma, sin domicilio, sin debida acreditación de la identificación del titular o de la entidad, sin indicación del código de operación). Cuando los titulares no atienden el requerimiento de la CIR, o cuando el defecto en la presentación es insubsanable, la reclamación se archiva. Durante 2020 se archivaron por estos motivos un total de 1.816 reclamaciones. Las causas más frecuentes de rechazo de una reclamación fueron las siguientes:

- Reclamación contra entidades no declarantes a la CIR (compañías de telefonía, suministradoras, prestamistas privados no registrados en el Banco de España, etc.).
- Reclamación ante la CIR por operaciones que no se reflejan en el informe de riesgos, por ser su importe menor de 9.000 euros o de 1.000 euros, según el proceso sobre el que se reclama. En estos casos, el titular debe reclamar directamente ante la entidad.
- Reclamación por haber liquidado la operación durante el mes en curso, siendo así que los datos que se ceden y contra los que se puede reclamar son los de meses ya cerrados.
- Reclamaciones en las que el titular insiste en que no tiene relación con la entidad o en las que reitera su discrepancia con alguno de los datos consignados en el informe, cuando la entidad ratificó en una reclamación anterior, razonablemente, los datos declarados, justificando además documentalmente su declaración (por ejemplo, remitiendo el contrato firmado, el cuadro de amortización del préstamo o la sentencia en la que justifica su declaración).

En estos casos, la CIR indica al titular que es preciso que justifique que la situación ha cambiado respecto a la anterior reclamación, y que, en su caso, su discrepancia con la entidad sobre el fondo del asunto debe ser planteada ante los tribunales de justicia o ante la AEPD. Si se justifica la existencia de un procedimiento judicial encaminado a declarar la inexactitud del dato, o la interposición de un procedimiento ante la AEPD, procedería la suspensión de la cesión del dato, mientras este se sustancia.

Cuadro 3.3

RECLAMACIONES TRAMITADAS. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENTIDAD Y RECLAMANTES 2020

	Personas jurídicas	Personas físicas	Total
Entidades de crédito	632	2.528	3.160
Establecimientos financieros de crédito	24	264	288
Prestamista inmobiliario	0	1	1
Resto	26	57	83
TOTAL	682	2.850	3.532

FUENTE: Banco de España.

Tras este filtro, la CIR tramitó 3.532 reclamaciones, de las que 2.850 fueron interpuestas por personas físicas, frente a las 682 presentadas por personas jurídicas (véase cuadro 3.3). La mayoría de las reclamaciones se dirigieron contra la información declarada por entidades de crédito (bancos, cajas de ahorros y cooperativas). Una de ellas se presentó contra los datos reportados por una de las nuevas entidades declarantes a la CIR, un prestamista hipotecario.

En ocasiones, las reclamaciones tienen su origen en discrepancias mercantiles entre las entidades y sus clientes. Al igual que en 2020, el aumento de la litigiosidad sobre determinadas cláusulas tipo en los contratos suscritos por los consumidores ha dado lugar a que, en bastantes ocasiones, los acreditados reclamen ante la CIR por la abusividad de sus cláusulas. Estas personas alegan que las liquidaciones practicadas por la entidad declarante son erróneas y que, por tanto, los importes contenidos en su informe de riesgos son inexactos. No es función de la CIR la reliquidación del contrato a través de la documentación aportada por el titular al expediente. Dicha función correspondería, a la falta de acuerdo entre las partes, a los tribunales de justicia, a quienes, con carácter general, compete la resolución de las discrepancias mercantiles. En alguna de estas reclamaciones, se acreditó ante la CIR la existencia de un procedimiento judicial. En tales casos, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 44/2002, reguladora de la CIR, se determinó la suspensión de la cesión de los datos controvertidos hasta que existiera pronunciamiento judicial al respecto.

Pero el motivo más recurrente de reclamación volvió a ser la disconformidad del titular con el importe declarado (751 reclamaciones). En este grupo de reclamaciones, las entidades ratificaron su declaración, por considerarla correcta, en un 93 % de los casos. Igualmente, son muy numerosas las reclamaciones en las que el titular manifiesta que no le une con la entidad declarante relación alguna (565), que la deuda ya está pagada (587) o que no existe morosidad (228). En todos estos casos, las entidades mayoritariamente ratifican de forma razonada los datos declarados, aportando documentación para apoyar su declaración.

Cuadro 3.4

RECLAMACIONES ACEPTADAS. DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN

	Número de reclamaciones					% sobre el total de las reclamaciones				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Convenio de acreedores	116	97	101	98	149	3,6	2,5	2,5	2,1	4,2
Deuda pagada	275	270	303	423	587	8,5	6,9	7,6	9,0	16,6
Deuda prescrita	146	180	144	140	174	4,5	4,6	3,6	3,0	4,9
Importe incorrecto	388	951	1.142	1.372	751	12,0	24,2	28,7	29,1	21,3
Juzgados/subastas	357	429	578	837	619	11,1	10,9	14,5	17,8	17,5
Morosidad	192	173	137	196	228	5,9	4,4	3,4	4,2	6,5
Robo o falsificación de firma	12	3	30	28	48	0,4	0,1	0,8	0,6	1,4
Separación/divorcio y deuda asignada al cónyuge	27	21	22	24	26	0,8	0,5	0,6	0,5	0,7
Sin relación con la entidad	552	625	598	758	565	17,1	15,9	15,0	16,1	16,0
Titulización	44	45	17	17	11	1,4	1,1	0,4	0,4	0,3
Otros	1.119	1.130	904	820	374	34,7	28,8	22,7	17,4	10,6
Total	3.228	3.924	3.976	4.713	3.532	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 3.5

RECLAMACIONES RESUELTAS. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ENTIDAD Y RESOLUCIÓN

	Ratificadas	Rectificadas	Suspendidas	Total
Entidades de crédito	1.727	700	88	2.515
Establecimientos financieros de crédito	201	45	7	253
Resto	36	20	2	58
Total general	1.964	765	97	2.826

FUENTE: Banco de España.

A pesar del gran esfuerzo realizado por la CIR durante este año complicado, el número de reclamaciones resueltas en 2020 ha disminuido un 31 % respecto al ejercicio anterior. Tres motivos han dificultado el proceso de resolución de las reclamaciones durante la pandemia: la prioridad otorgada a la atención a las demandas derivadas de la implementación de las medidas económicas para paliar los resultados de la crisis sanitaria (avales gestionados por el ICO), el proceso de adaptación al trabajo telemático, tanto de los sistemas como de los procedimientos, y la ralentización durante meses de las comunicaciones mantenidas con las entidades y con los titulares, al realizarse muchas de ellas mediante correo postal.

Respecto a las reclamaciones resueltas, las entidades se ratificaron en la declaración en un 69 % de los casos, corrigieron los datos un 27 % de las veces

Cuadro 3.6

RECLAMACIONES RESUELTAS. DISTRIBUCIÓN POR MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN Y RESOLUCIÓN

	Ratificadas	% ratificadas	Rectificadas	% rectificadas	Suspendidas	% suspendidas	Total	% sobre el total
Convenio de acreedores	28	25,7	81	74,3	0	0,0	109	3,9
Deuda pagada	232	69,3	103	30,7	0	0,0	335	11,9
Deuda prescrita	81	66,4	41	33,6	0	0,0	122	4,3
Importe incorrecto	603	93,3	27	4,2	16	2,5	646	22,9
Juzgados/subastas	273	45,1	260	43,0	72	11,9	605	21,4
Morosidad	141	76,6	43	23,4	0	0,0	184	6,5
Robo o falsificación de firma	17	54,8	14	45,2	0	0,0	31	1,1
Separación/divorcio	11	84,6	2	15,4	0	0,0	13	0,5
Sin relación con la entidad	311	69,9	132	29,7	2	0,4	445	15,7
Titulización	6	54,5	5	45,5	0	0,0	11	0,4
Otros	261	80,3	57	17,5	7	2,2	325	11,5
Total	1.964	69,5	765	27,1	97	3,4	2.826	100,0

FUENTE: Banco de España.

Cuadro 3.7

RECLAMACIONES RESUELTAS. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y TIPO DE RESOLUCIÓN

	2016	2017	2018	2019	2020	% sobre el año anterior					% sobre el total de las reclamaciones				
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Rectificadas	876	871	915	980	765	51,8	-0,6	5,1	7,1	-21,9	27,2	23,3	23,3	23,8	27,1
Ratificadas	2.301	2.813	2.921	3.006	1.964	29,0	22,3	3,8	2,9	-34,7	71,5	75,1	74,3	73,0	69,5
Suspendidas	41	62	93	133	97	156,3	51,2	50,0	43,0	-27,1	1,3	1,7	2,4	3,2	3,4
Total	3.218	3.746	3.929	4.119	2.826	35,4	16,4	4,9	4,8	-31,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTE: Banco de España.

y en cerca de un 3 % de los casos se suspendió la cesión de los datos a terceros, por estar las reclamaciones incursas en un proceso judicial pendiente de resolución.

Las reclamaciones por disconformidad del titular con los importes declarados son el grupo en el que se produce un mayor número de ratificaciones por parte de la entidad. En cambio, el grupo en el que se produce un mayor porcentaje de rectificaciones (81 %) es el correspondiente a la existencia de un convenio de acreedores. En algunos casos, el interesado alegó la existencia de un convenio de acreedores o de un beneficio de exoneración de pasivo insatisfecho. Las entidades, al rectificar, argumentaron retrasos en la comunicación interna, puesto que el área de la entidad encargada de la declaración a la CIR no había sido informada con la suficiente diligencia de los términos del convenio, ya que el

tratamiento de estos supuestos en las entidades suele recaer en áreas funcionales diferentes.

La actividad de la CIR también se ha incrementado como consecuencia de una resolución de la Comisión Ejecutiva del Banco de España (BOE de 27 de diciembre de 2019) que modificó alguna atribución de funciones en la institución. A partir de enero de 2020, la tramitación de las denuncias formuladas por un ciudadano por presuntos incumplimientos de la normativa de disciplina, dentro del ámbito de actuación de la CIR, corresponde a la CIR. En cuanto a la resolución, ahora corresponde al director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución en el caso de denuncias manifiestamente infundadas, y a la Comisión Ejecutiva, a propuesta del director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, en el resto de los casos. Actualmente, en la CIR hay registradas y pendientes de tramitar 30 denuncias.

5 Usos por el Banco de España

El Banco de España utiliza la información de la CIR para el ejercicio de sus competencias de supervisión prudencial de las entidades y el correcto desarrollo de las restantes funciones que tiene legalmente atribuidas, algunas de las cuales se describen a continuación.

- **Supervisión microprudencial.** El área supervisora ha sido históricamente el primer usuario interno de la información de la CIR. Esta base de datos facilita un seguimiento detallado de las operaciones de riesgo de las entidades supervisadas, tanto en la preparación de las visitas supervisoras como en las labores de seguimiento a distancia. La base de datos de la CIR permite analizar el riesgo de crédito tanto por titular (identificando aquellos que puedan tener una mayor ratio de apalancamiento o de concentración del riesgo) como por entidad, posibilitando la evaluación de la política de gestión del riesgo, contrastar la información relativa a los riesgos y a los recursos propios según el reglamento (UE) n.º 575/2013. El recuadro 3.2 de la *Memoria de la CIR 2019* presentó una descripción del uso de los datos de la CIR en la supervisión del Banco de España.
- **Supervisión macroprudencial.** La información de la CIR facilita el seguimiento de variables como el crecimiento del crédito y la concentración sectorial, geográfica, por actividad económica, etc., del crédito, indicadores de esfuerzo del prestatario o dependencia del crédito bancario frente a otras fuentes de financiación. Además, es un *input* básico de las pruebas de resistencia que anualmente realiza el Banco de España con las herramientas internas desarrolladas en los últimos años para elaborar un análisis prospectivo sobre la capacidad de resistencia de las entidades de

crédito españolas ante eventos adversos. En particular, permite estimar probabilidades de impago, tasas de cura y *credit conversion factors*. El recuadro 3.1 de la *Memoria de la CIR 2016* ofreció una descripción detallada del uso de los datos de la CIR en el desarrollo de las pruebas de resistencia.

- **Análisis del impacto de políticas regulatorias prudenciales y diversos ejercicios de calibración.** Como ejemplo, puede citarse la utilización de los datos de la CIR como *input* para el diseño de soluciones alternativas en el cálculo de las provisiones para los riesgos normales, en vigilancia especial o dudosos.
- **Análisis económico-financiero.** La información de la CIR permite el análisis, entre otros, de la canalización del crédito, el mecanismo de transmisión de la política monetaria, el desarrollo de indicadores de presión financiera, el acceso al crédito (en particular, de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas, sobre los que la necesidad informativa no está cubierta por otras fuentes), los canales de transmisión de la política macroprudencial, el comportamiento de las entidades ante estas medidas y ante perturbaciones de todo tipo, etc. En este sentido, merece la pena destacar el uso intensivo que se ha hecho de la CIR durante esta crisis para asesorar el diseño, la calibración y, el análisis del impacto y de la efectividad de muchas de las medidas que se han desplegado durante esta crisis para mitigar los efectos económicos de la pandemia.
- **Elaboración de estadísticas.** La información declarada a la CIR sobre los riesgos contraídos por las AAPP permite completar y contrastar los datos utilizados en la elaboración de las estadísticas de deuda pública. Asimismo, permite evaluar la deuda de las familias en la Encuesta Financiera de las Familias, donde también se está empezando a utilizar para contrastar la representatividad estadística de la muestra. El recuadro 3.2 de la *Memoria de la CIR 2018* detalló el uso de los datos de la CIR en la elaboración de la deuda de las AAPP según la metodología del protocolo de déficit excesivo (PDE).
- **Uso por la Central de Balances** en el contraste de la información sobre endeudamiento recibida de las empresas colaboradoras con la declarada por las entidades de crédito a la CIR. Asimismo, utiliza el volumen de préstamos como indicador en la identificación de posibles futuras empresas colaboradoras. El recuadro 3.3 presenta una descripción del uso de la CIR para estos fines.
- **Evaluación de la solvencia de los emisores de los activos de garantía de las operaciones de crédito del Eurosistema.** El sistema interno de

EL USO DE LOS DATOS DE LA CIR EN LOS TRABAJOS ESTADÍSTICOS QUE DESARROLLA LA CENTRAL DE BALANCES DEL BANCO DE ESPAÑA

La Central de Balances del Banco de España recibe anualmente cuentas anuales de más de un millón de sociedades no financieras españolas, proporcionadas por dos fuentes de información:

- La que incluye un mayor número de empresas, derivada del acuerdo de colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME) para procesar los depósitos de cuentas de carácter obligatorio.
- La derivada de la colaboración voluntaria de varios miles de empresas, que proporcionan una información mucho más detallada y profunda de sus cuentas.

Con esta información, la Central de Balances elabora diversos productos estadísticos, para las empresas no financieras tanto colaboradoras (el denominado «[Estudio individual](#)») como no colaboradoras («[Compara tu empresa](#)»), el público en general («[monografía anual de la Central de Balances](#)» y los analistas de empresa y centros de estudio («[Agregados sectoriales](#)»). Además, la Central de Balances es necesaria para la elaboración de las Cuentas Financieras de la Economía Española y sirve también de contraste al INE en la elaboración de las Cuentas Nacionales.

La comunidad investigadora también puede acceder a información agregada y a microdatos por medio del laboratorio del Banco de España (BELab). En la página del BELab en la web del Banco de España puede consultarse toda la información disponible.

Para mejorar la calidad de la información, se somete a contrastes con fuentes alternativas, entre las que se encuentra la información disponible en la CIR del Banco de España. En concreto, son varios los trabajos de base que se realizan utilizando los datos de la CIR:

- a) Mejora de los datos del directorio de empresas de la Central de Balances

Trimestralmente se contrasta, con los datos recibidos en la CIR, la aparición de nuevas empresas de gran tamaño (por creación o reactivación, centrando el análisis en los estratos de mayor volumen de deuda) a las que solicitar su colaboración voluntaria. Esto permite dotar de mayor robustez a los trabajos de cálculo y elevación estadística al total nacional que realiza la Central de Balances. Asimismo permite identificar sociedades *holding* de reciente creación. Uno de los retos del directorio

de empresas es localizar la existencia de *holdings*, para los que no existe un registro administrativo en el que declarar su constitución de forma obligatoria. Con este último objetivo, también se contrastan los datos de los acreditados cuya actividad productiva declarada es *holding* (CNAE 642), y que se utilizan conjuntamente con otras variables obtenidas de fuentes adicionales que permiten su sectorización institucional.

- b) Elemento de contraste en la fase de tratamiento y depuración de la información contable de las empresas, para validar diferentes partidas contables y no contables:

- Información relativa a la clasificación por sector institucional de contrapartida del instrumento financiero «préstamos», en combinación con datos procedentes de las memorias de las empresas y con los datos utilizados por el Banco de España en la elaboración de las estadísticas exteriores. El análisis combinado de estas fuentes permite asegurar la robustez de los datos finales.

- Contraste, empresa a empresa, de las desviaciones significativas entre los saldos de balance relativos a deudas financieras bancarias y el volumen de crédito recogido en la CIR. Como resultado de este contraste, se confecciona un indicador de calidad que sirve para filtrar las empresas que pueden utilizarse en los estudios que publica el Banco de España a partir de los datos de la Central de Balances.

- c) Elemento de análisis para el estudio de la rúbrica de préstamos de los balances empresariales

La información de los riesgos directos facilitada por la CIR sirve de referencia para el estudio de la rúbrica de préstamos de entidades de crédito, en el sector de sociedades no financieras. También se utiliza para comparar los datos de las Cuentas Financieras de la Economía Española con las estimaciones que se realizan en la elevación estadística para este sector institucional (sociedades no financieras), que elabora la Central de Balances. La comparación de los saldos de riesgo directo de la CIR con los saldos de préstamos concedidos por entidades de crédito y reflejados por las empresas en sus cuestionarios remitidos a la Central de Balances permite analizar diferentes casuísticas, dando lugar a nuevos procesos de trabajo.

EL USO DE LOS DATOS DE LA CIR EN LOS TRABAJOS ESTADÍSTICOS QUE DESARROLLA LA CENTRAL DE BALANCES DEL BANCO DE ESPAÑA (cont.)

Alguna de las conclusiones obtenidas en este estudio son la detección de empresas no operativas desde un punto de vista económico y/o registral, pero que

aún mantienen préstamos declarados a la CIR, y la detección de incoherencias en la sectorización institucional de empresas no financieras.

evaluación del crédito del Banco de España (ICAS BdE) utiliza la información de la CIR para calificar la probabilidad de incumplimiento de las sociedades no financieras evaluadas. Aquellas en situación de incumplimiento o muy próximas a este son consideradas como no elegibles a efectos de poder utilizar sus préstamos bancarios como colaterales admisibles en las operaciones de política monetaria del Eurosistema. El recuadro 3.1 de la *Memoria de la CIR 2017* describió en detalle el uso de los datos de la CIR en el desarrollo del sistema interno de evaluación crediticia del Banco de España.

6 Otros usuarios institucionales

La información de la CIR tiene carácter reservado y no puede ser divulgada a ninguna persona o autoridad, salvo en alguno de los supuestos contemplados en la Ley 10/2014. Dicha ley, en su artículo 82, detalla los supuestos de excepción del deber de secreto: publicación de datos agregados para fines estadísticos, peticiones de autoridades judiciales en procesos penales o en procesos mercantiles derivados de situaciones concursales de una entidad de crédito, informaciones que el Banco de España tenga que facilitar en el cumplimiento de sus funciones a otros organismos o autoridades residentes o no residentes (como la CNMV, el Sepblac, etc.) Las autoridades o los organismos que reciban información del Banco de España estarán obligadas a adoptar las medidas oportunas que garanticen la reserva de los datos.

La Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, establece que los datos de riesgos cuyos titulares sean AAPP españolas serán públicos y comunicados por el Banco de España al MINH y, en su caso, a la comunidad autónoma de la que dependan. Asimismo, dispone que el Banco de España suministrará al MINH la información relacionada con las operaciones de crédito de las Entidades Locales y las Comunidades Autónomas. Por otra parte, el Real Decreto 1463/2007 determina que el Banco de España facilitará a la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales los datos relativos al endeudamiento de las entidades locales y de sus entes dependientes. Actualmente, y en cumplimiento

del Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, se facilitan mensualmente al MINH los riesgos declarados sobre todos los titulares que componen la Administración Pública según los criterios de declaración de la Circular de Banco de España 1/2013. Asimismo, pueden solicitar información de la CIR, con sujeción a las leyes que regulan la confidencialidad de los datos obrantes en ella, los juzgados de lo penal y otras autoridades en el ámbito estricto de sus respectivas competencias³.

Finalmente, el ICO tiene acceso a los datos de la CIR desde finales de 2020 para comprobar la situación de las operaciones avaladas por el Estado, con carácter previo al pago de las cantidades impagadas por los prestatarios a las entidades.

3 Véase artículo 63 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre de 2002, que remite al artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas. A la fecha de cierre de esta edición, hay que entender esta referencia hecha al artículo 82 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.



4

OTROS TEMAS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA CIR

AnaCredit Y MEDIDAS COVID

La información de la CIR enviada a AnaCredit ha servido para evaluar a nivel europeo la eficacia de las medidas adoptadas para paliar las consecuencias de la pandemia

CARTERAS DE VALORES

En la CIR también se recopila información granular —valor a valor— de las carteras de valores de las entidades de crédito

INCORPORACIÓN AL BELab

Se inicia la primera fase de la puesta a disposición de los investigadores de los datos de la CIR, manteniendo la confidencialidad de los datos

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MEDIDAS

La información de la CIR también se utiliza para ayudar en el diseño y evaluación de diversas políticas públicas (impacto del COVID-19 en el sector empresarial, efectividad de las medidas preconcursales...)

MÁS OPERACIONES QUE DECLARAR

En 2022 se rebajará el umbral de declaración de algunos tipos de operaciones

LA CIR Y EL PLAN ESTRATÉGICO DEL BANCO DE ESPAÑA

Modernización de la infraestructura tecnológica para mejorar la gestión y la explotación analítica de los datos y facilitar su accesibilidad, tanto interna como externa

1 Introducción

En este capítulo se repasan otros temas con especial relevancia para la CIR en 2020. Se organiza en tres epígrafes adicionales a esta introducción. En el primero se resumen los últimos desarrollos del proyecto AnaCredit¹, la base de datos del Eurosistema sobre datos granulares de crédito y de riesgo de crédito, tanto en relación con los datos de identificación de los titulares de los préstamos como en su vertiente de operaciones de riesgo. En el segundo epígrafe se describe la información granular que se recibe en la CIR sobre las carteras de valores, de acuerdo con la normativa vigente. En el último epígrafe se hace una descripción de los distintos cambios que se están produciendo en la CIR, y se incluye un recuadro que detalla los cambios derivados de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolving, parte de los cuales han entrado en vigor en enero de 2021.

2 Evolución de los proyectos AnaCredit y RIAD durante 2020

En 2020 se aprobó la puesta a disposición de la información de AnaCredit a los usuarios internos del SEBC y del MUS. Los procesos iniciales de declaración a AnaCredit (los primeros datos corresponden a septiembre de 2018 y fueron transmitidos al BCE por una mayoría de BCN a partir de noviembre de ese año) sirvieron para ajustar los sistemas tanto de las entidades declarantes como de los BCN y del BCE. Asimismo, se identificaron los principales problemas de calidad de la información, que, en gran medida, las entidades declarantes fueron corrigiendo durante 2019 y 2020, lo que ha permitido alcanzar una calidad razonable de la información. Sobre esta premisa, durante el último año el Comité de Estadística del BCE estudió y valoró positivamente las solicitudes formuladas por distintos comités del SEBC y del MUS para acceder a la información granular de AnaCredit. A finales de 2020, el Comité Ejecutivo del BCE, por delegación del Consejo de Gobierno, acordó aprobar dichas solicitudes.

La información de AnaCredit tiene carácter confidencial, por lo que está sujeta al procedimiento establecido por el SEBC para estos casos. Las autorizaciones se basan en la «necesidad de saber» del usuario, es decir, se concede acceso únicamente si las tareas que se han de desempeñar así lo requieren. Es importante señalar que el mencionado procedimiento establece que la información se ha de utilizar exclusivamente para la realización de las tareas para las que se concede la autorización.

¹ Para una explicación detallada del proyecto, véase el epígrafe 3.2 de la *Memoria de la CIR 2017*.

Para atender con diligencia las necesidades urgentes de información derivadas de la crisis del COVID-19, en abril de 2020 se dio acceso a la información de AnaCredit a un reducido número de usuarios del Eurosistema. Esto permitió analizar el impacto de la crisis del COVID-19 y evaluar el alcance de las medidas adoptadas para paliarlo. Previamente, se había establecido un grupo específico de composición reducida, formado por miembros de distintos comités del Eurosistema (denominado *AnaCredit network of users*). La labor de este grupo de usuarios fue, desde un punto de vista puramente operativo, ayudar en la puesta a punto y en la evaluación de la información y de los sistemas para el uso analítico de los datos de AnaCredit.

Durante 2020 han continuado las labores para identificar y analizar los problemas de calidad que presenta la información de AnaCredit, para que las entidades procedan a su corrección. Estos trabajos cubren tanto información de las operaciones y garantías recogidas en AnaCredit como, de forma muy relevante, la de las distintas contrapartes que intervienen en ellas y que se recoge en RIAD, base de datos centralizada de información de contrapartes del SEBC. La experiencia acumulada durante estos primeros años ha permitido incorporar controles de calidad adicionales para detectar problemas en los datos. En la web del BCE se ha publicado la actualización de las validaciones aplicadas para la admisión de los datos en el denominado «reporte secundario» (de los BCN al BCE). Este proceso se ha beneficiado de las contribuciones de los primeros usuarios de la información. Dada la gran complejidad y el volumen de la base de datos, el sistema de control de calidad sin duda seguirá desarrollándose y completándose en los próximos años.

En el último año se publicaron en la página web del BCE dedicada al proyecto AnaCredit² varias actualizaciones de las listas de identificadores nacionales, formas legales y organismos internacionales. En estas listas se recogen todos los tipos de identificadores nacionales y las formas legales existentes en todos los países que podrán ser usados por las entidades en la información que han de declarar sobre las contrapartes según su país de residencia. Su publicación facilita la homogenización de la información reportada por las entidades, que, desde el origen, se envía estandarizada.

En los últimos meses se ha analizado el grado de integración de la información de AnaCredit con la de las estadísticas de tenencias de valores y de la base de datos centralizada de valores (SHSG y CSDB, por sus siglas en inglés, respectivamente). En el ámbito de distintos grupos de trabajo del Comité de Estadística, el estudio ha cubierto cuatro áreas principales: la consistencia de los prestamistas registrados en AnaCredit con los tenedores de valores de SHSG, y viceversa, y la de los deudores de AnaCredit con los emisores de valores registrados en la CSDB. La correcta vinculación desde estas dos perspectivas permitirá conocer de forma global y con gran granularidad los flujos de financiación, instrumentados como préstamos o con emisión de valores de deuda, de la economía europea. Cabe destacar que la disposición de una base de datos

2 La página web del BCE dedicada al [proyecto AnaCredit](#) contiene la documentación relevante aquí mencionada.

centralizada de información de contrapartes —RIAD— facilita y asegura la corrección de la vinculación de las tres fuentes intervinientes. Los resultados obtenidos en este primer análisis han sido muy positivos, por lo que está previsto que los grupos de trabajo continúen para asegurar que los buenos resultados se mantengan en el tiempo y depurar las incoherencias que persisten entre conjuntos de datos de distinta naturaleza y origen.

Teniendo en cuenta las novedades introducidas por el creciente peso de la información granular, durante los últimos meses se ha iniciado, en el marco del Comité de Estadística, una reflexión sobre el régimen de vigilancia del cumplimiento por los agentes informadores de las normas mínimas que deben aplicar para cumplir sus obligaciones de información establecidas en el Reglamento (CE) n.º 2533/98 del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el BCE. Es necesario integrar en este esquema general las particularidades de la declaración de información granular para incorporar los requisitos exigidos en el reporte de la información de AnaCredit.

En febrero de 2020, el BCE adoptó la orientación³ en la que se establecen los procedimientos para el envío de la información de retorno a las entidades declarantes a AnaCredit. El Reglamento de AnaCredit prevé el uso de la información para incorporarla a la que algunos BCN retornan a las entidades declarantes para una mejor evaluación de los riesgos de sus clientes. Anteriormente, y hasta su interrupción en 2018, este intercambio estaba formalizado en un memorando de entendimiento (MdE) firmado por nueve BCN⁴ para intercambiar información crediticia y de riesgo recogida en sus respectivas centrales de riesgos nacionales.

3 Información granular sobre las carteras de valores

El Banco de España también recopila información granular sobre las carteras de valores de las instituciones financieras monetarias que supervisa. La Circular del Banco de España 2/2001, sobre declaración de operaciones y saldos de activos y pasivos exteriores en valores negociables, supuso un primer paso para la recogida de información granular relativa a las carteras de valores emitidos por no residentes en poder de las instituciones financieras monetarias supervisadas por el Banco de España. Pero la crisis financiera de 2008 puso de manifiesto la necesidad en el SEBC de contar con información granular sobre todas las carteras de valores, valor a valor. Esta información estadística es de gran utilidad para diversos fines, como el análisis

3 Orientación (UE) 381/2020 del Banco Central Europeo, de 21 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orientación (UE) 2335/2017, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio.

4 El MdE fue firmado en 2003 e inicialmente participaban las centrales de riesgos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. En 2010, el MdE fue actualizado con la incorporación al acuerdo de la República Checa y de Rumanía, que comenzaron a intercambiar información en marzo de 2012.

monetario y financiero, la aportación a la estabilidad del sistema financiero o a la supervisión prudencial de las entidades de crédito. De esta forma, la información sobre estas carteras es recopilada tanto a nivel de entidad individual como consolidada, de acuerdo con la *Circular del Banco de España 4/2017, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros*, que recoge los requerimientos establecidos en el Reglamento UE 1011/2012 (BCE/2016/22), relativo a las estadísticas sobre carteras de valores. La información de entidades individuales se recibe mensualmente en el estado FI 103, Detalle de valores, y la referida a los grupos consolidados, trimestralmente, en el estado FC 202, Detalle de valores del grupo.

Esta información valor a valor sobre las carteras de valores es recopilada por la CIR, que es la encargada de gestionar la información financiera granular remitida por las entidades al Banco de España. El marco de control de calidad de la CIR⁵ es de aplicación también a estos datos e incluye validaciones automáticas en la recepción de la información, validaciones de coherencia y de plausibilidad y conciliación⁶ con los datos agregados reportados por las entidades.

La información valor a valor de las carteras de valores es de gran interés para distintos usuarios del Banco de España, que la utilizan con distintos propósitos, entre los que cabe destacar:

- La elaboración diversas estadísticas; en especial, la Balanza de Pagos, la Posición de Inversión Internacional y las Cuentas Financieras de la Economía Española.
- La evaluación de activos en garantía utilizados en las operaciones de política monetaria, para la que el estado FI 103 es una fuente de información complementaria.
- La supervisión de las entidades de crédito.
- El análisis de las implicaciones para la estabilidad financiera de distintas perturbaciones que afectan a la calidad crediticia de los emisores de la deuda.
- El análisis de las interconexiones directas e indirectas de las entidades, incluyendo la concordancia de balances.

Adicionalmente, esta información es enviada al BCE, que la utiliza para elaborar las estadísticas de carteras de valores (SHSS), que proporcionan información sobre

5 Para una descripción detallada de los controles de calidad en la información recibida en la CIR, véase el recuadro 1.1 de la *Memoria de la CIR 2018*.

6 El recuadro 1.1 «Conciliación de la información granular y la información agregada» de la *Memoria de la CIR 2019* describe en detalle este proceso de comparación de la información enviada por las entidades atendiendo a distintos requerimientos.

los valores mantenidos por determinadas categorías de inversores de la zona del euro, desglosada por tipo de instrumento, país emisor y otras clasificaciones, y las estadísticas de carteras de valores por grupos bancarios informadores (SHSG).

4 Próximos desarrollos en la CIR

El Banco de España está modernizando la infraestructura tecnológica que da soporte a la CIR para mejorar la accesibilidad interna a la información y también para facilitar su difusión y su uso por investigadores externos. Las nuevas tecnologías en el tratamiento y análisis de los datos han abierto nuevas posibilidades para la explotación de la CIR y han despertado el interés en ámbitos más allá de los tradicionales ya descritos en el capítulo 3 de esta Memoria. Este es el caso de la comunidad de investigadores o de las autoridades responsables de la regulación para el diseño y el seguimiento de medidas de carácter económico. En este contexto, el Banco de España ha puesto en marcha diversas iniciativas encaminadas a la mejora en explotación interna dentro del Banco de España de los datos de la CIR y, en colaboración con otros organismos, a la difusión y mejora en la disponibilidad de los datos de la CIR para usuarios externos, garantizando en todo momento las medidas de confidencialidad y protección de los datos a las que le obliga la normativa actualmente en vigor.

En cuanto al ámbito interno, el Banco de España está desarrollando una iniciativa de gran calado, que se enmarca en el contexto del Plan Estratégico 2020-2024 del Banco, para la mejora de la gestión y la explotación analítica de los datos de la CIR. Esta iniciativa consiste en la implantación de una plataforma tecnológica moderna, que permita que la recogida, el tratamiento y el análisis de la información se produzcan de forma integrada y flexible, mediante el uso de tecnologías *big data*. El uso de estas nuevas tecnologías permitirá mejorar la disponibilidad de los microdatos de la CIR, incorporando mayores capacidades de análisis y seguimiento, tanto individualizado como a nivel agregado, de las condiciones de concesión y del perfil de riesgo de las operaciones de crédito.

Por lo que respecta al uso y difusión de la información dirigida a usuarios externos, se están desarrollando iniciativas en tres ámbitos diferentes:

- **De cara a proporcionar una mayor utilidad de los datos de la CIR para las entidades declarantes, la OM de crédito revolvente abre las puertas a ampliar en gran medida la información disponible.** En este sentido, la OM incrementa el número de operaciones que las entidades deben declarar a la CIR mediante la reducción del umbral actualmente existente para la exención de declaración de determinadas operaciones. Esta bajada del umbral para las operaciones exentas hará que aumente de manera sustancial el número de operaciones que se declaran a la CIR,

debido a la incorporación de numerosas de operaciones de reducido importe destinadas al consumo, generalmente instrumentadas en pequeños préstamos a plazo y tarjetas de crédito, que actualmente están exentas de declaración. La OM también plantea el aumento de la frecuencia de la remisión de la información, que actualmente es mensual. Aunque este aumento de frecuencia puede ser percibido como una ventaja para las entidades, debe ser evaluado cuidadosamente, por las posibles repercusiones que podría tener en los sistemas de envío y control de las entidades y del Banco de España, y en la calidad final de los datos. Por eso, la OM establece que el Banco de España elaborará un informe que permitirá al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital evaluar la conveniencia de promover reformas normativas en este sentido.

- **La riqueza y la amplitud de los microdatos de la CIR han llevado a que en los últimos tiempos se haya incrementado de manera significativa el interés sobre esta base de datos por parte de la comunidad investigadora.** Esta demanda de información ha quedado recogida en el Plan Estratégico 2020-2024 del Banco de España mediante una iniciativa encaminada al acceso de terceros a bases de datos estadísticas y a ciertas herramientas analíticas del Banco de España. En este sentido, se prevé la próxima incorporación de los microdatos de la CIR al Laboratorio de datos del Banco de España (BELab). El BELab, cuyos primeros pasos se dieron en 2019, pone a disposición de la comunidad investigadora microdatos de alta calidad que el Banco de España recopila en el ejercicio de sus funciones, en un entorno controlado que garantiza la confidencialidad de la información. Entre las colecciones de microdatos que se encuentran actualmente disponibles en el BELab, están las de la Central de Balances, la de emisiones de renta fija realizadas en España y la Encuesta Financiera de las Familias. La incorporación de los datos de la CIR al laboratorio de datos se producirá de manera gradual, debido al alto nivel de protección de los datos y la complejidad de la información. Está previsto que para finales de 2021 se encuentre ya disponible en el BELab un primer subconjunto de la información de la CIR. Esta estará referida al endeudamiento de las personas jurídicas. Se incorporarán las operaciones de manera granular, aunque únicamente se incluirá un conjunto limitado de variables o atributos de ellas, seleccionado por su relevancia analítica. Los datos, tanto de los deudores como los de las entidades declarantes, estarán anonimizados, de manera que en ningún caso puedan ser identificados. En el ámbito del uso de los microdatos con fines de investigación, también destaca la iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España para comenzar a trabajar conjuntamente en el diseño de un sistema colaborativo de datos al que los investigadores tendrán acceso, siempre que la información vaya a ser utilizada con fines

IMPACTO DE LA OM DE CRÉDITO REVOLVENTE EN LA CIR

La Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolving (en adelante, OM), se publicó en el *BOE* el 28 de julio de 2020 y modificó la Orden ECO/697/2004, sobre la Central de Información de Riesgos. Esta orden introduce cambios que afectan a distintos aspectos del funcionamiento de la CIR y, a la vez, conllevan un proceso de revisión y adaptación de su normativa reglamentaria. Su objetivo final es proporcionar a las entidades usuarias de este servicio una información más completa y oportuna, que permita realizar un análisis, cada vez más preciso, de la solvencia de sus clientes, tanto actuales como potenciales. Esto, sin duda, favorecerá la aplicación del principio de préstamo responsable entre las entidades prestamistas.

La implementación de los cambios que implica la OM se realiza de forma gradual, para permitir las adaptaciones en los procedimientos y en los sistemas informáticos que, necesariamente, han de acometer tanto las entidades declarantes como el propio Banco de España, por lo que las modificaciones introducidas por la OM entran en vigor en diferentes fases. De esta forma, los costes de transición se reducen y distribuyen mejor en el tiempo.

La primera etapa de estos cambios se ha iniciado en enero de 2021. Las modificaciones han sido incorporadas a la Circular 1/2013, sobre la Central de Información de Riesgos, por la Circular 1/2021, que la modifica:

- Con objeto de anticipar la información a las entidades, se fija el vigésimo primer día natural del mes siguiente al que se refieran los datos, como la fecha límite en la que Banco de España debe poner a disposición de las entidades declarantes la información de los riesgos de sus acreditados en los informes de retorno. Esto, en la práctica, supone adelantar en unos ocho días la fecha en la que la información está a disposición de las entidades, ya que, hasta la entrada en vigor de la OM, el Banco de España la remitía a finales de cada mes.
- Para incrementar el número de titulares y de operaciones cuya información se incluye en los informes de retorno, se reduce el umbral de los riesgos que se incluyen. Con esta rebaja del umbral, los informes de retorno pasan a incluir la información que las entidades hayan declarado a la CIR de los titulares cuyo riesgo acumulado en una entidad sea superior a 1.000 euros, frente a los 9.000 euros aplicados con anterioridad a la OM.

- Para aumentar la información disponible para las entidades y para el propio Banco de España en el desempeño de sus funciones, se aumenta el perímetro de las entidades declarantes a la CIR, incluyendo las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico como nuevas entidades que deberán reportar sus operaciones a la CIR, siempre que realicen la actividad de crédito señalada en el Real Decreto-ley 19/2018, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. Además de las entidades españolas, también se incluyen como declarantes las entidades extranjeras que operen en España, ya sea a través de una sucursal o actuando en régimen de libre prestación de servicios.

En una segunda fase, en julio de 2022 entrarán en vigor dos nuevas modificaciones, también orientadas a la mejora ya comentada de la información de retorno:

- Se establece el día 7 de cada mes como fecha límite para el envío al Banco de España de los datos que deben reportar las entidades a la CIR. Esta reducción en tres días del plazo de envío para las entidades permitirá incrementar el plazo del que dispone la CIR para la depuración de la información recibida, y las entidades, para el envío de las correcciones necesarias.
- Todas las operaciones de titulares cuyo riesgo acumulado en una entidad sea superior a 1.000 euros deberán declararse a la CIR, sin posibilidad de aplicar ninguna exención a su declaración, como hasta ahora permite la Circular 1/2013 para las operaciones que cumplen determinadas condiciones. Esta modificación ampliará aún más el número de titulares y de operaciones cuya información se incluye en los informes de retorno.

Finalmente, la disposición adicional segunda de la OM establece que el Banco de España elaborará un informe sobre la posibilidad y la conveniencia de incrementar la frecuencia de la declaración de las entidades y la información de retorno. También se valorará la posibilidad de ampliar las operaciones que se declaran de forma individualizada para incluir riesgos acumulados por debajo del límite actualmente en vigor. El proceso de análisis derivado de las conclusiones de este informe podría suponer nuevos cambios normativos.

científicos de interés público. La información a la que podrán acceder usuarios con fines científicos de interés público es la de las bases de microdatos de las que son titulares estas cuatro instituciones, con las necesarias garantías de seguridad, secreto estadístico y protección de datos personales que establece la ley vigente.

- **En tercer lugar, también existen iniciativas que persiguen la utilización de los datos de la CIR para ayudar en el diseño y en el análisis de impacto de medidas regulatorias.** En este contexto, el Banco de España firmó en octubre de 2020 un convenio de colaboración con la Asociación Española de Banca y con la Confederación Española de Cajas de Ahorros para facilitar a estas asociaciones determinada información de la CIR y de la Central de Balances del Banco de España. El objetivo era realizar un estudio que permitiera valorar el impacto del COVID-19 en el sector empresarial e identificar posibles medidas para atender las necesidades de las empresas viables con problemas temporales de liquidez. Esta información se facilitó únicamente en forma agregada o anonimizada, de manera que no permitiera la identificación de los sujetos a los que se referían los datos.

En la actualidad, está prevista la firma de otro convenio (en este caso, con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) para el suministro de determinados datos de las operaciones declaradas a la CIR, con objeto de colaborar en el proyecto llamado «Evaluación de la efectividad de las medidas preconcursales en España». El objeto de este proyecto es identificar, recopilar y clasificar la información existente sobre los procedimientos preconcursales en España y realizar un análisis sobre su eficacia, con el fin de contribuir a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.



ANEJOS

ANEJO 1 RELACIÓN DE VARIABLES QUE SE HAN DE DECLARAR A LA CIR SEGÚN LA CIRCULAR 1/2013 (en color, las nuevas variables incorporadas en 2021¹)

Datos de personas

— Código de la persona	— Vinculación de los titulares con los grupos de clientes relacionados
— Nombre	— Forma jurídica
— Domicilio y provincia de la persona	— Código identificador de personas jurídicas (Código LEI)
— Sector institucional	— Sede central de la empresa
— Parte vinculada	— Entidad matriz inmediata y entidad matriz última
— Actividad económica	— Vinculación con Administraciones Públicas españolas
— Estado del procedimiento legal y fecha de incoación	— Tamaño de la empresa y fecha
— Fecha, país de nacimiento y sexo para personas físicas	— Número de empleados
— Relación de los titulares con las entidades que integran el sector público español	— Balance total
— Para personas no residentes:	— Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros individuales y fecha de los datos financieros individuales
• Identificador nacional	— Importe neto de la cifra de negocio en los estados financieros consolidados y fecha de los datos financieros consolidados
• Tipo de identificador	

Datos básicos de las operaciones y de las relaciones con las personas

— Código de la operación	— Provincia en la que se realiza la inversión
— Código de la persona	— Esquema de amortización
— Naturaleza de la intervención en la operación	— Porcentaje de participación en los préstamos sindicados (%)
— Relación contrato y operación	— Identificador del contrato sindicado
— Código del valor y código ISIN	— Valores adquiridos temporalmente o prestados. Nominal
— País de localización de la actividad	— Financiación de construcciones o promociones inmobiliarias: estado de la construcción, licencia, número de viviendas previstas y código de la promoción inmobiliaria
— Tipo de producto	— Subvención de la operación
— Subordinación del producto	— Clasificación de las operaciones de la norma segunda, 1bis
— Operación para la financiación de un proyecto	— Instrumento fiduciario
— Tipo de riesgo asociado a los derivados	— Recurso
— Finalidad de la operación	— Derechos de reembolso
— Trámites legales realizados para recuperar la operación	— Frecuencia de pago
— Principal o notional al inicio de la operación	— Cambios en el valor razonable debidos a cambios en el riesgo crediticio antes de la adquisición
— Importe del compromiso al inicio	— Moratoria COVID-19
— Límite máximo a disposición del prestatario al inicio de la operación	— Fecha de comienzo de la moratoria COVID-19
— Fecha de formalización o emisión, fecha de liquidación y fecha de vencimiento	— Fecha de finalización de la moratoria COVID-19
— Origen de la operación	— Modificación de los términos de las operaciones. Real Decreto-ley 34/2020
— Estado de refinanciaciones y reestructuraciones	— Fecha de la modificación. Real Decreto-ley 34/2020
— Fecha del estado de refinanciaciones y reestructuraciones	
— Canal de contratación	

¹ Por la Circular 1/2021.

Datos dinámicos de las operaciones

- Moneda
- Plazo residual
- Garantía real principal. Tipo y cobertura
- Garantía personal principal. Tipo y cobertura
- Situación de la operación
- Fecha del primer incumplimiento
- Pro memoria: Fecha del primer incumplimiento antes de la refinanciación o reestructuración
- Pro memoria: Fecha del primer incumplimiento, excluyendo fallidos parciales
- Fecha del último incumplimiento
- Principal asumido por la entidad: importe vencido y no vencido²
- Intereses y comisiones vencidos asumidos por la entidad²
- Intereses de demora asumidos por la entidad²
- Gastos exigibles asumidos por la entidad²
- Límite actual del riesgo asumido por la entidad²
- Riesgo disponible asumido por la entidad: disponibilidad inmediata y condicionada²
- Pro memoria: Importe vencido antes de la refinanciación o reestructuración asumido por la entidad
- Pro memoria: Importe de los fallidos parciales
- Principal vencido cobrado en efectivo
- Principal vencido subvencionado
- Amortización anticipada. Importe por el que se reduce el principal
- Condonación o prescripción del derecho de cobro. Importe por el que se reduce la deuda
- Código del titular del riesgo indirecto
- Importe de la responsabilidad conjunta
- Operación subrogada o segregada. Importe por el que se reduce la deuda
- Refinanciación o renovación. Tipo de refinanciación o renovación e importe por el que se reduce la deuda
- Operación transferida, incluida la gestión. Importe por el que se reduce la deuda
- Fecha de la última liquidación de intereses
- Fecha de la próxima liquidación de intereses
- Fecha de la última liquidación de principal
- Fecha de la próxima liquidación de principal
- Número de cuotas impagadas
- Activos adjudicados o recibidos en pago: tipo de activo e importe por el que se reduce la deuda
- Tipo efectivo de definición restringida (TEDR)
- Signo del tipo efectivo de definición restringida (TEDR)
- Fecha de la próxima revisión del tipo de interés
- Clasificación de las operaciones en función del riesgo de crédito por insolvencia
- Riesgo máximo garantizado asumido por la entidad³
- Riesgo dispuesto garantizado asumido por la entidad: importe total, importe vencido, intereses de demora y gastos exigibles³
- Importe transferido
- Situación de impago (*default*) de la operación
- Fecha de la situación de impago (*default*) de la operación
- Importes vencidos de la operación
- Saldo vivo nominal
- Saldo fuera de balance
- Interés devengado

Tipos de interés

- Tipo de referencia. Vencimiento
- Tipo de referencia sustitutivo
- Modalidad de tipo de interés
- Margen del tipo de interés
- Frecuencia de revisión del tipo de interés
- Signo del margen del tipo de interés
- Tipo de referencia
- Tipo de interés máximo/mínimo
- Fecha final del período de solo interés

Garantías

Datos comunes a todas las garantías

- Código de la garantía recibida
- Garantía real principal asignada a la operación
- Tipo de garantía
- Tipo de activo o garantía recibida
- Alcance de la garantía real
- Código de la garantía real de máximo
- Orden de prelación de la garantía
- Código del proveedor de la garantía
- Valor de la garantía
- Tipo de valor de la garantía
- Método de valoración de la garantía
- Fecha del valor de la garantía
- Fecha de vencimiento de la garantía
- Valor original de la garantía
- Fecha de la valoración original de la garantía

² Mismos importes si el riesgo ha sido asumido por terceros.

³ Estos importes se refieren a los riesgos indirectos.

De inmuebles:

- Consideración del inmueble en la normativa
- Localización del inmueble. País y código postal
- Inmueble integrado por varias fincas
- Referencia catastral
- Identificador único registral (IDUFIR/CRU)
- Identificador registral
- Importe de las cargas previas comprometidas con terceros
- Importe de la responsabilidad hipotecaria. Principal
- Importe de la responsabilidad hipotecaria. Intereses y costas
- Activos en garantía de financiaciones de promociones inmobiliarias
- Última tasación completa o por métodos estadísticos⁴
- Fecha de la construcción
- Fecha de la última rehabilitación integral
- Estado de la construcción
- Licencia
- Vivienda habitual del prestatario
- Valor del terreno ajustado
- Número de viviendas
- Tipo de suelo
- Desarrollo del planeamiento
- Sistema de gestión
- Fase de gestión
- Paralización de la urbanización
- Porcentaje de la urbanización ejecutado (%)
- Porcentaje del ámbito valorado (%)
- Proximidad respecto del núcleo urbano
- Proyecto de obra
- Superficie del terreno (m²)
- Aprovechamiento (m²)
- Producto que se prevé desarrollar
- Finca rústica con expectativas urbanísticas
- Valor de la garantía a efectos del cálculo del *loan to value*: importe de la garantía y forma de obtención
- Valor de la garantía a efectos del cálculo del deterioro: importe de la garantía y porcentaje de descuento (%)

De los activos financieros:

- Código del emisor de los activos financieros recibidos en garantía
- Código del valor
- Cotización
- Nominal

Información dinámica de las garantías (mensual)

- Importe de la garantía a efectos del *loan to value* atribuido a la operación
- Valor asignado a la garantía
- Derechos de cobro preferentes de terceros contra la garantía

Información dinámica de las garantías (trimestral)

- Edificios en construcción o rehabilitación
 - Fecha del último grado de avance estimado
 - Código de la sociedad de tasación o valoración que estimó el grado de avance
 - Porcentaje construido (%)
 - Importe de los gastos de desarrollo
- Promociones inmobiliarias:
 - Porcentaje de ventas formalizadas (%)
 - Porcentaje de subrogaciones o cancelaciones por entrega de vivienda a comprador final (%)

Información contable

- Clasificación contable de las operaciones
- Fecha de la clasificación de la operación en función del riesgo de crédito
- Activos no corrientes en venta
- Provisiones asociadas a exposiciones fuera de balance
- Reconocimiento en el balance
- Estado de reestructuración o refinanciación y renegociación
- Fallidos acumulados
- Fecha del estado de reestructuración o refinanciación y renegociación
- Importes recuperados acumulados desde la situación de impago
- Deterioro del valor acumulado
- Tipo de deterioro del valor
- Cartera prudencial
- Método de evaluación del deterioro del valor
- Importe en libros
- Fuentes de carga
- Probabilidad de impago (*default*)
- Cambios acumulados en el valor razonable debidos al riesgo crediticio
- Situación de impago (*default*) de la persona
- Clasificación de la operación en función del riesgo de crédito
- Fecha de la situación de impago (*default*) de la persona

⁴ En caso de última tasación completa, se requiere información de hasta 20 atributos o, en caso de última tasación por métodos estadísticos, de hasta 5 atributos.

Datos de transferencias

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — Código de la transferencia | — Operaciones transferidas. Tratamiento contable |
| — Código del cesionario o vendedor | — Tratamiento a efectos de recursos propios |
| — Tipo y fecha de la transferencia | — Código de la operación transferida |
| — Forma jurídica de la transferencia | — Porcentaje transferido de la operación (%) |

Datos básicos que vinculan códigos

- | | |
|--|--|
| — Código y tipo de código que se vincula | — Código REN de la entidad declarante del código vinculado |
| — Tipo de vinculación | — Código vinculado |

VARIABLES QUE HAN DE DECLARAR LAS ENTIDADES SUJETAS A DECLARACIÓN REDUCIDA⁵

Datos de personas

- | | |
|--|---|
| — Código de la persona | — Para personas no residentes: |
| — Nombre | • Identificador nacional |
| — Domicilio y provincia de la persona | • Tipo de identificador |
| — Sector institucional | — Forma jurídica |
| — Actividad económica | — Código identificador de personas jurídicas (Código LEI) |
| — Fecha, país de nacimiento y sexo para personas físicas | — Sede central de la empresa |

Datos de los riesgos directos e indirectos

- | | |
|--|---|
| — Código de la operación | — Garantía real principal. Cobertura de la garantía real principal |
| — Código del titular del riesgo | — Garantía personal principal. Tipo de garantía personal principal |
| — Naturaleza de la intervención en la operación | — Garantía personal principal. Cobertura de la garantía personal principal |
| — Tipo de producto | — Situación de la operación |
| — Moneda | — Garantía del Estado. COVID-19 |
| — Plazo residual | — Modificación de los términos de las operaciones. Real Decreto-ley 34/2020 |
| — Garantía real principal. Tipo de garantía real principal | |

Datos de los riesgos directos

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — Riesgo dispuesto. Total | — Riesgo dispuesto. Intereses de demora y gastos exigibles |
| — Riesgo dispuesto. Importes vencidos | — Riesgo disponible |

Datos de los riesgos indirectos

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — Riesgo dispuesto. Total | — Riesgo dispuesto. Intereses de demora y gastos exigibles |
| — Riesgo dispuesto. Importes vencidos | — Riesgo disponible |

⁵ Se consideran entidades sujetas a declaración reducida las siguientes: las entidades de crédito que operan en España en régimen de libre prestación de servicios, los prestamistas inmobiliarios y las entidades de pago y entidades de dinero electrónico, incluidas las que operan en España en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios.

1962

La Central de Información de Riesgos (CIR) del Banco de España se creó en 1962 con la publicación del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de nacionalización y reorganización del Banco de España. Dicho decreto-ley recogía en su artículo 16 que «el Banco de España establecerá en relación con las operaciones de crédito de la banca, cajas de ahorro y demás entidades de crédito un Servicio Central de Información de Riesgos». Dichas entidades tenían que remitir periódicamente al Banco de España todos los datos sobre la concesión de créditos, así como las circunstancias excepcionales de ellos, como insolvencia, moratoria u otras análogas. Asimismo, se informaría sobre aquellos créditos que, por su importancia, pudieran suponer una concentración de riesgos que comprometiera el capital y las reservas de la entidad de crédito o, incluso, la propia solvencia patrimonial del titular del crédito.

La información sobre los créditos incluiría la actividad económica o profesional del acreditado, la provincia y el plazo.

Por otra parte, se establecía que las entidades de crédito podrían solicitar al Banco de España informes sobre posibles acreditados, estando obligadas al mantenimiento del secreto bancario. En dichos informes se omitiría la denominación de las entidades con las que el titular estuviera endeudado.

1963

Posteriormente, en 1963, con la publicación de la Orden Ministerial (OM) de 13 de febrero, se establecieron las primeras normas generales de organización y funcionamiento de la CIR, delegándose en el Banco de España la determinación de los riesgos que se habían de declarar, así como el establecimiento de los modelos y los procedimientos que se debían utilizar en la comunicación y en la solicitud de datos.

Se fijó el umbral de declaración en 30.000 euros (5 millones de pesetas entonces), pero los casos de quiebra, suspensión de pagos, moratoria o insolvencia se comunicarían con independencia de su cuantía.

Este año empezaron a declarar los bancos.

1966

En 1966 comenzaron a declarar las cajas de ahorros y el umbral de declaración se redujo a 12.000 euros (2 millones de pesetas).

1971

Con el fin de lograr una mayor celeridad y eficacia en el funcionamiento de este servicio, en 1971 la OM de 22 de enero estableció el envío de documentación de las entidades directamente a la CIR. Hasta entonces, las declaraciones de los bancos y de las cajas de ahorros se enviaban a través del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo y del Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorro, respectivamente.

1972

Posteriormente, en 1972, el Banco de España, en su Circular de 10 de octubre, publicó la Instrucción General n.º 1, sobre los Servicios de la Oficina Central de Información de Riesgos, donde refundió todas las normas sobre el funcionamiento de la CIR. Con esta circular se amplió la obligación de declarar a las entidades oficiales de crédito, y se concretaron las normas para la presentación en cinta magnética de las declaraciones de las entidades que lo solicitaran voluntariamente. En relación con el colectivo de titulares, aunque en principio se previó incluir a las personas físicas y jurídicas contempladas en el artículo 35 del Código Civil, finalmente se incluyeron las personas físicas, las compañías mercantiles inscritas en el Registro Mercantil y las cooperativas inscritas en el Registro Especial del Ministerio del Trabajo.

1974

En febrero de 1974, el Banco de España publicó una nueva circular con las normas específicas para llevar a cabo el control de aquellos casos excepcionales de concentración de riesgos delimitados en el Decreto-ley 18/1962. De acuerdo con esta circular, en la que se establecía una declaración anual relativa a determinadas sociedades mercantiles, las entidades con acreditados cuyo endeudamiento (dispuesto por riesgos de dinero) superase los 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) deberían enviar información complementaria sobre estos relativa a la cifra de recursos propios y su composición, bonos y obligaciones emitidas, otras deudas a más de dieciocho meses, volumen de ventas netas de impuestos, etc. Análoga información se solicitaría de aquellos titulares cuyo endeudamiento en el total del sistema superase los 6 millones de euros (1.000 millones de pesetas).

La primera información de carácter económico-financiero remitida fue la correspondiente al 31 de diciembre de 1974.

De esta forma, se dispuso de la información económico-financiera de un conjunto de empresas no financieras clasificadas por sectores de actividad, cuya explotación constituyó el embrión de la actual Central de Balances del Banco de España.

1976

En 1976, con la Carta Circular del Banco de España de 8 de septiembre, se amplió el colectivo de titulares, tras requerir una declaración anual complementaria de los riesgos con las asociaciones culturales, recreativas, deportivas, asistenciales y diversas fundaciones y corporaciones públicas, como consejos superiores de colegios profesionales, cámaras oficiales, etc. Asimismo, se estableció una declaración anual global de otros tipos de titulares: entidades sindicales, asociaciones del Movimiento, asociaciones religiosas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, mancomunidades, organismos autónomos del Estado, etc.

Asimismo, en este año el umbral de declaración se elevó a 24.000 euros (4 millones de pesetas).

1977

En 1977 se rebajó de 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) a 0,9 millones de euros (150 millones de pesetas) el importe para efectuar la declaración anual de la información económico-financiera de determinadas sociedades mercantiles establecida en 1974.

1981-1982

La disposición final tercera del Real Decreto-ley 3/1981, de 18 de enero, dispuso que el Banco de Crédito Local debía establecer una central de riesgos en relación con las operaciones de crédito que la banca, las cajas de ahorros y las demás entidades de crédito concertasen con las Corporaciones Locales.

Posteriormente, el Real Decreto 2749/1981, de 19 de octubre, y la OM de 7 de junio de 1982 establecieron que las Corporaciones Locales deberían declarar directamente al Banco de Crédito Local, mientras que, en el caso de las entidades de crédito, la información sobre las citadas Corporaciones Locales, fundaciones y sociedades municipales o provinciales y empresas mixtas se declararía al Banco de España, el cual la remitiría posteriormente al Banco de Crédito Local. Los modelos de

declaración de esta nueva información se publicaron en la Circular del Banco de España 19/1982, de 5 de octubre.

La expansión de las cooperativas de crédito y la asimilación de su normativa a la de las restantes entidades de crédito pusieron de manifiesto la conveniencia de su incorporación al colectivo de entidades declarantes a la CIR, que se reguló en la Circular del Banco de España 27/1981, recopilándose los primeros datos de este tipo de entidades en enero de 1982.

1983

La importante transformación del sistema financiero durante la década de los setenta, junto con la crisis económica, que hizo más complejo el análisis de los riesgos, determinó una mayor demanda de información sobre aquellos por parte de las entidades de crédito. Ello llevó al Banco de España a plantear una modificación en profundidad de la CIR mediante la Circular del Banco de España 18/1983, de 30 de diciembre, cuyos principales cambios fueron:

- Ampliación del colectivo de entidades declarantes, con la inclusión del propio Banco de España y de los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, en Cajas de Ahorro y en Cooperativas de Crédito.
- Definición del colectivo de titulares, que pasaría a estar integrado por todos los residentes en España, tanto del sector público como del privado, cualesquiera que fueran su personalidad o forma jurídica, con la excepción de las entidades declarantes.
- Normalización de las características declarables de los titulares: datos personales, sector institucional, actividad económica y provincia.
- Obligación de declarar los riesgos indirectos, cuyo mínimo exento se fijaba en 60.000 euros (10 millones de pesetas), frente al umbral de 24.000 euros (4 millones de pesetas) establecido para los riesgos directos.
- Características declarables de los riesgos: clase de instrumentos, moneda de denominación, plazo, garantía y situación de riesgo (normal, vencido, dudoso, moroso —con las diferentes categorías de morosidad contempladas en la circular contable vigente en aquel momento—, suspenso y redescotado).
- Forma de presentación de la declaración. La información mensual debería presentarse en soporte magnético. No obstante, si las entidades tuviesen

dificultades, podrían seguir declarando en papel con la autorización expresa del Banco de España. De hecho, hasta 1989 la declaración en soporte magnético no fue obligatoria.

- En este año también se suprimió la obligación de declarar la información económico-financiera de los titulares cuyo endeudamiento superase determinados límites establecida en 1974.

1984

En 1984, con la publicación de la OM de 28 de noviembre, se autorizó el acceso a la CIR de las sociedades de garantía recíproca, aunque no fueron consideradas entidades declarantes.

1989

En 1989, con la CBE 7/1989, de 24 de febrero, todas las entidades financieras que, conforme a la Ley 26/1988, de 26 de diciembre, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, pasaron a tener la consideración de entidades de crédito (las sociedades de crédito hipotecario, las entidades de financiación, las sociedades de *factoring* y las sociedades de arrendamiento financiero), así como las sociedades de garantía recíproca, que también pasaron a estar bajo el control e inspección del Banco de España, se incluyeron, junto con la Sociedad de Garantías Subsidiarias y la Sociedad Mixta de Segundo Aval, entre el colectivo de entidades declarantes. No obstante, este grupo de entidades continuó formando parte del grupo de titulares declarables.

Asimismo, se decidió incluir entre los riesgos declarables los valores representativos de deuda, con exclusión de los títulos del Estado y otros organismos de la Administración Central. Los créditos y los valores representativos de deuda dados de baja del activo por considerarlos fallidos dejarían de declararse a la CIR una vez transcurridos cinco años desde su baja, salvo que antes hubieran prescrito las acciones legales.

1990

Posteriormente, en 1990, con la OM de 27 de diciembre, se autorizó el acceso a la CIR a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que comenzó a declarar ante ella.

La creciente importancia de los riesgos frente a no residentes, junto con el notable desarrollo de las técnicas de transmisión y procesamiento de datos y los cambios en la normativa contable de las entidades, puso de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una nueva modificación de la regulación de la CIR.

Para ello, el Banco de España publicó la Circular 3/1995, de 25 de septiembre, que actualizó la regulación de la CIR en varios aspectos:

- Obligación de declarar los riesgos frente a titulares no residentes, aunque con un umbral (300.000 euros, 50 millones de pesetas) significativamente mayor que el de los residentes, así como los gestionados a través de sociedades instrumentales.
- Las declaraciones deberían presentarse dentro de los diez primeros días del mes siguiente al que se referían los datos.
- Se redujo el umbral de declaración de los riesgos directos de titulares residentes a 6.000 euros (1 millón de pesetas). No obstante, se declararán los riesgos dudosos o de titulares en situación especial (quiebra, suspensión de pagos, moratoria o insolvencia), cualquier que fuera su importe, siempre que hubiera otros riesgos declarados.
- Las acciones y las participaciones se declararían cuando su valor contable fuera igual o superior a 6.000 euros.
- Los créditos y los valores representativos de deuda impagados dejarían de declararse a la CIR solo cuando prescribieran las acciones legales de la entidad tendentes a lograr su recuperación.
- Se reguló la posibilidad de que los titulares consultaran su declaración, aunque en la práctica ya lo venían realizando desde 1983, sin perjuicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación que amparaban a las personas físicas, según la Ley 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

El esquema de información establecido por la Circular 3/1995, conocido como CIR-95, fue el utilizado hasta abril de 2016, cuando comenzó utilizarse la información declarada según la Circular 1/2013.

1998

En 1998, la Circular del Banco de España 6/1998, de 29 de mayo, introdujo algunas modificaciones en la Circular 3/1995, entre las que destacan las siguientes:

- Todas las entidades declarantes serían también declarables, con la excepción de ciertas operaciones.
- Se excluían de la obligación de declarar a la CIR los instrumentos de capital propiedad de las entidades, aunque se continuaban informando al Banco de España, junto con la información financiera.

1999

Al objeto de prestar un mejor servicio a las entidades declarantes en tiempo y calidad, la Circular de Banco de España 8/1999, de 27 de julio, estableció que las solicitudes de informes se realizasen también en soporte magnético o por interconexión de ordenadores.

2001

Como consecuencia de las privatizaciones llevadas a cabo en la década de los ochenta, el Banco de Crédito Local perdió la condición de entidad financiera pública, lo que determinó ciertas modificaciones legales para que la gestión de la Central de Riesgos de las Corporaciones Locales continuara en el ámbito del sector público. En este sentido, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (hoy derogada por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre), y el Real Decreto 1438/2001, de 21 de diciembre, atribuyeron al Ministerio de Hacienda el mantenimiento de una Central de Información de Riesgos Locales que proveyera de información sobre las operaciones de crédito concertadas por las entidades locales y sus cargas financieras. El Banco de España, por su parte, continuaría recibiendo de las entidades de crédito información mensual sobre el endeudamiento de las entidades locales y la remitiría al Ministerio de Hacienda.

En este mismo año, la Circular del Banco de España 1/2001, de 30 de marzo, estableció el euro como unidad de cuenta en la que se expresarían los importes que se habían de declarar. Asimismo, se estableció que los riesgos menores de 6.000 euros no eran declarables, salvo los saldos morosos de operaciones con importes declarados con otra clave de situación, que se declararían como morosos con importe cero.

2002

La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, diseña un marco jurídico actualizado por el que confería a la CIR la naturaleza de servicio público, en la medida en que facilitaba el ejercicio de las competencias del Banco de España y dotaba de mayor estabilidad al sistema crediticio español. Esta ley derogó el Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, y la OM de 13 de febrero de 1963.

En dicho año, el Banco de España decidió hacer obligatoria la transmisión telemática de todas las comunicaciones con la CIR y codificar la identificación de los no residentes.

2003

Se firmó un acuerdo de intercambio de información con otras centrales de riesgos públicas de la UE. Este acuerdo estaba formalizado en un Memorando de Entendimiento (MdE) firmado por nueve BCN¹ para intercambiar información crediticia y de riesgo recogida en sus respectivas centrales de riesgos nacionales. El MdE fue discontinuado en 2018, ante la entrada en funcionamiento de AnaCredit. En febrero de 2020, el BCE adoptó la Orientación (BCE/2020/11), en la que se establecen los procedimientos para el envío de la información de retorno a las entidades declarantes a AnaCredit.

2004

En 2004, la Orden ECO 697/2004, de 11 de marzo, desarrolló el régimen jurídico otorgado a la CIR por la Ley 44/2002, estableciendo los riesgos que se habían de declarar, las condiciones de las declaraciones periódicas o complementarias, y el contenido, forma y periodicidad de los informes sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas relacionadas con las entidades declarantes.

Simultáneamente, la Orden ECO 708/2004, de 11 de marzo, renovó la condición de entidad declarante a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

En ese mismo año, el Banco de España publicó la Circular 1/2004, de 29 de junio, por la que se modificaba la Circular 3/1995, adaptando el funcionamiento de la CIR al mandato de la Ley e iniciando un proceso gradual de reformas en relación con la forma y los datos que se deben declarar. Entre estas últimas se encontraban, por un

¹ El MdE fue firmado en 2003 e inicialmente participaban las centrales de riesgos de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal. En 2010, el MdE fue actualizado con la incorporación al acuerdo de la República Checa y de Rumanía, que comenzaron a intercambiar información en marzo de 2012.

lado, la adaptación de los derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como los criterios de suspensión de la cesión de los datos declarados, a lo dispuesto en la Ley y, por otro, la puesta a disposición de los usuarios de la información lo antes posible.

Asimismo se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en cuyo artículo 55 se señalaba que el Ministerio de Hacienda mantendría una central de riesgos que proveyera de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por las entidades locales y las cargas financieras que supusieran, así como que el Banco de España colaboraría con los órganos competentes del Ministerio de Hacienda con el fin de suministrar la información que se recibiera a través de su Servicio Central de Información de Riesgos sobre Endeudamiento de las Corporaciones Locales, en la forma y con el alcance y la periodicidad que se estableciese.

2007

El Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobaba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, reguló el objeto y el contenido de la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local), cuya gestión estaba encomendada a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, y una de cuyas fuentes, según el artículo 38 del real decreto, continuaba siendo el Banco de España respecto de la información que recibiera de las entidades financieras a través de la CIR, relativa al endeudamiento de las entidades locales y sus entes dependientes.

El objeto de la CIR Local era semejante al que hasta este real decreto se contenía en el derogado Real Decreto 1438/2001, de 21 de diciembre, e incluía la información de las operaciones de préstamo, crédito y emisiones de deuda pública en todas sus modalidades, los avales y las garantías prestados en cualquier clase de crédito, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualesquiera otras que afectasen a la posición financiera futura de la entidad, concertada por las entidades locales, sus organismos autónomos y las sociedades mercantiles participadas de forma directa o indirecta, así como los consorcios en que participasen dichas entidades locales y sus entes dependientes. La información comprendería todas las operaciones, con independencia de su plazo.

Por último, se publicó el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que derogaba la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, y recogía en su artículo 24 una regulación genérica de la Central de Información de Riesgos Local, remitiéndose al artículo 55 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2011

Se aprobó la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en cuyo artículo 18, n.º 2, recogía la consulta a la CIR (potestativamente) entre los procedimientos para una evaluación responsable de los préstamos. En el n.º 5 establecía que «En el supuesto de que una entidad rechace la concesión de un crédito o préstamo por considerar insuficiente la solvencia del cliente basándose en la consulta a los ficheros a los que se refiere el párrafo 2.º del apartado 2.a), la entidad informará al cliente del resultado de dicha consulta».

2012

En abril de 2012 se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que derogaba el hasta entonces vigente Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que recogía una regulación genérica de la Central de Información de Riesgos Local. Esta ley, en su artículo 28, disponía lo siguiente:

- 1 «El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantendrá una central de información, de carácter público, que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas Administraciones Públicas.
- 2 A estos efectos, los bancos, cajas de ahorros y demás entidades financieras, así como las distintas Administraciones Públicas, remitirán los datos necesarios, en la forma que se determine reglamentariamente.
- 3 El Banco de España colaborará con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante el suministro de la información que reciba relacionada con las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Con independencia de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá requerir al Banco de España la obtención de otros datos concretos relativos al endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, en los términos que se fijen reglamentariamente.
- 4 La información obrante en la central a que se refiere este artículo estará, en los ámbitos en que les afecten, a disposición del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.

- 5 Mediante orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas respecto a la información que les afecte, se determinarán los datos y documentos integrantes de la central de información, los plazos y procedimientos de remisión —incluidos los telemáticos—, así como la información que sea objeto de publicación para conocimiento general, y los plazos y el modo en que aquellos hayan de publicarse.»

A falta de desarrollo reglamentario, subsistía el régimen previsto en el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprobaba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, cuyo artículo 38 disponía que continuaba siendo el Banco de España una de las fuentes de la Central de Riesgos de las Corporaciones Locales respecto de la información que recibiera de las entidades financieras a través de la CIR, relativa al endeudamiento de las entidades locales y sus entes dependientes.

2013

La crisis financiera que a escala internacional se inició en 2007 enfatizó la utilidad y la relevancia de la CIR desde la óptica de la supervisión macroprudencial y del análisis de la estabilidad financiera, actividades que, por la naturaleza amplia y cambiante de los riesgos sistémicos, son muy intensivas en datos. Por ello, en 2011 el Banco de España inició un proceso de reflexión con objeto de mejorar la información declarada a la CIR, para que en el futuro pudiera contribuir de una forma más eficaz al mantenimiento de la estabilidad financiera del sistema crediticio español.

En este contexto, se aprobó la Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, que introdujo un profundo cambio en el funcionamiento de la CIR, sustituyendo a la Circular 3/1995 y ampliando sustancialmente la información recogida. A continuación se sintetizan los principales cambios² respecto a la Circular 3/1995:

- Aumento de la granularidad de la información recibida, las operaciones han de declararse individualmente y no de forma agregada.
- Se requiere un mayor número de características tanto de los titulares de riesgos como de las operaciones; entre otras, se solicita detalle exhaustivo de las garantías.

² El recuadro 1.1 de la *Memoria de la CIR 2016* incluye una comparación detallada entre las características de la CIR 1995 y las de la CIR 2013.

- Se elimina, con carácter general³, el umbral de declaración, por lo que han de declararse todos los riesgos mantenidos por las entidades, independientemente de su importe.
- Se actualiza a 9.000 euros (acumulado por titular y entidad) el umbral por debajo del cual las operaciones no se retornan a las entidades.

2014

Con fecha 25 de julio de 2014 se aprobó el Real Decreto 636/2014, que crea la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas y regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2016

En el ámbito del Eurosistema, en mayo de 2016, el Consejo de Gobierno del BCE aprobó el Reglamento BCE/2016/13, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio⁴, que establecía una base de datos crediticios centralizada, conocida como «AnaCredit» (*Analytical Credit Dataset*), de aplicación a partir del 31 de diciembre de 2017.

El reglamento establece la obligación de las entidades de crédito residentes en un país de la zona del euro y de las sucursales en la zona del euro de entidades de crédito extranjeras de enviar al BCE, a través de los BCN correspondientes, información relativa, en una primera fase, a los préstamos que tienen con su clientela o gestionan por cuenta de terceros, y siempre que el deudor sea una persona jurídica y con quien la entidad haya asumido un riesgo acumulado igual o superior a 25.000 euros.

2017

Dadas las similitudes entre la información que era necesario enviar a AnaCredit y la ya definida para la CIR, el Banco de España optó por incluir los nuevos requerimientos en la información que se ha de remitir a la CIR. Con este objetivo, se aprobó la

3 Según establece el apartado 3 de la norma segunda de la Circular 1/2013, no han de declararse individualizadamente las operaciones cuyo titular pertenezca al sector hogares o sociedades no financieras, no tenga otro tipo de operaciones declarables a la CIR, su riesgo acumulado, directo e indirecto, en la entidad declarante sea inferior a 6.000 euros, y no tenga importes calificados como dudosos, o el importe total de las operaciones así calificadas sea inferior a 100 euros.

4 Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13), publicado el 1 de junio en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Circular 1/2017, de 30 de junio, del Banco de España, adaptando con ella la Circular 1/2013 al Reglamento de AnaCredit. Esta integración⁵ ha permitido que tanto las entidades como el Banco de España traten esta información de manera integral, evitando la implantación de un nuevo sistema de declaración e imponer nuevas obligaciones a las entidades, ya que con una única declaración cumplen con ambos requerimientos.

2019

En marzo de 2019 se aprobó la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que tiene por objeto la transposición de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, que establece un régimen específico de protección de los prestatarios, garantes o titulares de garantías en préstamos o créditos garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial.

La ley regula el régimen jurídico de los prestamistas inmobiliarios y de los intermediarios de crédito inmobiliario.

Los principales cambios introducidos en esta norma y que afectan a la CIR son los siguientes:

- Modifica los artículos 60 y 61 de Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, de modo que:
 - a) Introduce dos nuevos tipos de entidades declarantes a la CIR: las entidades de crédito que operen en régimen de libre prestación de servicios y los prestamistas inmobiliarios.
 - b) Permite que, además de las entidades declarantes, los intermediarios de crédito inmobiliario tengan derecho a obtener informes sobre personas registradas en la CIR, siempre que se cumplan determinados requisitos.
 - c) Establece la posibilidad de que el Banco de España impida temporalmente el acceso de una entidad a los datos de la CIR cuando haya incumplido sus obligaciones de información con la calidad y exactitud necesarias.
- Por primera vez, se establece la obligación, en relación con los préstamos hipotecarios sujetos a esta ley, de consultar los datos de la CIR. Así su

⁵ Para un mayor detalle, véase el esquema 1.1 («Integración de los requerimientos de AnaCredit en el esquema de información de la CIR») de la *Memoria de la CIR 2017*.

artículo 12 dispone que: «El prestamista deberá consultar el historial crediticio del cliente acudiendo a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.»

2020

La Circular del Banco de España 1/2020, de 28 de enero, por la que se modifica la Circular 1/2013, sobre la Central de Información de Riesgos, incorpora a la regulación de la CIR los cambios introducidos por la Ley 5/2019.

En julio de 2020 se publicó la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, que, con la finalidad de reforzar la información de la que disponen los prestamistas y sus procedimientos de evaluación de la solvencia de los potenciales prestatarios, modifica la Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos. Los principales cambios introducidos son los siguientes:

- Amplía el perímetro de las entidades declarantes a la CIR, otorgando esa condición a las entidades de pago y de dinero electrónico, incluidas las que operen en régimen de libre prestación de servicios, que realicen la actividad de concesión de crédito.
- Rebaja el umbral de los datos facilitados a las entidades declarantes y a los intermediarios de crédito inmobiliario en el ejercicio de su actividad, que pasa de 9.000 a 1.000 euros.
- Amplía el volumen de información que las entidades han de declarar al Banco de España.
- Adelanta las fechas de la declaración de los datos que se pondrán a disposición de las entidades.

Esta modificación inicia un proceso gradual de revisión y adaptación de la normativa reglamentaria de la Central de Información de Riesgos, que culminará, como establece la disposición adicional segunda, con una valoración del funcionamiento de la Central de Información de Riesgos un año después de la entrada en vigor de la orden.

Finalmente, se incluyeron en la circular los requisitos de información que los cuatro reales decretos-leyes dictados para mitigar el impacto económico de la pandemia de COVID-19 imponían a los prestamistas para facilitar el seguimiento de las operaciones afectadas y apoyar las labores de supervisión e inspección del Banco de España.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, en su disposición adicional única, establece que el ICO, con objeto de agilizar los trámites relativos a la comprobación de los impagados en la CIR que le sean comunicados por las entidades financieras otorgantes de los préstamos a los que haya aportado un aval, tendrá derecho a obtener la información referida sobre los riesgos de las personas físicas o jurídicas registrados en la CIR cuando así lo solicite, sin que deba cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61 de la Ley 44/2002 o en otras disposiciones en esta materia.

2021

La Circular del Banco de España 1/2021, de 28 de enero, modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, con el objetivo principal de adaptarla a las modificaciones introducidas en la regulación de la CIR por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio. La circular aborda los cambios cuya entrada en vigor debía producirse, de acuerdo con lo previsto en la OM de crédito revolvente, en 2021:

- En primer lugar, se modifican las normas tercera y decimosexta para rebajar de 9.000 a 1.000 euros el importe del riesgo acumulado de un titular en una entidad, que se incluirá en la información que el Banco de España retornará a las entidades
- En segundo lugar, se incluye, también en la norma decimosexta, el límite temporal máximo para la puesta a disposición de la información de retorno para las entidades declarantes y los intermediarios de crédito inmobiliario, que será de 21 días naturales a partir de la fecha a la que se refiera la última información declarada.
- En tercer lugar, se modifica la norma primera, con objeto de añadir como entidades declarantes a la CIR las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, incluidas las que operen en España, en el ejercicio del derecho de libertad de establecimiento y en régimen de libre prestación de servicios, que realicen la actividad de crédito.
- Finalmente, se modifican las normas cuarta, quinta y decimotercera, para determinar el ámbito de la información que habrán de remitir a la CIR las nuevas entidades declarantes, que coincidirá con el modelo de declaración reducida que se aplica ya a los prestamistas inmobiliarios y a las entidades de crédito que operan en régimen de libre prestación de servicios.

- Además, se actualiza en la norma vigésima la mención al derecho de cancelación, que pasa a denominarse «derecho de supresión», para alinear la terminología con la normativa vigente en materia de protección de datos.
- Por otro lado, en el marco de marco de reporte general a la CIR que establece la Circular 1/2013, se incorpora la nueva información solicitada a las entidades declarantes como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. Esta nueva información se traduce en la creación de seis dimensiones y la adición de nuevos valores en otras dos dimensiones del anejo 2 de la Circular.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de COVID-19, establece que, con el fin de detallar la articulación de las operaciones de refinanciación y reestructuración de la financiación con aval del sector público y adaptarlas a las necesidades de las diferentes empresas y sectores, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros se desarrollará el contenido del Código de Buenas Prácticas, que podrá ser suscrito por las entidades financieras para facilitar una adecuada respuesta del sector financiero ante la excepcional situación económica. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, se ha aprobado el citado Código de Buenas Prácticas, que ha sido publicado en el *BOE* el 13 de mayo de 2021.

Las entidades que se adhieren al Código de Buenas Prácticas se comprometen, entre otras medidas, a señalar en sus sistemas de contabilidad y de gestión del riesgo las operaciones de financiación recogidas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 5/2021, con el fin de facilitar su trazabilidad e incorporar esta señalización a la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Relación de normas vigentes sobre la CIR

a) Normativa específica sobre la CIR

- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero. El capítulo VI regula la CIR⁶.
- Orden ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos, modificada por la Orden ECO/747/2013, de 25 de abril, y por la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente.

⁶ Esta ley ha sido modificada por la disposición final séptima de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Las modificaciones han afectado al apartado primero del artículo 60 y al apartado segundo del artículo 61.

- Orden ECO/708/2004, de 11 de marzo, por la que se determina la condición de entidad declarante a la CIR del Banco de España para la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
- Circular del Banco de España 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España (anejo I), en redacción dada por la Circular 4/2005, de 23 de diciembre, que da nueva redacción a la descripción de los ficheros «Expedientes de la Central de Información de Riesgos» y «Central de Información de Riesgos».
- Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros⁷. Esta circular ha sido modificada por las circulares 5/2013, 5/2014, 3/2015, 4/2015, 4/2016 y 7/2016, 1/2017 2/2018, 1/2020 y 1/2021.

b) Otra normativa aplicable

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El artículo 28 establece que el Banco de España colaborará con el Ministerio de Hacienda mediante el suministro de la información que reciba relacionada con las operaciones de crédito de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que complementa lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, y transpone la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, relativa al acceso a la actividad de las entidades

⁷ Esta circular, que deroga la Circular del Banco de España 3/1995, entró en vigor el 31.12.2013 y contempla una aplicación escalonada de sus previsiones.

de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión.

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El artículo 55 regula la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales.
- Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Esta norma regula el contenido de la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local).
- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda.
- Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
- Circular del Banco de España 6/2016, de 30 de junio, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del documento «Información Financiera-Pyme» y se especifica la metodología de calificación del riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (BOE de 11 de julio).
- Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13).
- Reglamento (UE) 2016/1384 del Banco Central Europeo, de 2 de agosto de 2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2016/22).

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
- Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo, de 23 de noviembre de 2017, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2017/38).
- Orientación (UE) 2018/876 del Banco Central Europeo, de 1 de junio de 2018, sobre RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2018/16).
- Orientación (UE) 2019/1335 del Banco Central Europeo, de 7 de junio de 2019, por la que se modifica la Orientación (UE) 2018/876 sobre RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*) (BCE/2019/17).
- Orientación (UE) 2020/381 del Banco Central Europeo, de 21 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orientación (UE) 2017/2335, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2020/11).

ANEJO 3 TEMAS DE INTERÉS TRATADOS EN ANTERIORES MEMORIAS DE LA CIR¹

Tema	Año	Formato	Página
Esquema de declaración reducida para las nuevas entidades declarantes	2019	Esquema 1.1	25
Conciliación de la información granular y la información agregada	2019	Recuadro 1.1	28
Acceso a los informes de riesgos por personas distintas del titular	2019	Recuadro 3.1	62
Uso de los datos de la CIR por Supervisión	2019	Recuadro 3.2	72
Estructura de la información granular sobre activos adjudicados o recibidos en pago de deudas	2019	Recuadro 4.1	81
Envío de información a la CIR y a AnaCredit: fechas relevantes	2018	Esquema 1.1	25
Controles de calidad en la información recibida en la CIR	2018	Recuadro 1.1	28
Revisión de la actuación de la entidades en relación con las solicitudes de informes de riesgos a la CIR	2018	Recuadro 3.1	58
Detalle de los informes de riesgos	2018	Esquema 3.1	60
Procedimiento para la admisión de reclamaciones	2018	Esquema 3.2	63
Flujo de información durante la gestión de una reclamación	2018	Esquema 3.3	64
Criterios en la resolución de reclamaciones: Adjudicación de inmueble hipotecado en procedimiento judicial y dación en pago Diferencia entre prescripción y plazo de conservación de datos en la CIR Disolución de condominio, divorcio, acuerdos privados entre titulares y su reflejo en la CIR Operaciones reestructuradas Declaración de obligados al pago de efectos Titulización de deuda	2018	Capítulo 3	66-68
Uso de los datos de la CIR en la elaboración de la deuda de las Administraciones Públicas según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo	2018	Recuadro 3.2	71
Derechos de los titulares de riesgos y su relación con la normativa de protección de datos	2018	Recuadro 4.1	82
RIAD, la base de datos centralizada sobre datos de identificación y referencia de agentes económicos	2018	Recuadro 4.2	84
Integración de los requerimientos de AnaCredit en el esquema de información de la CIR	2017	Esquema 1.1	16
La CIR y su papel fundamental en el desarrollo del sistema interno de evaluación crediticia del Banco de España	2017	Recuadro 2.1	39
Características principales de la base de datos AnaCredit	2017	Capítulo 3	47
AnaCredit y el esquema de información de la CIR. Hitos relevantes	2017	Esquema 3.1	48
Relación de variables que se han de declarar según la Circular 1/2013	2017	Anejo 1	53
Anejo estadístico histórico (CIR-95)	2017	Anejo 2	59
La Circular 1/2013 en comparación con la Circular 3/1995	2016	Recuadro 1.1	17
Intercambio de información con otras centrales de riesgos de la UE	2016	Capítulo 1	18
La CIR y su papel fundamental en el desarrollo de las pruebas de resistencia	2016	Recuadro 3.1	43
La CIR según lo establecido en la Circular 1/2013	2015	Recuadro 1.1	14
Antecedentes de AnaCredit	2015	Capítulo 4	43
Reglamento de AnaCredit	2015	Capítulo 4	44
Rasgos generales de AnaCredit	2015	Recuadro 4.2	46

¹ En el sitio web del Banco de España están disponibles todas las memorias de la CIR que se publican desde 2005: https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_de_la_Ce/.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Motivos escultóricos del extremo de la fachada del paseo del Prado en dirección a la fachada de Cibeles. Autor: Luis Asín. © Banco de España	PORTADA
Gobernador del Banco de España. Autor: Daniel Santamaría. © Banco de España	8
Chafalán de Rafael Moneo. Autor: Luis Asín. © Banco de España	18
Vista parcial del Banco de España en el paseo del Prado. Autor: Luis Asín. © Banco de España	30
Vista frontal de la fachada del Banco de España situada en el paseo del Prado. Autor: Luis Asín. © Banco de España	54
Fachada del Banco de España situada en el lateral de la calle de los Madrazo. Autor: Luis Asín. © Banco de España	80
Fragmento del relieve de un entrepañó de la fachada del Banco de España en la calle de Alcalá y remate sobre el Pilastrón. Autor: Luis Asín. © Banco de España	92

PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España publica distintos tipos de documentos que proporcionan información sobre su actividad (informes económicos, información estadística, trabajos de investigación, etc.). La lista completa de las publicaciones del Banco de España se encuentra en su sitio web, en <https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/Relacionados/Fic/Catalogopublicaciones.pdf>.

La mayor parte de estos documentos están disponibles en formato PDF y se pueden descargar gratuitamente en el sitio web del Banco de España, en <https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/>. Los restantes pueden solicitarse a edicionpublicaciones@bde.es.

Se permite la reproducción para fines docentes
o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.

© Banco de España, Madrid, 2021

